



Asamblea General

Distr. general
24 de julio de 2024
Español
Original: francés/inglés

Septuagésimo octavo período de sesiones

Tema 50 del programa

**Prácticas y actividades de asentamiento israelíes que
afectan a los derechos del pueblo palestino y otros
habitantes árabes de los territorios ocupados**

Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas que se derivan de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental

Nota del Secretario General

1. En la continuación de la 56ª sesión plenaria de su septuagésimo séptimo período de sesiones, que tuvo lugar el 30 de diciembre de 2022, la Asamblea General, en su resolución [77/247](#), decidió, de conformidad con el Artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas, solicitar a la Corte Internacional de Justicia, en virtud del Artículo 65 del Estatuto de la Corte, que emitiera una opinión consultiva sobre las siguientes cuestiones, teniendo en cuenta las normas y los principios del derecho internacional, lo cual incluye la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos, y la opinión consultiva de la Corte de fecha 9 de julio de 2004:

a) “¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de que Israel continúe violando el derecho del pueblo palestino a la libre determinación, de sus prolongados actos de ocupación, asentamiento y anexión del territorio palestino ocupado desde 1967, incluidas las medidas destinadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto de la Ciudad Santa de Jerusalén, y de la aprobación por Israel de legislación y medidas discriminatorias conexas?”;

b) “¿Cómo afectan las políticas y prácticas de Israel que se mencionan en el párrafo 18 a) al estatuto jurídico de la ocupación y qué consecuencias jurídicas se derivan de ese estatuto para todos los Estados y para las Naciones Unidas?”

2. El 19 de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia emitió su opinión consultiva sobre las mencionadas cuestiones.

3. El 24 de julio de 2024 recibí el testimonio de esa opinión consultiva de la Corte debidamente firmado y sellado.



4. Por la presente transmito a la Asamblea General la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia el 19 de julio de 2024 sobre el asunto relativo a las *Consecuencias jurídicas que se derivan de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental*.

5. Las opiniones individuales, opiniones separadas y declaraciones anexas a la opinión consultiva se publicarán como adición a la presente nota.

19 DE JULIO DE 2024

OPINIÓN CONSULTIVA

**CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE SE DERIVAN DE LAS POLÍTICAS Y PRÁCTICAS
DE ISRAEL EN EL TERRITORIO PALESTINO OCUPADO,
INCLUIDA JERUSALÉN ORIENTAL**

ÍNDICE

	<i>Párrafos</i>
CRONOLOGÍA DE LAS ACTUACIONES	1-21
I. COMPETENCIA Y DISCRECIONALIDAD	22-50
A. Competencia	23-29
B. Discrecionalidad	30-49
1. Cuestión de si la solicitud se refiere a una controversia entre dos partes, una de las cuales no ha dado su consentimiento respecto de la competencia de la Corte	33-35
2. Cuestión de si la opinión de la Corte serviría de ayuda a la Asamblea General en el desempeño de sus funciones	36-37
3. Cuestión de si la opinión de la Corte podría socavar el proceso de negociación entre Israel y Palestina	38-40
4. Cuestión de si una opinión consultiva sería perjudicial para la labor del Consejo de Seguridad	41-43
5. Cuestión de si la Corte dispone de información suficiente que le permita emitir una opinión consultiva	44-47
6. Cuestión de si las preguntas están formuladas de manera sesgada	48-49
II. CONTEXTO GENERAL	51-71
III. ALCANCE Y SENTIDO DE LAS PREGUNTAS PLANTEADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL	72-83
IV. DERECHO APLICABLE	84-102
V. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE ISRAEL EN EL TERRITORIO PALESTINO OCUPADO	103-243
A. Cuestión de la ocupación prolongada	104-110
B. Política de asentamientos	111-156
1. Sinopsis	111-114
2. Traslado de la población civil	115-119
3. Confiscación o requisa de tierras	120-123
4. Explotación de los recursos naturales	124-133
5. Extensión del derecho israelí	134-141
6. Desplazamiento forzoso de la población palestina	142-147
7. Violencia contra los palestinos	148-154
8. Conclusión sobre la política de asentamientos de Israel	155-156
C. Cuestión de la anexión del Territorio Palestino Ocupado	157-179
1. Concepto de anexión	158-161
2. Actos realizados por Israel que equivalen a una anexión	162-173
3. Prohibición de adquisición de territorio por la fuerza	174-179
D. Cuestión de la legislación y las medidas discriminatorias	180-229
1. Alcance de la pregunta <i>a)</i>	180-184
2. Concepto de discriminación	185-191
3. Política de permisos de residencia	192-197
4. Restricciones a la circulación	198-206

5.	Demolición de bienes	207-222
a)	<i>Demoliciones punitivas</i>	208-213
b)	<i>Demoliciones por falta de permiso de construcción</i>	214-222
6.	Conclusión sobre la legislación y las medidas discriminatorias de Israel	223-229
E.	Cuestión de la libre determinación	230-243
VI.	EFFECTOS DE LAS POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE ISRAEL EN EL ESTATUTO JURÍDICO DE LA OCUPACIÓN	244-264
A.	Alcance de la primera parte de la pregunta <i>b)</i> y derecho aplicable	244-251
B.	Manera en que las políticas y prácticas de Israel afectan al estatuto jurídico de la ocupación	252-258
C.	Legalidad de la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado	259-264
VII.	CONSECUENCIAS JURÍDICAS DERIVADAS DE LAS POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE ISRAEL Y DE LA ILEGALIDAD DE LA PRESENCIA CONTINUADA DE ISRAEL EN EL TERRITORIO PALESTINO OCUPADO	265-283
A.	Consecuencias jurídicas para Israel	267-272
B.	Consecuencias jurídicas para los demás Estados	273-279
C.	Consecuencias jurídicas para las Naciones Unidas	280-283
	PARTE DISPOSITIVA	285

CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

AÑO 2024

2024
19 de julio
Lista general
núm. 186

19 de julio de 2024

CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE SE DERIVAN DE LAS POLÍTICAS
Y PRÁCTICAS DE ISRAEL EN EL TERRITORIO PALESTINO
OCUPADO, INCLUIDA JERUSALÉN ORIENTAL

Competencia de la Corte para emitir la opinión consultiva solicitada.

Artículo 65, párrafo 1, del Estatuto — Artículo 96, párrafo 1, de la Carta — Competencia de la Asamblea General para solicitar opiniones consultivas — Solicitud formulada de conformidad con la Carta — Las cuestiones planteadas a la Corte tienen carácter jurídico.

La Corte es competente para emitir la opinión consultiva solicitada.

* *

Discrecionalidad de la Corte para decidir si procede emitir una opinión.

Artículo 65, párrafo 1, del Estatuto — Solo “razones imperiosas” pueden hacer que la Corte se abstenga de ejercer su función judicial.

Argumento según el cual la solicitud se refiere a una controversia entre dos partes, una de las cuales no ha dado su consentimiento respecto de la competencia de la Corte — El objeto de la solicitud de la Asamblea General no es únicamente una cuestión bilateral entre Israel y Palestina — La cuestión es de especial interés y preocupación para las Naciones Unidas — Emitir la opinión solicitada no tiene por efecto eludir el principio de que la solución judicial está sujeta al consentimiento.

Argumento según el cual la respuesta de la Corte no ayudaría a la Asamblea General en el desempeño de sus funciones — La determinación de la utilidad de la opinión corresponde al órgano solicitante.

Argumento según el cual la Corte podría socavar el proceso de negociación entre Israel y Palestina — La cuestión del posible efecto adverso es una conjetura — La Corte no puede especular sobre los efectos de su opinión.

Argumento según el cual una opinión consultiva sería perjudicial para la labor del Consejo de Seguridad — La responsabilidad primordial del Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales no es necesariamente exclusiva — La Asamblea General es competente para tratar cuestiones relativas a la paz y la seguridad internacionales, como las que se plantean en las preguntas.

Argumento según el cual la Corte carece de información suficiente que le permita emitir una opinión consultiva — La Corte considera que dispone de información suficiente sobre los hechos.

Argumento según el cual las preguntas están formuladas de manera sesgada — Corresponde a la Corte apreciar y evaluar la idoneidad de la formulación de las preguntas — La Corte también está facultada para determinar por sí misma el alcance y el sentido de las preguntas.

No hay razones imperiosas para que la Corte se abstenga de emitir la opinión solicitada por la Asamblea General.

* *

Alcance y sentido de las preguntas planteadas por la Asamblea General.

Alcance material — La pregunta a) se refiere a tres tipos de conducta que la pregunta b) describe como políticas y prácticas de Israel — La pregunta a) presupone que esas políticas y prácticas son contrarias al derecho internacional — Sin embargo, corresponde a la Corte determinar la legalidad de las políticas y prácticas a que se refiere la Asamblea General — Métodos de prueba aplicados por la Corte — No es necesario que la Corte formule conclusiones de hecho con respecto a incidentes específicos.

Alcance territorial — El territorio palestino ocupado desde 1967 abarca la Ribera Occidental, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza — El “Territorio Palestino Ocupado” constituye, desde el punto de vista jurídico, una entidad territorial única.

Alcance temporal — Nada impide que la Corte tenga en cuenta hechos anteriores a la ocupación — Las políticas y prácticas que se contemplan en la solicitud no incluyen la conducta de Israel en la Franja de Gaza en respuesta al ataque llevado a cabo el 7 de octubre de 2023.

En la primera parte de la pregunta b) se pide a la Corte que determine la forma en que las políticas y prácticas de Israel afectan al estatuto jurídico de la ocupación y, por tanto, a la legalidad de la presencia continuada de Israel, como Potencia ocupante, en el Territorio Palestino Ocupado.

* *

Derecho aplicable.

Estatuto del Territorio Palestino Ocupado — La Ribera Occidental y Jerusalén Oriental son territorios ocupados en los que Israel tiene el estatuto de Potencia ocupante — Examen del estatuto de la Franja de Gaza — Las obligaciones de Israel en la Franja de Gaza son proporcionales a su grado de control efectivo.

Pertinencia de la prohibición de adquisición de territorio mediante la amenaza o el uso de la fuerza y del derecho de los pueblos a la libre determinación — Pertinencia particular del derecho internacional humanitario — El Cuarto Convenio de Ginebra es aplicable en el Territorio Palestino Ocupado — El Reglamento de La Haya es vinculante para Israel — Derecho internacional de los derechos humanos — Israel está vinculado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales — Israel está obligado a respetar la Convención contra la Discriminación Racial — Cuestión de los Acuerdos de Oslo — Los Acuerdos de Oslo no pueden entenderse en el sentido de que limitan las obligaciones de Israel en virtud de las normas pertinentes de derecho internacional aplicables en el Territorio Palestino Ocupado.

* *

Políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado.

La pregunta a) se refiere en parte a las consecuencias jurídicas que se derivan de los “prolongados actos de ocupación” del Territorio Palestino Ocupado realizados por Israel — La Potencia ocupante debe administrar el territorio en beneficio de la población local — La naturaleza y el alcance de los poderes y responsabilidades de la Potencia ocupante siempre parten de la premisa de que la ocupación es una situación temporal que responde a una necesidad militar — La ocupación no puede transferir el título de soberanía a la Potencia ocupante — El hecho de que una ocupación sea prolongada puede influir en la justificación, en virtud del derecho internacional,

de la presencia continuada de la Potencia ocupante en el territorio ocupado — La Corte debe examinar las políticas y prácticas de Israel, así como su presencia continuada en el Territorio Palestino Ocupado, en este contexto.

Política de asentamientos.

Desde la retirada de sus asentamientos de la Franja de Gaza en 2005, Israel ha continuado su política de asentamientos en la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental — La Corte debe limitar su análisis a la política de asentamientos que Israel sigue aplicando en la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental.

Traslado por Israel de colonos a la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental y mantenimiento de su presencia en contra de lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra — Expansión de los asentamientos de Israel en la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental basada en la confiscación o requisa de grandes extensiones de tierra — Políticas territoriales de Israel no conformes con los artículos 46, 52 y 55 del Reglamento de La Haya.

Explotación de los recursos naturales — La Potencia ocupante solo es administradora y usufructuaria de los recursos naturales del territorio ocupado y debe salvaguardar el capital de esos recursos — La utilización por la Potencia ocupante de los recursos naturales no debe exceder los límites de lo necesario para los fines de la ocupación — Obligación permanente de la Potencia ocupante de garantizar el acceso adecuado de la población local a los alimentos, incluida el agua — La utilización de los recursos naturales en el territorio ocupado debe ser sostenible — Elementos que demuestran que Israel explota los recursos naturales de la zona C en beneficio de su propia población y en perjuicio de la población palestina local — La utilización por Israel de los recursos naturales del Territorio Palestino Ocupado es incompatible con las obligaciones que le incumben en virtud del derecho internacional.

Extensión del derecho israelí a la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental — En virtud del artículo 43 del Reglamento de La Haya, la Potencia ocupante debe, en principio, respetar las leyes vigentes en el territorio ocupado, salvo impedimento absoluto — Excepciones previstas en el segundo párrafo del artículo 64 del Cuarto Convenio de Ginebra — La extensión del derecho israelí a la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental no está justificada en virtud de la disposición pertinente del Cuarto Convenio de Ginebra — Autoridad reglamentaria ejercida por Israel de forma incompatible con la norma que figura en el artículo 43 del Reglamento de La Haya y el artículo 64 del Cuarto Convenio de Ginebra.

Desplazamiento forzoso de la población palestina — La confiscación a gran escala de tierras y la privación de acceso a los recursos naturales, así como las medidas adoptadas por las fuerzas militares israelíes, provocan la partida de la población palestina de la zona C — Las políticas y prácticas de Israel son contrarias a la prohibición de traslado forzoso de la población protegida en virtud del primer párrafo del artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra.

Violencia contra los palestinos — El hecho de que Israel no impida o castigue sistemáticamente los ataques de los colonos contra la vida o la integridad física de los palestinos y el uso excesivo de la fuerza por Israel contra los palestinos son incompatibles con sus obligaciones en virtud del artículo 46 del Reglamento de La Haya, el primer párrafo del artículo 27 del Cuarto Convenio de Ginebra y el artículo 6, párrafo 1, y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Los asentamientos israelíes en la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental y el régimen asociado a ellos se han establecido y se mantienen en violación del derecho internacional.

Cuestión de la anexión del Territorio Palestino Ocupado.

Una conducta de la Potencia ocupante que muestre la intención de ejercer un control permanente sobre el territorio ocupado puede ser indicativa de un acto de anexión — Las políticas y prácticas de Israel, especialmente en Jerusalén Oriental y la zona C de la Ribera Occidental, están concebidas para mantenerse indefinidamente y crear efectos irreversibles sobre el terreno — Las políticas y prácticas de Israel equivalen a la anexión de amplias partes del Territorio Palestino Ocupado — Prohibición del uso de la fuerza y su corolario, el principio de no adquisición de territorio por la fuerza.

Cuestión de la legislación y las medidas discriminatorias.

Concepto de discriminación — La Corte debe determinar si la legislación y las medidas adoptadas por Israel establecen diferencias, entre otras cosas, por motivos de raza, religión o pertenencia étnica entre los palestinos y los miembros de otros grupos en relación con su disfrute de los derechos humanos — Cuestión de si la diferencia de trato está, no obstante, justificada, en el sentido de que es razonable y objetiva y responde a una finalidad legítima de interés público.

La política de permisos de residencia de Israel equivale a una discriminación prohibida en virtud de los artículos 2, párrafo 2, 23 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 2, párrafo 2, y 10, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales — Las restricciones impuestas por Israel a la circulación de los palestinos en el Territorio Palestino Ocupado equivalen a una discriminación prohibida — La práctica de Israel de demoler bienes palestinos en la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental, incluidas las demoliciones punitivas y las demoliciones por falta de permiso de construcción, equivale a una discriminación prohibida — La legislación y las medidas de Israel imponen y sirven para mantener en la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental una separación casi completa entre las comunidades de colonos y las comunidades palestinas — La legislación y las medidas de Israel constituyen una violación del artículo 3 de la Convención contra la Discriminación Racial.

Cuestión de la libre determinación.

Efectos de las políticas y prácticas de Israel en el ejercicio del derecho del pueblo palestino a la libre determinación — En casos de ocupación extranjera, el derecho a la libre determinación constituye una norma imperativa de derecho internacional — Obligación de Israel, como Potencia ocupante, de no impedir que el pueblo palestino ejerza su derecho a la libre determinación — La política de asentamientos de Israel y su anexión de amplias partes del Territorio Palestino Ocupado viola la integridad de ese territorio — Las políticas y prácticas de Israel menoscaban el derecho del pueblo palestino a determinar libremente su estatuto político y a proseguir su desarrollo económico, social y cultural — El carácter prolongado de las políticas y prácticas ilegales de Israel agrava la violación del derecho del pueblo palestino a la libre determinación.

* *

Efectos de las políticas y prácticas de Israel en el estatuto jurídico de la ocupación.

Alcance de la primera parte de la pregunta b) y derecho aplicable.

La primera parte de la pregunta b) se refiere a la manera en que las políticas y prácticas de Israel afectan al estatuto jurídico de la ocupación y, por tanto, a la legalidad de la presencia continuada de Israel, como Potencia ocupante, en el Territorio Palestino Ocupado — Pertinencia del ius ad bellum y del derecho de los pueblos a la libre determinación.

Manera en que las políticas y prácticas de Israel afectan al estatuto jurídico de la ocupación.

La afirmación por Israel de su soberanía sobre determinadas partes del Territorio Palestino Ocupado y la anexión de tales partes constituyen una violación de la prohibición de adquisición de territorio por la fuerza — Israel no tiene derecho a la soberanía sobre ninguna parte del Territorio Palestino Ocupado ni puede ejercer poderes soberanos en él — Las preocupaciones de Israel en materia de seguridad no pueden prevalecer sobre el principio de prohibición de la adquisición de territorio por la fuerza — Israel obstaculiza el ejercicio por el pueblo palestino de su derecho a la libre determinación — Violación de principios fundamentales del derecho internacional — Efecto directo sobre la legalidad de la presencia continuada de Israel, como Potencia ocupante — La presencia de Israel en el Territorio Palestino Ocupado es ilegal — La ilegalidad se refiere a la totalidad del territorio palestino ocupado por Israel en 1967 — No hay excepción en razón de los Acuerdos de Oslo — La ilegalidad de la presencia no exime a Israel de sus obligaciones y responsabilidades en virtud del derecho internacional.

* *

Consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel y de la ilegalidad de la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado.

Consecuencias jurídicas para Israel.

Israel tiene la obligación de poner fin a su presencia en el Territorio Palestino Ocupado lo antes posible — Obligación de cesar de inmediato cualquier nueva actividad de asentamiento — Obligación de derogar todas las leyes y medidas que crean o mantienen la situación ilegal, incluidas las que discriminan al pueblo palestino en el Territorio Palestino Ocupado, así como todas las medidas destinadas a modificar la composición demográfica de cualquier parte del territorio — Obligación de reparar íntegramente los daños causados por los hechos internacionalmente ilícitos de Israel a todas las personas físicas o jurídicas afectadas — Israel sigue teniendo el deber de cumplir su obligación de respetar el derecho del pueblo palestino a la libre determinación y sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos.

Consecuencias jurídicas para los demás Estados.

Todos los Estados deben cooperar con las Naciones Unidas a fin de poner en práctica las modalidades necesarias para asegurar el fin de la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado y la plena realización del derecho del pueblo palestino a la libre determinación — Todos los Estados tienen la obligación de no reconocer como legal la situación derivada de la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado — Obligación de no prestar ayuda o asistencia para mantener la situación creada por la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado — Obligación de distinguir en las relaciones con Israel entre el territorio de Israel y el Territorio Palestino Ocupado.

Consecuencias jurídicas para las Naciones Unidas.

Obligación de no reconocer como legal la situación derivada de la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado — Obligación de distinguir en las relaciones con Israel entre el territorio de Israel y el Territorio Palestino Ocupado — Las modalidades precisas para poner fin a la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado deben ser tratadas por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad.

OPINIÓN CONSULTIVA

Presentes: Presidente SALAM; Vicepresidenta SEBUTINDE; Magistrados TOMKA, ABRAHAM, YUSUF, XUE, BHANDARI, IWASAWA, NOLTE, CHARLESWORTH, BRANT, GÓMEZ ROBLED, CLEVELAND, AURESCU, TLADI; Secretario GAUTIER.

Sobre las consecuencias jurídicas que se derivan de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental,

LA CORTE,

compuesta por los miembros antes mencionados,

emite la siguiente opinión consultiva:

1. Las cuestiones con respecto a las cuales se ha solicitado la opinión consultiva de la Corte figuran en la resolución 77/247, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (en adelante, la “Asamblea General”) el 30 de diciembre de 2022. Mediante carta de fecha 17 de enero de 2023, recibida en la Secretaría el 19 de enero de 2023, el Secretario General de las Naciones Unidas comunicó oficialmente a la Corte la decisión adoptada por

la Asamblea General de someter esas cuestiones a la Corte para que emitiera una opinión consultiva. Se adjuntaron a la carta copias certificadas conformes de los textos en francés e inglés de la resolución. El párrafo 18 de la resolución dice lo siguiente:

“La Asamblea General,

.....

18. *Decide*, de conformidad con el Artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas, solicitar a la Corte Internacional de Justicia, en virtud del Artículo 65 del Estatuto de la Corte, que emita una opinión consultiva sobre las siguientes cuestiones, teniendo en cuenta las normas y los principios del derecho internacional, lo cual incluye la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos, y la opinión consultiva de la Corte de fecha 9 de julio de 2004:

- a) ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de que Israel continúe violando el derecho del pueblo palestino a la libre determinación, de sus prolongados actos de ocupación, asentamiento y anexión del territorio palestino ocupado desde 1967, incluidas las medidas destinadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto de la Ciudad Santa de Jerusalén, y de la aprobación por Israel de legislación y medidas discriminatorias conexas?
- b) ¿Cómo afectan las políticas y prácticas de Israel que se mencionan en el párrafo 18 a) al estatuto jurídico de la ocupación y qué consecuencias jurídicas se derivan de ese estatuto para todos los Estados y para las Naciones Unidas?”

2. Mediante cartas de fecha 19 de enero de 2023, el Secretario de la Corte puso en conocimiento de todos los Estados con derecho a comparecer ante la Corte la solicitud de la opinión consultiva, de conformidad con el Artículo 66, párrafo 1, del Estatuto.

3. Mediante providencia de fecha 3 de febrero de 2023, la Corte decidió, de conformidad con el Artículo 66, párrafo 2, de su Estatuto, que las Naciones Unidas y sus Estados Miembros, así como el Estado observador de Palestina, podían proporcionar información sobre las cuestiones objeto de la solicitud de opinión consultiva, y fijó el 25 de julio de 2023 como plazo para la presentación de exposiciones escritas sobre esas cuestiones, y el 25 de octubre de 2023 como plazo para que los Estados y organizaciones que hubieran presentado exposiciones escritas pudieran formular observaciones escritas sobre las exposiciones de los demás.

4. Mediante cartas de fecha 6 de febrero de 2023, el Secretario informó a las Naciones Unidas y a sus Estados Miembros, así como al Estado observador de Palestina, de las decisiones de la Corte y les transmitió una copia de la providencia.

5. Al pronunciarse sobre las solicitudes presentadas posteriormente por la Liga de los Estados Árabes, la Organización de Cooperación Islámica y la Unión Africana, la Corte decidió, de conformidad con el Artículo 66 de su Estatuto, que esas tres organizaciones internacionales podían proporcionar información sobre las cuestiones que se le habían sometido y que, por tanto, podrían hacerlo dentro de los plazos fijados por la Corte.

6. De conformidad con el Artículo 65, párrafo 2, del Estatuto, el Secretario General de las Naciones Unidas, mediante una carta del Asesor Jurídico de las Naciones Unidas de fecha 31 de mayo de 2023, que fue recibida en la Secretaría el 1 de junio de 2023, remitió a la Corte la primera parte de un expediente con documentos que podían arrojar luz sobre las cuestiones formuladas por la Asamblea General. La segunda parte del expediente se recibió en la Secretaría el 23 de junio de 2023, mediante una carta del Asesor Jurídico de las Naciones Unidas de fecha 22 de junio de 2023. A los Estados Miembros de las Naciones Unidas, el Estado observador de Palestina, la Liga de los Estados Árabes, la Organización de Cooperación Islámica y la Unión Africana se les notificaron estas dos comunicaciones los días 2 y 26 de junio de 2023, respectivamente.

7. Dentro del plazo fijado por la Corte en su providencia de 3 de febrero de 2023, presentaron exposiciones escritas en la Secretaría, por orden de recepción, Türkiye, Namibia, Luxemburgo, el Canadá, Bangladesh, Jordania, Chile, Liechtenstein, el Líbano, Noruega, Israel, Argelia, la Liga de los Estados Árabes, la República Árabe Siria, Palestina, la Organización de Cooperación Islámica, Egipto, Guyana, el Japón, la Arabia Saudita, Qatar, Suiza, España, la Federación de Rusia, Italia, el Yemen, Maldivas, los Emiratos Árabes Unidos, Omán, la Unión Africana, el Pakistán, Sudáfrica, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Hungría, el Brasil, Francia, Kuwait,

los Estados Unidos de América, China, Gambia, Irlanda, Belice, Bolivia, Cuba, Mauricio, Marruecos, Chequia, Malasia, Colombia, Indonesia, Guatemala, Nauru, Djibouti, el Togo y Fiji.

8. Mediante comunicación de 28 de julio de 2023, la Secretaría informó a los Estados Miembros de las Naciones Unidas que habían presentado exposiciones escritas y al Estado observador de Palestina, así como a la Liga de los Estados Árabes, la Organización de Cooperación Islámica y la Unión Africana, de la lista de participantes que habían presentado exposiciones escritas en el procedimiento e indicó que dichas exposiciones podían descargarse de un portal web específico gestionado por la Secretaría.

9. El Presidente de la Corte autorizó, con carácter excepcional, la presentación de la exposición escrita del Senegal el 1 de agosto de 2023 y de la exposición escrita de Zambia el 4 de agosto de 2023, una vez expirado el plazo pertinente.

10. Mediante carta de fecha 7 de agosto de 2023, el Secretario informó a las Naciones Unidas, y a aquellos de sus Estados Miembros que no habían presentado exposiciones escritas, de que se habían presentado exposiciones escritas en la Secretaría.

11. Mediante cartas de fecha 18 de octubre de 2023, el Secretario informó a las Naciones Unidas, sus Estados Miembros y el Estado observador de Palestina, así como a la Liga de los Estados Árabes, la Organización de Cooperación Islámica y la Unión Africana, de que la Corte había decidido celebrar un procedimiento oral sobre la solicitud de opinión consultiva, que se iniciaría el 19 de febrero de 2024. Se precisó que, durante el procedimiento oral, podrían presentar declaraciones orales y observaciones las Naciones Unidas y sus Estados Miembros (con independencia de que hubieran presentado exposiciones escritas y, en su caso, observaciones escritas) y el Estado observador de Palestina, así como la Liga de los Estados Árabes, la Organización de Cooperación Islámica y la Unión Africana. El Secretario también los invitó a que informaran a la Secretaría, a más tardar el 15 de diciembre de 2023, de si tenían intención de participar en el procedimiento oral.

12. Mediante cartas de fecha 31 de octubre de 2023, el Secretario informó a los Estados Miembros de las Naciones Unidas, el Estado observador de Palestina, la Liga de los Estados Árabes, la Organización de Cooperación Islámica y la Unión Africana de que la Secretaría de las Naciones Unidas había facilitado a la Corte nuevos documentos y algunas traducciones de documentos ya presentados, como complemento del expediente presentado de conformidad con el artículo 65, párrafo 2, del Estatuto.

13. Dentro del plazo fijado por la Corte en su providencia de 3 de febrero de 2023, presentaron observaciones escritas en la Secretaría, por orden de recepción, Jordania, la Organización de Cooperación Islámica, Qatar, Belice, Bangladesh, Palestina, los Estados Unidos de América, Indonesia, Chile, la Liga de los Estados Árabes, Egipto, Argelia, Guatemala y Namibia.

14. Una vez recibidas dichas observaciones escritas, el Secretario, mediante comunicaciones de fecha 30 de octubre de 2023, informó a los Estados Miembros de las Naciones Unidas, el Estado observador de Palestina y las organizaciones internacionales que habían presentado exposiciones escritas de que se habían presentado observaciones escritas y de que dichas observaciones podían descargarse de un portal web específico gestionado por la Secretaría.

15. El 2 de noviembre de 2023, el Presidente de la Corte autorizó, con carácter excepcional, la presentación de las observaciones escritas del Pakistán, una vez expirado el plazo pertinente. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales que habían presentado exposiciones escritas y el Estado observador de Palestina fueron informados de ello mediante una comunicación de la misma fecha.

16. Mediante comunicaciones de fecha 2 de noviembre de 2023, el Secretario informó a las Naciones Unidas y a aquellos de sus Estados Miembros que no habían participado en el procedimiento escrito de que las exposiciones escritas y las observaciones escritas presentadas en este procedimiento podían descargarse de un portal web específico gestionado por la Secretaría.

17. Mediante comunicaciones de fecha 20 de noviembre de 2023, el Secretario informó a las Naciones Unidas, sus Estados Miembros y el Estado observador de Palestina, así como a la Liga de los Estados Árabes, la Organización de Cooperación Islámica y la Unión Africana, de que ciertas organizaciones no gubernamentales habían presentado exposiciones escritas en este procedimiento consultivo por iniciativa propia, de conformidad

con la Directriz sobre la Práctica XII, y de que dichas exposiciones se habían puesto a su disposición en un portal web gestionado por la Secretaría.

18. Mediante cartas de fecha 9 de enero de 2024, el Secretario comunicó a los Estados Miembros de las Naciones Unidas participantes en el procedimiento oral y al Estado observador de Palestina, así como a la Liga de los Estados Árabes, la Organización de Cooperación Islámica y la Unión Africana, la lista de participantes en el procedimiento oral y adjuntó un calendario detallado de dicho procedimiento. En las mismas cartas, también los informó de ciertas disposiciones prácticas relativas a la organización del procedimiento oral.

19. Mediante cartas de fecha 15 de enero de 2024, el Secretario comunicó la lista de participantes en el procedimiento oral a las Naciones Unidas y a aquellos de sus Estados Miembros que no participaban en él, y adjuntó un calendario detallado de dicho procedimiento.

20. De conformidad con el artículo 106 de su Reglamento, la Corte decidió poner a disposición del público las exposiciones y observaciones escritas presentadas ante ella tras la apertura del procedimiento oral. Las exposiciones y observaciones escritas de los Estados no participantes en el procedimiento oral se pusieron a disposición del público el primer día de dicho procedimiento. Las exposiciones y observaciones escritas de los Estados y organizaciones participantes en el procedimiento oral se pusieron a disposición del público al final del día en que presentaron sus exposiciones orales.

21. Durante el procedimiento oral, celebrado los días 19, 20, 21, 22, 23 y 26 de febrero de 2024, la Corte escuchó las siguientes exposiciones orales, en el orden que se indica:

por el Estado de Palestina:

Excmo. Sr. Riad Malki, Ministro de Relaciones Exteriores y
Expatriados del Estado de Palestina,

Sr. Andreas Zimmermann, LLM (Harvard), Profesor de la
Universidad de Potsdam, miembro de la Corte
Permanente de Arbitraje,

Sr. Paul S. Reichler, Abogado, 11 King's Bench Walk,
miembro del Colegio de la Abogacía del Tribunal
Supremo de los Estados Unidos,

Excma. Sra. Namira Negm, Doctora y Embajadora,

Sr. Philippe Sands, KC, Profesor de Derecho del University
College de Londres, Abogado, 11 King's Bench Walk,

Sr. Alain Pellet, Profesor Emérito de la Universidad de París
Nanterre, ex-Presidente de la Comisión de Derecho
Internacional, miembro y ex-Presidente del Instituto de
Derecho Internacional,

Excmo. Sr. Riyad Mansour, Ministro y Representante
Permanente del Estado de Palestina ante las Naciones
Unidas, Nueva York;

por la República de Sudáfrica:

Excmo. Sr. Vusimuzi Madonsela, Embajador de la República
de Sudáfrica ante el Reino de los Países Bajos,

Sr. Pieter Andreas Stemmet, Asesor Jurídico Jefe del Estado
(Derecho Internacional) interino, Departamento de
Relaciones Internacionales y Cooperación;

*por la República Argelina
Democrática y Popular:*

Sr. Ahmed Laraba, jurista, miembro de la Comisión de
Derecho Internacional;

por el Reino de la Arabia Saudita:

Excmo. Sr. Ziad Al Atiyah, Embajador del Reino de la
Arabia Saudita ante el Reino de los Países Bajos;

<i>por el Reino de los Países Bajos:</i>	Sr. René Lefeber, Asesor Jurídico, Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos, Representante del Gobierno del Reino de los Países Bajos;
<i>por la República Popular de Bangladesh:</i>	Excmo. Sr. Riaz Hamidullah, Embajador de la República Popular de Bangladesh ante el Reino de los Países Bajos;
<i>por el Reino de Bélgica:</i>	Sr. Piet Heirbaut, Jurisconsulto, Director General de Asuntos Jurídicos, Servicio Público Federal de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Cooperación para el Desarrollo del Reino de Bélgica,
	Sr. Vaïos Koutroulis, Profesor de Derecho Internacional de la Universidad Libre de Bruselas;
<i>por Belice:</i>	Excmo. Sr. Assad Shoman, Embajador, Enviado Especial del Primer Ministro de Belice encargado de cuestiones de soberanía,
	Sra. Philippa Webb, Profesora de Derecho Internacional Público del King's College de Londres, miembro de los Colegios de la Abogacía de Belice, Inglaterra y Gales y el estado de Nueva York, Twenty Essex,
	Sr. Ben Juratowitch, KC, miembro de los Colegios de la Abogacía de Belice, París e Inglaterra y Gales, Essex Court Chambers;
<i>por el Estado Plurinacional de Bolivia:</i>	Excmo. Sr. Roberto Calzadilla Sarmiento, Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia ante el Reino de los Países Bajos;
<i>por la República Federativa del Brasil:</i>	Sra. Maria Clara de Paula Tusco, Consejera;
<i>por la República de Chile:</i>	Sra. Ximena Fuentes Torrijo, Representante Especial de la República de Chile;
<i>por la República de Colombia:</i>	Sra. Andrea Jiménez Herrera, Ministra Consejera, Coordinadora del Grupo de Asuntos ante la Corte Internacional de Justicia del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia;
<i>por la República de Cuba:</i>	Excma. Sra. Anayansi Rodríguez Camejo, Viceministra de Relaciones Exteriores;
<i>por la República Árabe de Egipto:</i>	Sra. Jasmine Moussa, Consejera Jurídica, Gabinete del Ministro de Relaciones Exteriores, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Árabe de Egipto;
<i>por los Emiratos Árabes Unidos:</i>	Excma. Sra. Lana Nusseibeh, Ministra Adjunta de Asuntos Políticos, Representante Permanente de los Emiratos Árabes Unidos ante las Naciones Unidas;
<i>por los Estados Unidos de América:</i>	Sr. Richard C. Visek, Asesor Jurídico interino, Departamento de Estado de los Estados Unidos;
<i>por la Federación de Rusia:</i>	Excmo. Sr. Vladimir Tarabrin, Embajador de la Federación de Rusia ante el Reino de los Países Bajos;

<i>por la República Francesa:</i>	Sr. Diégo Colas, Asesor Jurídico, Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores;
<i>por la República de Gambia:</i>	Excmo. Sr. Dawda A. Jallow, Fiscal General y Ministro de Justicia;
<i>por la República Cooperativa de Guyana:</i>	Sr. Edward Craven, Abogado, Matrix Chambers, Londres;
<i>por Hungría:</i>	Sr. Attila Hidegh, Vicesecretario de Estado de Cooperación Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de Hungría, Sr. Gergő Kocsis, Jefe del Departamento de las Naciones Unidas;
<i>por la República Popular China:</i>	Excmo. Sr. Ma Xinmin, Asesor Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, Director General del Departamento de Tratados y Derecho del Ministerio de Relaciones Exteriores;
<i>por la República Islámica del Irán:</i>	Excmo. Sr. Reza Najafi, Viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Ministerio de Relaciones Exteriores;
<i>por la República del Iraq:</i>	Excmo. Sr. Hayder Albarrak, Jefe del Departamento Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores;
<i>por Irlanda:</i>	Sr. Rossa Fanning, SC, Fiscal General;
<i>por el Japón:</i>	Sr. Tomohiro Mikanagi, Asesor Jurídico, Director General de la Oficina de Asuntos Jurídicos Internacionales, Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón, Sr. Dapo Akande, Titular de la Cátedra Chichele de Derecho Internacional Público de la Universidad de Oxford, miembro del Colegio de la Abogacía de Inglaterra y Gales, Essex Court Chambers;
<i>por el Reino Hachemita de Jordania:</i>	Excmo. Sr. Ayman Safadi, Vice Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores y Expatriados del Reino Hachemita de Jordania, Excmo. Sr. Ahmad Ziadat, Ministro de Justicia del Reino Hachemita de Jordania, Sir Michael Wood, KCMG, KC, miembro del Colegio de la Abogacía de Inglaterra y Gales, Twenty Essex, Londres;
<i>por el Estado de Kuwait:</i>	Excmo. Sr. Ali Ahmad Ebraheem S. Al-Dafiri, Embajador del Estado de Kuwait ante el Reino de los Países Bajos, Agente del Estado de Kuwait, Excmo. Sr. Tareq M. A. M. Al-Banai, Representante Permanente del Estado de Kuwait ante las Naciones Unidas, Excma. Sra. Tahani R. F. Al-Nasser, Ministra Adjunta de Relaciones Exteriores para Asuntos Jurídicos del Estado de Kuwait;

<i>por la República Libanesa:</i>	Excmo. Sr. Abdel Sattar Issa, Embajador de la República Libanesa ante el Reino de los Países Bajos;
<i>por el Estado de Libia:</i>	Sr. Ahmed El Gehani, Representante de Libia ante la Corte Penal Internacional, Sr. Nasser F. O. Algheitta, Consejero Jurídico de la Misión Permanente del Estado de Libia ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra;
<i>por el Gran Ducado de Luxemburgo:</i>	Sr. Alain Germeaux, Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos del Gran Ducado de Luxemburgo;
<i>por Malasia:</i>	Excmo. Sr. Dato' Seri Utama Haji Mohamad Haji Hasan, Ministro de Relaciones Exteriores de Malasia;
<i>por la República de Mauricio:</i>	Excmo. Sr. Jagdish D. Koonjul, Representante Permanente de la República de Mauricio ante las Naciones Unidas, Nueva York, Sr. Pierre Klein, Profesor de Derecho Internacional de la Universidad Libre de Bruselas;
<i>por la República de Namibia:</i>	Excma. Sra. Yvonne Dausab, Ministra de Justicia, Sra. Phoebe Okowa, Profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad de Londres, Consejera Jurídica de Namibia;
<i>por el Reino de Noruega:</i>	Sr. Kristian Jervell, Director General del Departamento Jurídico, Ministerio de Relaciones Exteriores, Excmo. Sr. Rolf Einar Fife, Embajador en Misión Especial, Ministerio de Relaciones Exteriores;
<i>por la Sultanía de Omán:</i>	Excmo. Sr. Sheikh Abdullah bin Salim bin Hamed Al Harthi, Embajador de la Sultanía de Omán ante el Reino de los Países Bajos;
<i>por la República Islámica del Pakistán:</i>	Excmo. Sr. Ahmed Irfan Aslam, Ministro Federal de Derecho y Justicia de la República Islámica del Pakistán;
<i>por la República de Indonesia:</i>	Excma. Sra. Retno L. P. Marsudi, Ministra de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia;
<i>por el Estado de Qatar:</i>	Excmo. Sr. Mutlaq Bin Majed Al-Qahtani, Embajador del Estado de Qatar ante el Reino de los Países Bajos;
<i>por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte:</i>	Sra. Sally Langrish, Representante del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante la Corte Internacional de Justicia, Asesora Jurídica y Directora General de la Asesoría Jurídica, Ministerio de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo, Sr. Dan Sarooshi, Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Oxford, miembro del Colegio de la Abogacía de Inglaterra y Gales, Essex Court Chambers;
<i>por la República de Eslovenia:</i>	Sr. Helmut Hartman, Asesor Jurídico, Embajada de la República de Eslovenia en el Reino de los Países Bajos,

	Sr. Daniel Müller, socio fundador de FAR Avocats, miembro del Colegio de la Abogacía de París;
<i>por la República del Sudán:</i>	Sr. Marwan A. M. Khier, Encargado de Negocios, Embajada de la República del Sudán en el Reino de los Países Bajos,
	Sr. Fabián Raimondo, Profesor Asociado de Derecho Internacional Público de la Universidad de Maastricht, miembro del Colegio de la Abogacía de la ciudad de La Plata, Argentina;
<i>por la Confederación Suiza:</i>	Excmo. Sr. Franz Perrez, Director General, Dirección de Derecho Internacional del Departamento Federal de Relaciones Exteriores;
<i>por la República Árabe Siria:</i>	Sr. Ammar Al Arsan, Jefe de la Misión Permanente de la República Árabe Siria ante la Unión Europea en Bruselas;
<i>por la República de Túnez:</i>	Sr. Slim Laghmani, Profesor de Derecho Internacional Público (jubilado);
<i>por la República de Türkiye:</i>	Excmo. Sr. Ahmet Yıldız, Viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Türkiye;
<i>por la República de Zambia:</i>	Sr. Marshal Mubambe Muchende, Abogado del Estado y Procurador General de la República de Zambia;
<i>por la Liga de los Estados Árabes:</i>	Sr. Abdel Hakim El Rifai, Encargado de Negocios Interino, Misión Permanente de la Liga de los Estados Árabes en Bruselas,
	Sr. Ralph Wilde, Letrado Superior y Abogado;
<i>por la Organización de Cooperación Islámica:</i>	Excmo. Sr. Hissein Brahim Taha, Secretario General de la Organización de Cooperación Islámica,
	Sra. Monique Chemillier-Gendreau, Profesora Emérita de Derecho Público y Ciencias Políticas de la Universidad París Diderot, Abogada;
<i>por la Unión Africana:</i>	Sra. Hajer Gueldich, Consejera Jurídica de la Unión Africana,
	Sr. Mohamed Helal, Profesor de Derecho del Moritz College of Law, Ohio State University, miembro de la Corte Permanente de Arbitraje, miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la Unión Africana;
<i>por el Reino de España:</i>	Sra. Andrea Gavela Llopis, Abogada del Estado Jefe, Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de España,
	Sr. Emilio Pin Godos, Jefe Adjunto de la Asesoría Jurídica Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de España,
	Sr. Santiago Ripol Carulla, Jefe de la Asesoría Jurídica Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de España;

por la República de Fiji:

Excmo. Sr. Filipo Tarakinikini, Representante Permanente de la República de Fiji ante las Naciones Unidas, Nueva York;

por la República de Maldivas:

Excma. Sra. Aishath Shaan Shakir, Embajadora de la República de Maldivas ante la República Federal de Alemania,

Sra. Amy Sander, Essex Court Chambers, miembro del Colegio de la Abogacía de Inglaterra y Gales,

Sra. Naomi Hart, Essex Court Chambers, miembro del Colegio de la Abogacía de Inglaterra y Gales.

I. COMPETENCIA Y DISCRECIONALIDAD

22. Cuando examina una solicitud de opinión consultiva, la Corte debe considerar en primer lugar si es competente para emitir la opinión solicitada y, en caso afirmativo, si existe alguna razón por la que deba, en ejercicio de su discrecionalidad, abstenerse de responder a la solicitud (véanse *Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el Territorio Palestino Ocupado*, opinión consultiva (en adelante, “opinión consultiva sobre el Muro”), *I.C.J. Reports 2004 (I)*, pág. 144, párr. 13; *Consecuencias jurídicas de la separación del archipiélago de Chagos de Mauricio en 1965*, opinión consultiva, *I.C.J. Reports 2019 (I)*, pág. 111, párr. 54).

A. Competencia

23. La competencia de la Corte para emitir una opinión consultiva se basa en el Artículo 65, párrafo 1, de su Estatuto, que establece que “[l]a Corte podrá emitir opiniones consultivas respecto de cualquier cuestión jurídica, a solicitud de cualquier organismo autorizado para ello por la Carta de las Naciones Unidas, o de acuerdo con las disposiciones de la misma”.

24. La Corte observa que, según el Artículo 96, párrafo 1, de la Carta, la Asamblea General podrá “solicitar de la Corte Internacional de Justicia que emita una opinión consultiva sobre cualquier cuestión jurídica”.

25. La Corte debe cerciorarse, de conformidad con lo exigido en el Artículo 96 de la Carta y el Artículo 65 de su Estatuto, de que la cuestión sobre la que se le pide que se pronuncie es una “cuestión jurídica”.

26. Todos los participantes que han abordado esta cuestión han considerado que la Corte es competente para emitir la opinión consultiva y que las preguntas que figuran en el párrafo 18 de la resolución 77/247 son cuestiones jurídicas.

27. En el presente procedimiento, la Asamblea General planteó dos preguntas a la Corte (véase el párrafo 1 *supra*). Estas preguntas se refieren, en primer lugar, a las consecuencias jurídicas derivadas de determinadas políticas y prácticas de Israel como Potencia ocupante en una situación de ocupación de guerra desde 1967. En segundo lugar, se refieren al modo en que tales políticas y prácticas afectan al estatuto jurídico de la ocupación teniendo en cuenta determinadas normas y principios del derecho internacional y a las consecuencias jurídicas que se derivan de dicho estatuto. La Corte considera que se trata de cuestiones jurídicas.

28. Habida cuenta de lo que antecede, la Corte concluye que la solicitud se ha presentado de conformidad con las disposiciones de la Carta y de su Estatuto y que, por lo tanto, es competente para emitir la opinión solicitada.

29. No obstante, en el curso del presente procedimiento se han expresado opiniones divergentes sobre si las preguntas planteadas están formuladas de forma clara y precisa. Algunos participantes consideran que las preguntas son claras y precisas, mientras que otros opinan que no todos los aspectos de las preguntas se presentan con claridad. La Corte señala que “la falta de claridad en la redacción de una cuestión no podría privar a la Corte de su jurisdicción. En todo caso, en razón de tal incertidumbre la Corte deberá precisar la interpretación que debe darse a la cuestión, cosa que ha hecho con frecuencia”. (*Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el Territorio Palestino Ocupado*, opinión consultiva, *I.C.J. Reports 2004 (I)*, págs. 153 y 154, párr. 38). En el presente

asunto, la Corte no ve razón alguna para reformular las preguntas que se le plantean. No obstante, las interpretará siempre que, en su opinión, resulte necesario aclararlas.

B. Discrecionalidad

30. El hecho de que la Corte tenga competencia para emitir una opinión consultiva no significa que esté obligada a ejercerla. El Artículo 65, párrafo 1, del Estatuto establece que “[l]a Corte podrá emitir opiniones consultivas respecto de cualquier cuestión jurídica, a solicitud de cualquier organismo autorizado para ello por la Carta de las Naciones Unidas, o de acuerdo con las disposiciones de la misma”. Como la Corte ha destacado en repetidas ocasiones, esto “debería interpretarse en el sentido de que la Corte tiene la facultad discrecional para negarse a emitir una opinión consultiva aun cuando se hayan reunido los requisitos necesarios para que tenga competencia” (*Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el Territorio Palestino Ocupado*, opinión consultiva, *I.C.J. Reports 2004 (I)*, pág. 156, párr. 44; *Conformidad con el derecho internacional de la declaración unilateral de independencia relativa a Kosovo*, *I.C.J. Reports 2010 (II)*, págs. 415 y 416, párr. 29). Sin embargo, dadas sus funciones como órgano judicial principal de las Naciones Unidas, la Corte considera que su respuesta a una solicitud de opinión consultiva “representa su participación en las actividades de la Organización y, en principio, no debe ser rechazada” (*Consecuencias jurídicas de la separación del archipiélago de Chagos de Mauricio en 1965*, opinión consultiva, *I.C.J. Reports 2019 (I)*, pág. 113, párr. 65).

31. De conformidad con su jurisprudencia, solo razones imperiosas pueden hacer que la Corte se abstenga de emitir su opinión en respuesta a una solicitud que entre en el ámbito de su competencia (*Consecuencias jurídicas de la separación del archipiélago de Chagos de Mauricio en 1965*, opinión consultiva, *I.C.J. Reports 2019 (I)*, pág. 113, párr. 65). Teniendo en cuenta que algunos participantes en el presente procedimiento han alegado que existen razones imperiosas para que la Corte se abstenga de pronunciarse, esta abordará tales argumentos a continuación.

32. Los argumentos esgrimidos por estos participantes pueden categorizarse del siguiente modo: 1) la solicitud de opinión consultiva se refiere a una controversia entre dos partes, una de las cuales no ha dado su consentimiento respecto de la competencia de la Corte; 2) la opinión no serviría de ayuda a la Asamblea General; 3) la opinión podría socavar el proceso de negociación israelo-palestino; 4) una opinión consultiva sería perjudicial para la labor del Consejo de Seguridad; 5) la Corte no dispone de información suficiente que le permita emitir una opinión consultiva; y 6) las preguntas están formuladas de manera sesgada. La Corte examinará cada uno de estos argumentos por separado.

1. Cuestión de si la solicitud se refiere a una controversia entre dos partes, una de las cuales no ha dado su consentimiento respecto de la competencia de la Corte

33. Algunos participantes han mantenido que la Corte debería abstenerse de emitir una opinión consultiva porque la solicitud se refiere a una controversia bilateral entre Palestina e Israel, y este último no ha dado su consentimiento respecto de la competencia de la Corte para resolverla, como demuestra su voto contra la resolución 77/247 y su exposición escrita en el presente procedimiento. Sin embargo, la mayoría de los participantes han afirmado que la emisión de una opinión consultiva no eludiría el principio del consentimiento, ya que las preguntas planteadas a la Corte no se refieren esencialmente a una controversia bilateral. En opinión de la mayoría de estos participantes, el objeto de la solicitud de la Asamblea General, aunque afecta a Israel y Palestina, se refiere a las responsabilidades de las Naciones Unidas y a cuestiones más amplias de paz y seguridad internacionales, así como a ciertas obligaciones *erga omnes* de los Estados.

34. La Corte recuerda que habría una razón imperiosa para abstenerse de emitir una opinión consultiva en caso de que dicha opinión “tuviera por efecto eludir el principio de que un Estado no está obligado a someter una diferencia a solución judicial sin su consentimiento” (*Sáhara Occidental*, opinión consultiva, *I.C.J. Reports 1975*, pág. 25, párr. 33; véase también *Consecuencias jurídicas de la separación del archipiélago de Chagos de Mauricio en 1965*, opinión consultiva, *I.C.J. Reports 2019 (I)*, pág. 117, párr. 85). Sin embargo, el hecho de que, en el curso de su razonamiento, y para responder a las preguntas que se le han planteado, la Corte pueda tener que pronunciarse sobre cuestiones jurídicas en relación con las cuales Palestina e Israel han expresado opiniones divergentes no convierte el presente asunto en una controversia bilateral (véase *Consecuencias jurídicas que tiene para los Estados*

la continuación de la presencia de Sudáfrica en Namibia (África Sudoccidental), no obstante lo dispuesto en la resolución 276 (1970) del Consejo de Seguridad, opinión consultiva, *I.C.J. Reports 1971*, pág. 24, párr. 34).

35. La Corte no considera que el objeto de la solicitud de la Asamblea General en el presente asunto sea únicamente una cuestión bilateral entre Israel y Palestina. La implicación de los órganos de las Naciones Unidas, y anteriormente de la Sociedad de las Naciones, en las cuestiones relativas a Palestina se remonta al sistema de mandatos (véanse los párrafos 51 y 52 *infra*). La Asamblea General lleva ocupándose de la cuestión palestina desde que aprobó la resolución 181 (II) relativa a la partición de Palestina en 1947, y ha examinado, debatido y aprobado resoluciones sobre la cuestión prácticamente todos los años. Por ello, este asunto suscita especial interés y preocupación para las Naciones Unidas. La Asamblea General ha declarado que las Naciones Unidas tienen “una responsabilidad permanente con respecto a la cuestión de Palestina hasta que se resuelva satisfactoriamente en todos sus aspectos de conformidad con la legitimidad internacional” (resolución 57/107 de la Asamblea General, de 3 de diciembre de 2002). Por consiguiente, la Corte considera que las cuestiones que se plantean en la solicitud entran en el ámbito de la cuestión palestina, incluido el papel de la Asamblea General en la materia (véanse *Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el Territorio Palestino Ocupado*, opinión consultiva, *I.C.J. Reports 2004 (I)*, pág. 159, párr. 50; *Consecuencias jurídicas de la separación del archipiélago de Chagos de Mauricio en 1965*, opinión consultiva, *I.C.J. Reports 2019 (I)*, pág. 118, párr. 88). Así pues, la Corte no puede, en ejercicio de su discrecionalidad, abstenerse de emitir la opinión solicitada basándose en que sería una forma de eludir el principio de que la solución judicial está sujeta al consentimiento.

2. Cuestión de si la opinión de la Corte serviría de ayuda a la Asamblea General en el desempeño de sus funciones

36. Uno de los participantes ha argumentado que la Corte debería abstenerse de responder a las preguntas que se le han formulado porque la Asamblea General no le pide que dé su opinión sobre un asunto para el que necesita ayuda, sino que confirme determinadas conclusiones jurídicas pertinentes para la solución de una controversia bilateral entre Palestina e Israel. Otros participantes que han abordado la cuestión han sostenido que la Corte no debería abstenerse de emitir su opinión por este motivo, ya que el objetivo de la presente solicitud es obtener una opinión consultiva que servirá de ayuda a la Asamblea General en el ejercicio de sus funciones. Estos participantes han argumentado que los asuntos examinados revisten una importancia de larga data para la labor de la Asamblea General, que, por lo tanto, se beneficiará de la opinión de la Corte sobre determinadas cuestiones jurídicas.

37. Como la Corte ha observado con anterioridad,

“no cabe a la Corte decidir si la Asamblea necesita la opinión consultiva para el desempeño de sus funciones. La Asamblea General tiene derecho a decidir por sí misma, a la luz de sus propias necesidades, sobre la utilidad de una opinión.” (*Legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares*, opinión consultiva, *I.C.J. Reports 1996 (I)*, pág. 237, párr. 16.)

La Corte no puede pretender que su propia evaluación de la necesidad de tal opinión sustituya a la del órgano que la solicita (*Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el Territorio Palestino Ocupado*, opinión consultiva, *I.C.J. Reports 2004 (I)*, pág. 163, párr. 62). La Corte ha sostenido reiteradamente en su jurisprudencia que “las opiniones consultivas tienen la finalidad de proporcionar a los órganos solicitantes los elementos de derecho necesarios para sus actividades” (*ibid.*, pág. 162, párr. 60). En el presente asunto, la solicitud la presenta la Asamblea General en relación con sus propias responsabilidades y funciones respecto de la cuestión del Territorio Palestino Ocupado (véase [A/RES/77/247](#)). Por lo tanto, la Corte no considera que exista una razón imperiosa que deba llevarla a abstenerse de emitir su opinión basándose en que esta no serviría de ayuda a la Asamblea General en el desempeño de sus funciones.

3. Cuestión de si la opinión de la Corte podría socavar el proceso de negociación entre Israel y Palestina

38. Algunos participantes han mantenido que la Corte debería abstenerse de responder a las preguntas que se le han formulado porque una opinión consultiva de la Corte interferiría en el proceso de negociación israelo-palestino previsto en el marco establecido en la Declaración de Principios sobre las Disposiciones relacionadas con un Gobierno Autónomo Provisional de 1993 (en adelante, el “Acuerdo de Oslo I”) y el Acuerdo Provisional sobre

la Ribera Occidental y la Franja de Gaza de 1995 (en adelante, el “Acuerdo de Oslo II”), y podría agravar el desacuerdo israelo-palestino, poniendo en peligro así el resultado de las negociaciones.

39. En opinión de otros participantes, una opinión consultiva de la Corte no interferiría en el proceso de negociación y la Corte no debería abstenerse de emitirla por este motivo. Esos participantes han indicado que, por el contrario, una opinión de la Corte es tanto más necesaria cuanto que las negociaciones israelo-palestinas llevan muchos años estancadas.

40. En las circunstancias actuales, la cuestión de si la opinión de la Corte sería perjudicial para el proceso de negociación entra en el ámbito de la conjetura. La Corte no puede especular sobre los efectos de su opinión. En respuesta a un argumento similar en otro asunto, la Corte declaró:

“Se ha dicho que una respuesta de la Corte en este caso podría afectar negativamente a las negociaciones sobre el desarme y, por tanto, iría en contra de los intereses de las Naciones Unidas. La Corte sabe que, sean cuales fueren, las conclusiones de cualquier opinión que pueda emitir afectarán al debate en curso sobre la cuestión en la Asamblea General y constituirán un elemento más en las negociaciones sobre el tema. Aparte de esto, el efecto de la opinión es una cuestión de apreciación. La Corte ha oído argumentos contrapuestos y no hay criterios evidentes para preferir una u otra evaluación.” (*Legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares*, opinión consultiva, *I.C.J. Reports 1996 (I)*, pág. 237, párr. 17.)

Habida cuenta de lo que antecede, la Corte no puede considerar este factor como una razón imperiosa para abstenerse de responder a la solicitud de la Asamblea General.

4. Cuestión de si una opinión consultiva sería perjudicial para la labor del Consejo de Seguridad

41. Algunos participantes han afirmado que la Corte debería ejercer su discrecionalidad para abstenerse de responder a las preguntas que se le han planteado, mientras que otros han argumentado que, incluso si la Corte respondiera a esas preguntas, debería velar por que su respuesta no interfiriera en el marco establecido para las negociaciones, ya que es el Consejo de Seguridad, y no la Asamblea General, el principal responsable de las cuestiones relacionadas con el conflicto israelo-palestino. Según estos participantes, una opinión consultiva de la Corte podría interferir en el marco de negociación que el Consejo de Seguridad ha establecido para la solución de la controversia o afectar negativamente a dicho marco. Otros participantes que han abordado la cuestión han argumentado que la opinión de la Corte no perjudicaría la labor del Consejo de Seguridad. En su opinión, la Carta no otorga al Consejo de Seguridad la responsabilidad exclusiva en lo que respecta al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, ya que la Asamblea General también puede ocuparse, junto con el Consejo de Seguridad, de cuestiones de esa índole.

42. Este argumento es similar al examinado en la sección 3 *supra*, en lo que respecta al marco de negociación, pero también se refiere a las competencias respectivas del Consejo de Seguridad y la Asamblea General en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. La Corte abordó esta última cuestión en su opinión consultiva sobre el *Muro* de la siguiente manera: “Con arreglo al Artículo 24 de la Carta, el Consejo de Seguridad tiene ‘la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales’” (*I.C.J. Reports 2004 (I)*, pág. 148, párr. 26). No obstante, la Corte destacó que “el Artículo 24 se refiere a una competencia primordial pero no necesariamente exclusiva” (*ibid.*). La Asamblea General, de conformidad con el Artículo 14 de la Carta, tiene, entre otras cosas, la potestad de “recomendar medidas para el arreglo pacífico de cualesquiera situaciones”. La Corte declaró además que, “con el tiempo, ha habido una tendencia cada vez mayor de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad a ocuparse en forma paralela de los mismos asuntos relacionados con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales” y que esta “práctica aceptada de la Asamblea General, tal como ha evolucionado, es compatible con lo dispuesto en el párrafo 1 del Artículo 12 de la Carta” (*Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el Territorio Palestino Ocupado*, opinión consultiva, *I.C.J. Reports 2004 (I)*, págs. 149 y 150, párrs. 27 y 28). De hecho, esto es lo que ocurre en relación con algunos aspectos de la cuestión palestina.

43. La Corte recuerda asimismo que el Artículo 10 de la Carta confiere a la Asamblea General una competencia relativa a “cualesquier asuntos o cuestiones” dentro de los límites de la Carta y que el Artículo 11, párrafo 2, le otorga específicamente competencia para “discutir toda cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales que presente a su consideración cualquier Miembro de las Naciones Unidas”. Este

es el caso de las cuestiones planteadas por la Asamblea General en el presente procedimiento. Como la Corte ha declarado anteriormente,

“[c]uando, como en el presente caso, la Asamblea General tiene un interés legítimo en la respuesta a una pregunta, el hecho de que la respuesta pueda referirse en parte a una decisión del Consejo de Seguridad no es suficiente para justificar que la Corte se abstenga de dar su opinión a la Asamblea General” (*Conformidad con el derecho internacional de la declaración unilateral de independencia relativa a Kosovo*, opinión consultiva, *I.C.J. Reports 2010 (II)*, pág. 423, párr. 47).

Como se ha indicado en el párrafo 40 *supra*, la cuestión de si la opinión de la Corte sería perjudicial para el marco de negociación entra en el ámbito de la conjetura y la Corte no debería especular al respecto. Además, habida cuenta de que la Asamblea General tiene competencia para tratar asuntos relativos a la paz y la seguridad internacionales, como los planteados en las preguntas que ha formulado, no existe ninguna razón imperiosa para que la Corte se abstenga de emitir la opinión solicitada.

5. Cuestión de si la Corte dispone de información suficiente que le permita emitir una opinión consultiva

44. Algunos participantes han planteado el argumento de que la Corte debería abstenerse de emitir una opinión porque carece de información suficiente y tendría que emprender una labor de determinación de hechos que abarcaría un período de varias décadas para responder a las preguntas que le plantea la Asamblea General.

45. Sin embargo, otros participantes han sostenido que la Corte dispone de información y elementos de prueba suficientes en los antecedentes que tiene ante sí y en documentación de acceso público para evaluar adecuadamente las cuestiones de hecho que son pertinentes y necesarias para responder a las cuestiones jurídicas que se le plantean. A este respecto, se han remitido al expediente presentado a la Corte por el Secretario General de las Naciones Unidas y a las exposiciones escritas y orales de los participantes en el presente procedimiento.

46. En su opinión relativa a la *Interpretación de los tratados de paz con Bulgaria, Hungría y Rumanía* (primera fase, opinión consultiva, *I.C.J. Reports 1950*, pág. 72) y en su opinión sobre el *Sáhara Occidental*, la Corte dejó claro que lo decisivo en estas circunstancias es si la Corte dispone de información suficiente “que le permita llegar a una conclusión judicial sobre cualesquiera cuestiones de hecho controvertidas cuya determinación sea necesaria para emitir una opinión en condiciones compatibles con su carácter judicial” (*Sáhara Occidental*, opinión consultiva, *I.C.J. Reports 1975*, págs. 28 y 29, párr. 46). La discrecionalidad de la Corte se ejerce con el fin de proteger la integridad de su función judicial y corresponde a la Corte evaluar, en cada caso, la naturaleza y el alcance de la información necesaria para el ejercicio de esa función.

47. En el presente caso, más de 50 Estados y organizaciones internacionales han presentado información pertinente para responder a las preguntas formuladas por la Asamblea General a la Corte. La Corte observa, en particular, que la exposición escrita de Israel, aunque relacionada principalmente con cuestiones de competencia y oportunidad judicial, contenía información sobre otros asuntos, incluidas las preocupaciones de ese Estado en materia de seguridad. La Corte también ha examinado un voluminoso expediente presentado por el Secretario General de las Naciones Unidas, que contiene amplia información sobre la situación en el Territorio Palestino Ocupado. Corresponde a la Corte apreciar la suficiencia de la información de que dispone. En el presente asunto, la Corte considera que dispone de información suficiente para pronunciarse sobre cuestiones jurídicas de forma coherente con su función judicial. Por consiguiente, no existe ninguna razón imperiosa para que se abstenga de emitir la opinión solicitada por este motivo.

6. Cuestión de si las preguntas están formuladas de manera sesgada

48. Algunos participantes han argumentado que las preguntas formuladas a la Corte se han presentado de manera sesgada, ya que dan por supuesta la existencia de violaciones del derecho internacional por parte de Israel. Por lo tanto, estos participantes sostienen que la Corte debería abstenerse de responderlas. Otros participantes han rebatido la caracterización de las preguntas como sesgadas o desequilibradas.

49. La Corte recuerda, en primer lugar, que está facultada para interpretar y, en su caso, reformular las preguntas que se le plantean (véase el párrafo 29 *supra*). Por tanto, corresponde a la Corte apreciar y valorar si las preguntas están formuladas adecuadamente. En caso necesario, la Corte también puede determinar por sí misma el

alcance y el sentido de las preguntas que se le plantean. En el presente asunto, la Corte no considera que la Asamblea General pretendiera restringir su libertad para pronunciarse sobre estas cuestiones. La Corte determinará por sí misma si las políticas y prácticas de Israel violan las normas y principios aplicables del derecho internacional, antes de determinar las consecuencias jurídicas de esas eventuales violaciones. Así pues, la Corte no puede, en ejercicio de su discrecionalidad, abstenerse de emitir su opinión basándose en que las preguntas que se le han planteado están formuladas de manera sesgada o desequilibrada.

*

50. Habida cuenta de lo que antecede, la Corte concluye que no existen razones imperiosas que justifiquen que se abstenga de emitir la opinión solicitada por la Asamblea General.

II. CONTEXTO GENERAL

51. Al final de la Primera Guerra Mundial, Palestina, que había formado parte del Imperio otomano, quedó bajo un mandato de clase “A” que fue confiado a Gran Bretaña por la Sociedad de las Naciones, de conformidad con el Artículo 22, párrafo 4, del Pacto de la Sociedad. Según esta disposición,

“[c]iertas comunidades que antes pertenecían al Imperio turco han alcanzado una etapa de desarrollo en la que su existencia como naciones independientes puede ser reconocida provisionalmente, sujeta a la prestación de asesoramiento y asistencia administrativa por parte de un Mandatario hasta el momento en que sean capaces de valerse por sí mismas”.

Los límites territoriales de la Palestina en régimen de mandato fueron establecidos por diversos instrumentos, en particular en lo que respecta a la frontera oriental, por un memorando británico de 16 de septiembre de 1922 y el Tratado Anglo-Transjordano de 20 de febrero de 1928.

52. En 1947, el Reino Unido anunció su intención de completar la evacuación del territorio bajo mandato antes del 1 de agosto de 1948, fecha que posteriormente adelantó al 15 de mayo de 1948. Mientras tanto, el 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General había aprobado la resolución 181 (II) sobre el futuro gobierno de Palestina, que “[r]ecom[endaba] al Reino Unido, ... y a todos los demás Miembros de las Naciones Unidas la aprobación y aplicación ... del Plan de Partición” del territorio, tal como se establecía en la resolución, entre dos Estados independientes, uno árabe y otro judío, así como la creación de un régimen internacional especial para la ciudad de Jerusalén. La resolución establecía que “[l]os Estados independientes árabe y judío ... empezarán a existir en Palestina dos meses después de concluido el retiro ... de la Potencia mandataria”. Mientras que la población judía aceptó el Plan de Partición, la población árabe de Palestina y los Estados árabes rechazaron este plan, argumentando, entre otras cosas, que no era equilibrado.

53. El 14 de mayo de 1948, Israel proclamó su independencia con referencia a la resolución 181 (II) de la Asamblea General; estalló entonces un conflicto armado entre Israel y varios Estados árabes, y el Plan de Partición no llegó a aplicarse.

54. Mediante la resolución 62 (1948), de 16 de noviembre de 1948, el Consejo de Seguridad decidió que “se concluirá un armisticio aplicable a todos los sectores de Palestina” y pidió a las partes directamente implicadas en el conflicto que trataran de alcanzar un acuerdo con ese fin. De conformidad con esta decisión, en 1949 se concluyeron en Rodas varios acuerdos generales de armisticio entre Israel y sus Estados vecinos con la mediación de las Naciones Unidas, en los que se fijaron las líneas de demarcación del armisticio entre las fuerzas israelíes y árabes (a las que después frecuentemente se las llamó, en su conjunto, “Línea Verde”, por el color utilizado al trazarla en los mapas, y que es la denominación que se utiliza en adelante). Las líneas de demarcación estaban sujetas a las rectificaciones que pudieran acordar las partes.

55. El 29 de noviembre de 1948, haciendo referencia a la resolución 181 (II), Israel solicitó su admisión como miembro de las Naciones Unidas. El 11 de mayo de 1949, al admitir a Israel como Estado Miembro de las Naciones Unidas, la Asamblea General recordó la resolución 181 (II) y tomó nota de las declaraciones de Israel “respecto a la ejecución de dicha[] resoluci[ón]” (resolución 273 (III) de la Asamblea General).

56. En 1964 se creó la Organización de Liberación de Palestina (OLP) para representar al pueblo palestino.

57. En 1967, estalló un conflicto armado (también conocido como la “Guerra de los Seis Días”) entre Israel y tres de sus países vecinos, Egipto, Siria y Jordania. Cuando cesaron las hostilidades, las fuerzas israelíes ocupaban todos los territorios de la Palestina bajo mandato británico más allá de la Línea Verde (véase el párrafo 54 *supra*).

58. El 22 de noviembre de 1967, el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad la resolución 242 (1967), que “*insist[ía]* en la inadmisibilidad de la adquisición de territorio por medio de la guerra” y pedía el “[r]etiro de las fuerzas armadas israelíes de los territorios que ocuparon durante el reciente conflicto” y la

“[t]erminación de todas las situaciones de beligerancia o alegaciones de su existencia y [el] respeto y reconocimiento de la soberanía, integridad territorial e independencia política de todos los Estados de la zona y de su derecho a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas y libres de amenaza o actos de fuerza”.

El Consejo afirmó además “la necesidad de ... [l]lograr una solución justa del problema de los refugiados” y “[g]arantizar la inviolabilidad territorial e independencia política de todos los Estados de la zona, adoptando medidas que incluyan la creación de zonas desmilitarizadas”.

59. A partir de 1967, Israel comenzó a establecer o apoyar asentamientos en los territorios que ocupaba y adoptó una serie de medidas encaminadas a cambiar el estatuto de la ciudad de Jerusalén. El Consejo de Seguridad, tras recordar en varias ocasiones “el principio de que la adquisición de territorio por conquista militar es inadmisibles”, condenó esas medidas y, mediante la resolución 298 (1971), de 25 de septiembre de 1971, confirmó que

“todas las medidas de carácter legislativo y administrativo que haya tomado Israel con el fin de alterar el estatuto de la ciudad de Jerusalén, incluso la expropiación de tierras y bienes, el traslado de habitantes y la legislación destinada a incorporar el sector ocupado, son totalmente nulas y no pueden modificar ese estatuto”.

60. En octubre de 1973 estalló otro conflicto armado entre Egipto, Siria e Israel.

61. Mediante la resolución 338, de 22 de octubre de 1973, el Consejo de Seguridad instó a las partes en conflicto a que pusieran fin a toda actividad militar y empezaran inmediatamente después del alto el fuego la aplicación de la resolución 242 (1967) del Consejo de Seguridad en todas sus partes; también decidió que, “inmediatamente y en forma simultánea con la cesación del fuego, se inicien negociaciones entre las partes interesadas”.

62. El 14 de octubre de 1974, la Asamblea General reconoció, mediante la resolución 3210 (XXIX), a la OLP como representante del pueblo palestino. Mediante la resolución 3236 (XXIX), de 22 de noviembre de 1974, reconoció “que el pueblo palestino tiene derecho a la libre determinación de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”.

63. El 17 de septiembre de 1978, Israel y Egipto firmaron los “Acuerdos de Camp David”, que culminaron el año siguiente en un tratado de paz entre ambos países. Posteriormente, el 26 de octubre de 1994 se firmó un tratado de paz entre Israel y Jordania. Ese tratado fijó la frontera entre los dos Estados conforme a las líneas establecidas en el mandato para Palestina (véase el párrafo 51 *supra*), pero dispuso que, con respecto al “territorio que quedó bajo control del Gobierno Militar israelí en 1967”, la frontera con Jordania se consideraría “administrativa”.

64. El 15 de noviembre de 1988, refiriéndose a la resolución 181 (II) “que dividió Palestina en un Estado árabe y un Estado judío”, la OLP “proclam[ó] el establecimiento del Estado de Palestina”.

65. En 1993 y 1995, Israel y la OLP firmaron los Acuerdos de Oslo I y Oslo II. En un canje de cartas el 9 de septiembre de 1993, la OLP reconoció el derecho de Israel a existir en paz y con seguridad, e Israel reconoció a la OLP como representante legítima del pueblo palestino. El Acuerdo de Oslo I estableció las directrices generales de las negociaciones que debían mantenerse entre Israel y Palestina. El Acuerdo de Oslo II, entre otras cosas, dividió la Ribera Occidental bajo ocupación israelí en tres zonas administrativas (A, B y C), siendo la zona C, que abarca más del 60 % de la Ribera Occidental, administrada exclusivamente por Israel.

66. Los Acuerdos de Oslo obligaban a Israel, entre otras cosas, a transferir a las autoridades palestinas ciertos poderes y responsabilidades que ejercían en las zonas A y B de la Ribera Occidental sus autoridades militares

y su administración civil. Cuando se han producido esas transferencias, que han sido limitadas y parciales, Israel ha conservado un control significativo en relación con las cuestiones de seguridad.

67. Tras un aumento de los actos de violencia desde la Ribera Occidental, a principios de la década de 2000 Israel comenzó a construir una “valla continua” (en adelante, el “muro”) en gran parte de la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental. Según un informe del Secretario General, “[e]l Gobierno de Israel empezó en 1996 a estudiar la forma de detener la infiltración a Israel desde el centro y el norte de la Ribera Occidental” (informe del Secretario General de 24 de noviembre de 2003, doc. [A/ES-10/248](#) de las Naciones Unidas). El Gobierno israelí aprobó por primera vez un plan de este tipo en julio de 2001. Posteriormente, el Gobierno adoptó varias decisiones relativas a la construcción del muro, y la primera parte de las obras pertinentes se declaró terminada el 31 de julio de 2003. Pese a la opinión de la Corte de 2004, en la que la esta consideró que “[l]a construcción del muro que está levantando Israel, la Potencia ocupante, en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental y sus alrededores, y su régimen conexo [eran] contrarios al derecho internacional” (*Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el Territorio Palestino Ocupado*, opinión consultiva, *I.C.J. Reports 2004 (I)*, pág. 201, párr. 163), la construcción del muro continuó, al igual que la expansión de los asentamientos en el Territorio Palestino Ocupado.

68. Según ciertos informes, en 2005, los colonos que residían en 21 asentamientos de la Franja de Gaza y cuatro asentamientos del norte de la Ribera Occidental fueron evacuados en aplicación de un “plan de separación” israelí (véase “informe de la misión internacional independiente de investigación de las repercusiones de los asentamientos israelíes en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del pueblo palestino en todo el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental”, documento [A/HRC/22/63](#) de las Naciones Unidas (7 de febrero de 2013) y párrafo 88 *infra*). En 2023, aproximadamente 465.000 colonos residían en la Ribera Occidental, repartidos en unos 300 asentamientos y puestos de avanzada, mientras que unos 230.000 colonos residían en Jerusalén Oriental (véase “Asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado”, informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, doc. [A/HRC/55/72](#) de las Naciones Unidas (1 de febrero de 2024), párr. 9). Los residentes de los asentamientos y “puestos de avanzada” en el Territorio Palestino Ocupado (“colonos”) son predominantemente israelíes, así como judíos no israelíes que cumplen los requisitos para obtener la nacionalidad israelí según la legislación de Israel.

69. El 19 de noviembre de 2003, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución [1515 \(2003\)](#), en la que “[h]ac[ia] suya la hoja de ruta basada en la ejecución para una solución biestatal permanente del conflicto israelo-palestino propuesta por el Cuarteto”. El Cuarteto está formado por representantes de los Estados Unidos de América, la Unión Europea, la Federación de Rusia y las Naciones Unidas. La resolución “[e]xhorta[ba] a las partes a que cumpl[ieran] las obligaciones que les incumb[ían] en virtud de la hoja de ruta en cooperación con el Cuarteto y a que h[icieran] realidad la visión de dos Estados que vivan uno junto al otro en paz y seguridad”.

70. El 29 de noviembre de 2012, la Asamblea General, recordando, entre otras, la resolución [181 \(II\)](#), otorgó a Palestina la condición de Estado observador no miembro en las Naciones Unidas (resolución [67/19](#)).

71. En 2016, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución [2334 \(2016\)](#) en la que instó

“a que se intensifi[caran] y aceler[aran] el apoyo y los esfuerzos diplomáticos regionales e internacionales con objeto de lograr sin demora una paz amplia, justa y duradera en Oriente Medio, sobre la base de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, los principios de referencia de la Conferencia de Madrid, incluido el principio de territorio por paz, la Iniciativa de Paz Árabe y la hoja de ruta del Cuarteto, y de poner fin a la ocupación israelí que se inició en 1967”.

El 10 de mayo de 2024, la Asamblea General aprobó la resolución [ES-10/23](#), en la que “[d]etermina que el Estado de Palestina cumple las condiciones necesarias para ser Miembro de las Naciones Unidas conforme al Artículo 4 de la Carta de las Naciones Unidas y, por consiguiente, debería ser admitido como Miembro de las Naciones Unidas”.

El 10 de junio de 2024, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución [2735 \(2024\)](#), en la que reiteró

“su inquebrantable compromiso con la aspiración a lograr la solución biestatal que permita que dos Estados democráticos, Israel y Palestina, convivan en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas, de conformidad

con el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, y a este respecto destac[ó] la importancia de unificar la Franja de Gaza con la Ribera Occidental bajo la Autoridad Palestina”.

III. ALCANCE Y SENTIDO DE LAS PREGUNTAS PLANTEADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL

72. La Corte pasa a examinar el alcance y sentido de las dos preguntas planteadas por la Asamblea General, y recuerda que están formuladas de la siguiente manera:

- “a) ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de que Israel continúe violando el derecho del pueblo palestino a la libre determinación, de sus prolongados actos de ocupación, asentamiento y anexión del territorio palestino ocupado desde 1967, incluidas las medidas destinadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto de la Ciudad Santa de Jerusalén, y de la aprobación por Israel de legislación y medidas discriminatorias conexas?
- b) ¿Cómo afectan las políticas y prácticas de Israel que se mencionan en el párrafo 18 a) al estatuto jurídico de la ocupación y qué consecuencias jurídicas se derivan de ese estatuto para todos los Estados y para las Naciones Unidas?”

73. La Corte observa que las preguntas definen el ámbito material, territorial y temporal del examen que debe realizar.

74. En cuanto al ámbito material, la pregunta a) se refiere a tres tipos de conducta que la pregunta b) describe como “políticas y prácticas de Israel”: en primer lugar, el hecho de que “Israel continúe violando el derecho del pueblo palestino a la libre determinación”; en segundo lugar, los “prolongados actos [realizados por Israel] de ocupación, asentamiento y anexión del territorio palestino ocupado desde 1967, incluidas las medidas destinadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto de la Ciudad Santa de Jerusalén”; y en tercer lugar, “la aprobación por Israel de legislación y medidas discriminatorias conexas”. El alcance específico de cada una de estas políticas y prácticas se determinará a continuación, a medida que la Corte las examine sucesivamente. Por el momento, la Corte se limita a observar una característica común a todas ellas, a saber, que el tenor de la pregunta a) presupone que estas políticas y prácticas son contrarias al derecho internacional. Por ejemplo, la conducta de Israel se caracteriza como constitutiva de violación, y la legislación y las medidas aprobadas por ese país se califican de discriminatorias. Sin embargo, en virtud de su función judicial, la Corte debe determinar por sí misma la legalidad de las políticas y prácticas mencionadas por la Asamblea General (véase *Conformidad con el derecho internacional de la declaración unilateral de independencia relativa a Kosovo*, opinión consultiva, *I.C.J. Reports* 2010 (II), pág. 424, párrs. 52 y 53). En su opinión consultiva sobre el *Muro*, la Corte consideró que determinar las consecuencias jurídicas de una acción implicaba una evaluación de si dicha acción “infringe o no determinadas normas y principios de derecho internacional” (*I.C.J. Reports* 2004 (I), pág. 154, párr. 39). También en el presente asunto, como se ha mencionado anteriormente, la Corte considera que la pregunta a) requiere una evaluación de la conformidad con el derecho internacional de las políticas y prácticas de Israel mencionadas en la solicitud (véase el párrafo 49).

75. Para cumplir esta tarea, la Corte debe examinar las principales características de las políticas y prácticas de Israel que se mencionan en la solicitud. Para ello, la Corte ha tenido en cuenta la información contenida en el expediente remitido por el Secretario General de las Naciones Unidas (véase el párrafo 6 *supra*). Además, la Corte ha tomado en consideración otra información que le han facilitado los participantes en el procedimiento.

76. En cuanto a los medios de prueba, la Corte recuerda que, en el ejercicio de su jurisdicción contenciosa, ha tenido en cuenta los elementos de prueba contenidos en documentos de las Naciones Unidas “en la medida en que tengan valor probatorio y estén corroborados, en su caso, por otras fuentes creíbles” (*Actividades armadas en el territorio del Congo (República Democrática del Congo c. Uganda)*, fallo, *I.C.J. Reports* 2005, pág. 239, párr. 205). La Corte evalúa el valor probatorio de los informes de organismos oficiales o independientes conforme a criterios que incluyen

- “1) la fuente del elemento de prueba (por ejemplo, si es partidista o neutral), 2) el proceso por el que se ha obtenido (por ejemplo, si procede de un informe de prensa anónimo o es el resultado de un proceso judicial o cuasijudicial minucioso), y 3) la calidad o el carácter del elemento (como las declaraciones contrarias al interés de quien las formula y los hechos admitidos o no controvertidos)” (*Aplicación de la Convención para*

la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Bosnia y Herzegovina c. Serbia y Montenegro), fallo, *I.C.J. Reports* 2007 (I), pág. 135, párr. 227; *Aplicación del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo y de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (Ucrania c. Federación de Rusia)*, fallo de 31 de enero de 2024, párr. 175).

Al considerar el valor probatorio de tales informes, la Corte ha dado importancia al cuidado puesto en su elaboración, la exhaustividad de sus fuentes y la independencia de los encargados de elaborarlos (véase *Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Bosnia y Herzegovina c. Serbia y Montenegro)*, fallo, *I.C.J. Reports* 2007 (I), pág. 137, párr. 230). La Corte aplicará estos criterios en su evaluación del valor probatorio de los informes aportados en este procedimiento.

77. En el presente procedimiento consultivo, la Corte considera que, en su solicitud, la Asamblea General no le ha pedido que determine detalladamente las características fácticas de las políticas y prácticas de Israel. Con sus preguntas, la Asamblea General pretende que la Corte realice una calificación jurídica de las políticas y prácticas de Israel. Por lo tanto, para emitir una opinión consultiva en este asunto, no es necesario que la Corte formule conclusiones de hecho con respecto a incidentes específicos presuntamente contrarios al derecho internacional. La Corte solo tiene que determinar las principales características de las políticas y prácticas de Israel y, sobre esa base, evaluar la conformidad de tales políticas y prácticas con el derecho internacional. La Corte ya ha concluido que dispone de la información necesaria para llevar a cabo esta tarea (véase el párrafo 47 *supra*).

78. En cuanto a su ámbito territorial, la pregunta *a)* se refiere al “territorio palestino ocupado desde 1967”, que abarca la Ribera Occidental, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza. La Corte observa que los diversos órganos y organismos de las Naciones Unidas a menudo se refieren específicamente a las diferentes partes del Territorio Palestino Ocupado. La Corte también lo hará en la presente opinión consultiva, según proceda. Sin embargo, la Corte recuerda que, desde un punto de vista jurídico, el Territorio Palestino Ocupado constituye una entidad territorial única, cuya unidad, contigüidad e integridad deben preservarse y respetarse (resolución 77/247 de la Asamblea General, párr. 12; artículo XI del Acuerdo de Oslo II; resolución ES-10/20 (2018) de la Asamblea General, decimosexto párrafo del preámbulo; resolución 1860 (2009) del Consejo de Seguridad, segundo párrafo del preámbulo; resolución 2720 (2023) del Consejo de Seguridad, cuarto párrafo del preámbulo). Por lo tanto, todas las referencias en la presente opinión al Territorio Palestino Ocupado deben entenderse como referencias a esta entidad territorial única.

79. La Corte observa además que la pregunta menciona medidas relativas a “la Ciudad Santa de Jerusalén”. El significado ordinario de este término es ambiguo: puede referirse a toda la ciudad de Jerusalén, con los límites establecidos en la resolución 181 (II) de la Asamblea General, de 29 de noviembre de 1947; puede referirse a cualquiera de las dos partes de la ciudad según lo previsto en el Acuerdo General de Armisticio de 1949 entre Israel y Jordania (véase el párrafo 54 *supra*); o puede referirse a una zona geográfica más amplia. Aunque el sentido corriente del término puede ser objeto de múltiples interpretaciones, el contexto aporta una aclaración útil en el presente asunto. Como la Corte ha mencionado anteriormente, el alcance de la cuestión aparece ya limitado en términos geográficos al Territorio Palestino Ocupado. Además, el título y el texto de la resolución hacen referencia específica a Jerusalén Oriental en varias ocasiones. Teniendo en cuenta este contexto, la Corte considera que la pregunta planteada por la Asamblea General relativa a la “Ciudad Santa de Jerusalén” se limita a las medidas adoptadas por Israel en Jerusalén Oriental.

80. En lo que respecta al alcance temporal de la pregunta *a)*, se solicita a la Corte que tenga en cuenta las medidas adoptadas por Israel en el Territorio Palestino Ocupado desde 1967. No obstante, nada impide que la Corte tome en consideración hechos anteriores a la ocupación, en la medida en que ello sea necesario para el correcto desempeño de su función judicial.

81. La Corte observa que la solicitud de opinión consultiva fue aprobada por la Asamblea General el 30 de diciembre de 2022 y en ella se pedía a la Corte que abordara las políticas y prácticas “constantes” de Israel o en las que ese país “persiste” (véase la resolución 77/247, párrafos vigésimo octavo y vigésimo noveno del preámbulo y párrafo 18 *a)*). Así pues, la Corte considera que las políticas y prácticas contempladas en la solicitud de la Asamblea General no incluyen la conducta de Israel en la Franja de Gaza en respuesta al ataque llevado a cabo contra él por Hamás y otros grupos armados el 7 de octubre de 2023.

82. La pregunta *b)* consta de dos partes. En la primera, se solicita a la Corte que evalúe cómo las políticas y prácticas de Israel descritas por la Asamblea General “afectan al estatuto jurídico de la ocupación”. La Corte observa que el uso del verbo “afectar” sugiere la posibilidad de que tales políticas y prácticas tengan como consecuencia la modificación del “estatuto jurídico”. Sin embargo, el alcance de la primera parte de la pregunta depende del significado de la expresión “estatuto jurídico de la ocupación” en el contexto general de la pregunta *b)*. En su acepción ordinaria, se entiende por “estatuto jurídico” el carácter que la ley atribuye a una entidad, una persona o un fenómeno. En el presente contexto, la Corte considera que la primera parte de la pregunta *b)* la invita a que determine la forma en que las políticas y prácticas de Israel afectan al estatuto jurídico de la ocupación y, por tanto, a la legalidad de la presencia continuada de Israel, en su calidad de Potencia ocupante, en el Territorio Palestino Ocupado. La cuestión de si tales políticas y prácticas tienen realmente un efecto sobre el estatuto jurídico de la ocupación será abordada por la Corte en la sección introductoria de su respuesta a la pregunta *b) infra*, donde se examinará más en detalle el alcance de la pregunta teniendo en cuenta la respuesta a la pregunta *a)* de la Asamblea General (véanse los párrafos 244 a 250 *infra*).

83. La Corte observa que tanto la pregunta *a)* como la segunda parte de la pregunta *b)* la invitan a que determine las consecuencias jurídicas derivadas, respectivamente, de las políticas y prácticas de Israel y de su presencia continuada como Potencia ocupante en el Territorio Palestino Ocupado. Si la Corte considera que alguna de las políticas y prácticas de Israel, o su presencia continuada, en el Territorio Palestino Ocupado son contrarias al derecho internacional, y en la medida en que así sea, examinará las consecuencias jurídicas que se deriven de tales conclusiones para Israel, para los demás Estados y para las Naciones Unidas.

IV. DERECHO APLICABLE

84. Una vez definido el alcance y sentido de las preguntas planteadas por la Asamblea General, la Corte debe determinar el derecho aplicable. En su solicitud a la Corte, la Asamblea General hace referencia a:

“las normas y los principios del derecho internacional, lo cual incluye la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos, y la opinión consultiva de la Corte de fecha 9 de julio de 2004”.

85. La aplicabilidad de determinadas normas de derecho internacional en el territorio en cuestión depende del estatuto de dicho territorio en virtud del derecho internacional. En primer lugar, la Corte determinará el estatuto del Territorio Palestino Ocupado según el derecho internacional. A continuación, determinará qué normas de derecho internacional son pertinentes para responder a las preguntas que le ha formulado la Asamblea General.

*

86. Las preguntas planteadas por la Asamblea General parten de la premisa de que el Territorio Palestino Ocupado se encuentra bajo ocupación de Israel. En su opinión consultiva sobre el *Muro*, la Corte enunció las circunstancias en las que se establece un estado de ocupación:

“[D]e conformidad con el derecho internacional consuetudinario reflejado ... en el artículo 42 [del Reglamento relativo a las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre], que figura en el anexo [de la Cuarta Convención de La Haya] de 18 de octubre de 1907..., se considera ocupado un territorio cuando de hecho está bajo la autoridad del ejército enemigo, y la ocupación abarca solo los territorios donde se ha establecido esa autoridad y en la medida en que se ejerza.” (*I.C.J. Reports 2004 (I)*, pág. 167, párr. 78; véase también *Actividades armadas en el territorio del Congo (República Democrática del Congo c. Uganda)*, fallo, *I.C.J. Reports 2005*, pág. 229, párr. 172.)

87. En la misma opinión consultiva, la Corte observó que, en el conflicto armado de 1967, Israel ocupó los territorios situados entre la Línea Verde y la antigua frontera oriental de la Palestina bajo mandato británico, a

saber, la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental (*I.C.J. Reports 2004 (I)*), pág. 167, párr. 78). La Corte afirmó que los acontecimientos posteriores no habían alterado el estatuto de los territorios en cuestión como territorios ocupados, ni el estatuto de Israel como Potencia ocupante (*ibid.*).

88. En su opinión consultiva sobre el *Muro*, la Corte no se pronunció sobre el estatuto jurídico de la Franja de Gaza, ya que la construcción del muro no afectaba a esta última. La Franja de Gaza es parte integrante del territorio ocupado por Israel en 1967 (véase el párrafo 78 *supra*). Tras el conflicto armado de 1967, Israel, como Potencia ocupante, puso la Franja de Gaza bajo su control efectivo. Sin embargo, en 2004, Israel anunció un “Plan de Separación”, según el cual debía retirar su presencia militar de la Franja de Gaza y de varias zonas del norte de la Ribera Occidental (Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, “The Cabinet Resolution Regarding the Disengagement Plan” (6 de junio de 2004); véase también “Prime Minister Ariel Sharon’s Address to the Knesset — The Vote on the Disengagement Plan” (25 de octubre de 2004)). En 2005, Israel había completado la retirada de su ejército y el desmantelamiento de los asentamientos de la Franja de Gaza.

89. Sin embargo, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel (en adelante, la “Comisión Internacional Independiente de Investigación”) indica que Israel mantiene el control,

“entre otras cosas, sobre el espacio aéreo y las aguas territoriales de Gaza, así como sobre sus pasos fronterizos terrestres, el suministro de infraestructuras civiles, incluidas las de agua y la electricidad, y funciones gubernamentales decisivas como la gestión del registro de la población palestina” (“informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel”, doc. [A/77/328](#) de las Naciones Unidas (14 de septiembre de 2022), párr. 19).

Esto se ve respaldado por las conclusiones anteriores de la Comisión Independiente de Investigación establecida en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución [S-21/1](#) del Consejo de Derechos Humanos, según las cuales

“[I]os hechos ocurridos desde la retirada de 2005, entre ellos las continuas patrullas de la Marina israelí en el mar territorial adyacente a Gaza y los constantes vuelos de vigilancia de las aeronaves de las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel], en particular de aeronaves pilotadas a distancia, demuestran el control exclusivo y permanente por Israel del espacio aéreo y las zonas marítimas de Gaza que —con la excepción de actividades pesqueras limitadas— los palestinos no pueden utilizar. Desde el año 2000, las FDI también han impuesto de manera continua una zona de exclusión de anchura variable dentro de Gaza a lo largo de la valla de la Línea Verde. Incluso en períodos en los que no hay hostilidades activas, las FDI llevan a cabo operaciones periódicas en esa zona, como la nivelación del terreno. Israel regula el mercado monetario local, que se basa en la moneda israelí, y controla los derechos de aduana. En virtud del Mecanismo para la Reconstrucción de Gaza, Israel sigue ejerciendo un alto grado de control sobre el sector de la construcción en Gaza. Los planos de los proyectos públicos y privados a gran escala, así como las cantidades necesarias de material de construcción, deben ser aprobados por el Gobierno israelí. Israel también controla el registro de población palestina, que es común a la Ribera Occidental y Gaza, y los documentos de identidad palestinos solo pueden expedirse o modificarse con la aprobación israelí. Asimismo, Israel regula todos los cruces que permiten el acceso a Gaza y la salida de la Franja. Si bien es cierto que el paso fronterizo de Rafah lo gestiona Egipto, Israel sigue ejerciendo un amplio grado de control, ya que solo los palestinos con pasaporte pueden atravesarlo, y los pasaportes solo pueden expedirse a personas que figuren en el registro de población que lleva Israel.” (“Report of the detailed findings of the independent commission of inquiry established pursuant to Human Rights Council resolution [S-21/1](#)”, doc. [A/HRC/29/CRP.4](#) de las Naciones Unidas (24 de junio de 2015), párr. 29.)

90. En estas circunstancias, la Corte debe determinar si la retirada por Israel de su presencia militar física sobre el terreno en la Franja de Gaza en 2004-2005 afectó a las obligaciones que le incumben en virtud del derecho de la ocupación en esa zona y de qué modo. Como la Corte ha observado anteriormente (véase el párrafo 86), un territorio está ocupado cuando de hecho está bajo la autoridad del ejército enemigo. Un Estado ocupa un territorio que no es suyo cuando ejerce un control efectivo sobre él y en la medida en que lo hace. Por consiguiente, un Estado no puede ser considerado Potencia ocupante mientras no haya puesto un territorio que no es suyo bajo su

control efectivo (véase *Actividades armadas en el territorio del Congo (República Democrática del Congo c. Uganda)*, fallo, *I.C.J. Reports 2005*, pág. 230, párr. 173).

91. Cuando un Estado ha puesto un territorio bajo su control efectivo, puede estar en condiciones de mantener ese control y de seguir ejerciendo su autoridad pese a no tener presencia militar física sobre el terreno. La presencia militar física en el territorio ocupado no es indispensable para el ejercicio por un Estado de un control efectivo, siempre que el Estado en cuestión tenga la capacidad de imponer su autoridad, incluso haciendo sentir su presencia física en un plazo razonable (por ejemplo, véanse *United States Military Tribunal, USA v. Wilhelm List and others (Hostage case)* (19 de febrero de 1948), *Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10*, vol. XI, pág. 1243; Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, *Fiscalía c. Mladen Naletilić y Vinko Martinović*, IT-98-34-T, Sala de Primera Instancia, fallo, 31 de marzo de 2003, párr. 217).

92. Del análisis anterior se desprende que, a efectos de determinar si un territorio sigue estando ocupado con arreglo al derecho internacional, el criterio decisivo no es si la Potencia ocupante mantiene en todo momento su presencia militar física en el territorio, sino más bien si su autoridad “está establecida y en condiciones de ejercerse” (artículo 42 del Reglamento relativo a las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre anexo a la Cuarta Convención de La Haya de 18 de octubre de 1907; en adelante, “Reglamento de La Haya”). Cuando una Potencia ocupante que ha establecido previamente su autoridad en el territorio ocupado retira parcial o totalmente su presencia física, puede seguir teniendo obligaciones en virtud del derecho de la ocupación en la medida en que mantenga la facultad de ejercer, y siga ejerciendo, elementos de su autoridad en lugar del gobierno local.

93. Basándose en la información de que dispone, la Corte considera que Israel mantuvo la facultad de ejercer, y siguió ejerciendo, ciertos elementos esenciales de autoridad sobre la Franja de Gaza, incluido el control de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, la imposición de restricciones a la circulación de personas y mercancías, la recaudación de impuestos a la importación y la exportación, y el control militar sobre la zona de separación, a pesar de la retirada de su presencia militar en 2005. Esto es aún más cierto desde el 7 de octubre de 2023.

94. Habida cuenta de lo que antecede, la Corte considera que la retirada de Israel de la Franja de Gaza no lo ha liberado totalmente de las obligaciones que le incumben en virtud del derecho de la ocupación. Las obligaciones de Israel han seguido siendo proporcionales a su grado de control efectivo sobre la Franja de Gaza.

*

95. La Corte pasa a continuación a examinar las normas y principios pertinentes para responder a las preguntas que se le han planteado. Entre ellos figuran la prohibición de la adquisición de territorio mediante la amenaza o el uso de la fuerza y el derecho de los pueblos a la libre determinación, que están consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y también forman parte del derecho internacional consuetudinario. La Corte abordará esas normas y principios a continuación, en el marco del examen de los distintos aspectos de las preguntas que se le han planteado.

96. Por otra parte, el derecho internacional humanitario reviste especial importancia. Los poderes y obligaciones de Israel en el Territorio Palestino Ocupado se rigen por el Convenio de Ginebra relativo a la Protección debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra, de 12 de agosto de 1949 (en adelante, el “Cuarto Convenio de Ginebra”), y por el derecho internacional consuetudinario. Como observó la Corte en su opinión consultiva sobre el *Muro*, “el Cuarto Convenio de Ginebra es aplicable en cualquier territorio ocupado en caso de que surja un conflicto armado entre dos o varias Altas Partes Contratantes” (*I.C.J. Reports 2004 (I)*, pág. 177, párr. 101). Egipto, Israel y Jordania eran partes en dicho Convenio cuando estalló el conflicto armado de 1967. Por lo tanto, el Cuarto Convenio de Ginebra es aplicable en el Territorio Palestino Ocupado. El hecho de que un gran número de normas de dicho Convenio sean tan fundamentales para el respeto de la persona humana y constituyan principios elementales de humanidad hace que “todos los Estados ha[yan] de cumplir esas normas, hayan o no ratificado los convenios que las estatuyen, porque constituyen principios intransgredibles del derecho internacional consuetudinario” (véase *ibid.*, pág. 199, párr. 157; donde se cita *Legalidad de la amenaza o el empleo de armas*

nucleares, opinión consultiva, *I.C.J. Reports 1996 (I)*, pág. 257, párr. 79). Estas normas incorporan obligaciones que son esencialmente de carácter *erga omnes* (*Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el Territorio Palestino Ocupado*, opinión consultiva, *I.C.J. Reports 2004 (I)*, pág. 199, párr. 157). De conformidad con el artículo 154 del Cuarto Convenio de Ginebra, dicho Convenio es complementario de las normas contenidas en las secciones II y III del Reglamento de La Haya. Como ha observado la Corte, el Reglamento de La Haya ha pasado a formar parte del derecho internacional consuetudinario (*ibid.*, pág. 172, párr. 89), por lo que es vinculante para Israel.

97. En lo que respecta al derecho internacional de los derechos humanos, la Corte observa que Israel es parte en varios instrumentos jurídicos que contienen obligaciones en materia de derechos humanos, entre ellos la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de 21 de diciembre de 1965 (en adelante, “Convención contra la Discriminación Racial”), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 16 de diciembre de 1966 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966.

98. Numerosos participantes sostienen que tanto el derecho internacional de los derechos humanos como el derecho internacional humanitario se aplican en una situación de conflicto armado u ocupación. Alegan además que el ámbito de aplicación del derecho internacional de los derechos humanos no depende únicamente de los límites territoriales de un Estado y que el derecho internacional de los derechos humanos es aplicable a los actos realizados por un Estado en el ejercicio de su jurisdicción fuera de su propio territorio. Según estos participantes, las obligaciones en materia de derechos humanos son complementarias de las que se derivan del derecho de la ocupación.

99. La Corte recuerda a este respecto que “los instrumentos internacionales de derechos humanos son aplicables ‘con respecto a los actos de un Estado en el ejercicio de su jurisdicción fuera de su propio territorio’, en particular en los territorios ocupados” (*Actividades armadas en el territorio del Congo (República Democrática del Congo c. Uganda)*, fallo, *I.C.J. Reports 2005*, pág. 243, párr. 216, donde se cita *Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el Territorio Palestino Ocupado*, opinión consultiva, *I.C.J. Reports 2004 (I)*, págs. 178 a 181, párrs. 107 a 113). La Corte recuerda además que la protección que ofrecen los convenios y convenciones de derechos humanos no cesa en caso de conflicto armado o de ocupación (*Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el Territorio Palestino Ocupado*, opinión consultiva, *I.C.J. Reports 2004 (I)*, pág. 178, párr. 106). Algunos derechos pueden estar contemplados exclusivamente en el derecho internacional humanitario, otros pueden estar contemplados exclusivamente en el derecho de los derechos humanos, y otros pueden estar contemplados en ambas ramas del derecho internacional (*ibid.*).

100. La Corte observa que Israel sigue estando vinculado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en lo que respecta a su conducta en relación con el Territorio Palestino Ocupado (véase *Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el Territorio Palestino Ocupado*, opinión consultiva, *I.C.J. Reports 2004 (I)*, págs. 180 y 181, párrs. 111 y 112).

101. En relación con la Convención contra la Discriminación Racial, la Corte observa que dicha Convención no contiene ninguna disposición que restrinja expresamente su aplicación territorial. Por el contrario, varias de sus disposiciones imponen obligaciones a los Estados partes que son aplicables “en los territorios bajo su jurisdicción” (artículo 3) o en relación con personas “que se hallen bajo su jurisdicción” (artículo 6; véase también el artículo 14, párrafos 1 y 2). Esto indica que la Convención contra la Discriminación Racial también es aplicable a la conducta de un Estado parte que tenga efectos más allá de su territorio. Con respecto al Territorio Palestino Ocupado en particular, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha considerado que la Convención contra la Discriminación Racial es aplicable a los actos de Israel en relación con las personas que se encuentran en ese territorio (Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, “Observaciones finales sobre los informes 17º a 19º combinados de Israel”, doc. [CERD/C/ISR/CO/17-19](#) de las Naciones Unidas (27 de enero de 2020), párrs. 9 y 10; Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, “Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 9 de la Convención: observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial: Israel”, doc. [CERD/C/304/Add.45](#) de las Naciones Unidas (30 de marzo de 1998), párr. 12). En opinión de la Corte, Israel debe cumplir las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención contra la Discriminación Racial cuando ejerce su jurisdicción fuera de su territorio.

102. Varios participantes en el presente procedimiento expresaron opiniones divergentes en cuanto a la pertinencia de los Acuerdos de Oslo en general (véase el párrafo 65 *supra*). Las partes en los Acuerdos de Oslo acordaron “ejercer sus poderes y responsabilidades de conformidad con” los Acuerdos “teniendo debidamente en cuenta las normas y principios reconocidos internacionalmente en materia de derechos humanos y estado de derecho” (Acuerdo de Oslo II, art. XIX). La Corte recuerda que los “derechos legítimos” del pueblo palestino reconocidos en los Acuerdos de Oslo incluyen el derecho a la libre determinación (*Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el Territorio Palestino Ocupado*, opinión consultiva, *I.C.J. Reports 2004 (I)*, pág. 183, párr. 118). Los Acuerdos de Oslo impedían además a las partes “emprender o adoptar cualquier medida que modifique el estatuto de la Ribera Occidental y la Franja de Gaza a la espera del resultado de las negociaciones sobre el estatuto permanente” (Acuerdo de Oslo II, art. XXXI, párr. 7). La Corte observa que, al interpretar los Acuerdos de Oslo, es necesario tener en cuenta el artículo 47 del Cuarto Convenio de Ginebra, que establece que “no se privará” a las personas protegidas de los beneficios del Convenio “por acuerdo concertado entre las autoridades del territorio ocupado y la Potencia ocupante”. Por todas estas razones, la Corte considera que los Acuerdos de Oslo no pueden entenderse en el sentido de que limitan las obligaciones de Israel en virtud de las normas pertinentes de derecho internacional aplicables en el Territorio Palestino Ocupado. Habida cuenta de estas consideraciones, la Corte tendrá en cuenta los Acuerdos de Oslo según proceda.

V. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE ISRAEL EN EL TERRITORIO PALESTINO OCUPADO

103. La Corte evaluará a continuación la conformidad de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, tal como se definen en la pregunta *a*), con sus obligaciones en virtud del derecho internacional. En particular, en el marco de este análisis, la Corte examinará sucesivamente las cuestiones de la ocupación prolongada, la política de asentamientos de Israel, la anexión del territorio palestino ocupado desde 1967 y la adopción por Israel de legislación y medidas conexas presuntamente discriminatorias. Una vez examinadas esas cuestiones, la Corte apreciará si las políticas y prácticas de Israel afectan al derecho del pueblo palestino a la libre determinación y, en caso afirmativo, de qué modo.

A. CUESTIÓN DE LA OCUPACIÓN PROLONGADA

104. La pregunta *a*) se refiere en parte a las consecuencias jurídicas que se derivan de los “prolongados actos de ocupación” del Territorio Palestino Ocupado realizados por Israel. A este respecto, la Corte señala que la ocupación israelí se mantiene desde hace más de 57 años. Para responder a este aspecto de la pregunta, la Corte debe referirse a la relación entre Israel, como Potencia ocupante, y la población protegida del territorio ocupado, que se rige por el derecho de la ocupación.

105. En virtud de su estatuto de Potencia ocupante, un Estado asume un conjunto de poderes y responsabilidades con respecto al territorio sobre el que ejerce un control efectivo. En este contexto, la Potencia ocupante tiene el deber de administrar el territorio en beneficio de la población local. No hay nada en el Cuarto Convenio de Ginebra ni en el derecho internacional consuetudinario que sugiera que la naturaleza y el alcance de los poderes y responsabilidades de la Potencia ocupante dependan de las circunstancias por las que se produjo la ocupación. Más bien, la naturaleza y el alcance de estos poderes y responsabilidades parten siempre de la misma premisa, a saber, que la ocupación es una situación temporal para responder a una necesidad militar, y no puede transferir el título de soberanía a la Potencia ocupante.

106. Esta premisa subyace en varias de las normas del derecho de la ocupación. En virtud del artículo 64 del Cuarto Convenio de Ginebra y de la norma consagrada en el artículo 43 del Reglamento de La Haya, por ejemplo, la Potencia ocupante está obligada a respetar, en principio, las leyes vigentes en el territorio ocupado. Del mismo modo, en virtud del quinto párrafo del artículo 50 del Cuarto Convenio de Ginebra, la Potencia ocupante no puede entorpecer la aplicación de una serie de medidas preferenciales adoptadas antes de la ocupación y, en virtud del primer párrafo del artículo 54, no puede modificar el estatuto de los funcionarios públicos o de los jueces del territorio ocupado. Además, la norma establecida en el artículo 55 del Reglamento de La Haya confiere a la Potencia ocupante únicamente la condición de administrador y usufructuario de los edificios públicos, inmuebles, bosques

y explotaciones agrícolas del territorio ocupado. Estas disposiciones ponen de relieve que la ocupación se concibe como una situación temporal, durante la cual se tolera el ejercicio por la Potencia ocupante de la autoridad sobre un territorio extranjero en beneficio de la población local.

107. La misma premisa explica también la dimensión temporal de los poderes y responsabilidades conferidos a la Potencia ocupante en virtud del derecho de la ocupación. A este respecto, la Corte observa que el párrafo tercero del artículo 6 del Cuarto Convenio de Ginebra establece un límite temporal a las obligaciones de un Estado en su calidad de Potencia ocupante. Este límite a la aplicación de algunas de las disposiciones del Cuarto Convenio de Ginebra no tenía por objeto eximir a los Estados de las obligaciones que les incumben en virtud de ese instrumento en situaciones de ocupación prolongada. Más bien, los trabajos preparatorios del Cuarto Convenio de Ginebra indican que este límite se basaba en el entendimiento de que, en el plazo de un año tras el fin de las operaciones militares, las autoridades locales del territorio ocupado habrían reanudado en gran medida el ejercicio de las funciones gubernamentales. Por tanto, no sería necesario que la Potencia ocupante continuara ejerciendo estas funciones (*Acta Final de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1949*, vol. II, sección A, informe de la Comisión III a la Asamblea Plenaria de la Conferencia Diplomática de Ginebra, págs. 815 y 816). Sin embargo, si las autoridades locales no han reanudado las funciones gubernamentales, la Potencia ocupante no queda liberada de las obligaciones que se derivan de la continuación de su control efectivo sobre el territorio ocupado. Su deber básico de administrar el territorio en beneficio de la población local se mantiene, al igual que todas las obligaciones individuales que se derivan de él. Cualquier otra conclusión sería contraria al objeto y fin del Cuarto Convenio de Ginebra y privaría a la población sometida a una ocupación prolongada de la protección de que goza en virtud del derecho internacional humanitario. En consecuencia, la Corte considera que, si las autoridades locales del territorio ocupado no han reanudado el ejercicio de las funciones gubernamentales un año después del cese de las operaciones militares, las obligaciones de la Potencia ocupante en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra siguen en vigor, no obstante lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 6. La Corte también señala que no existe un límite temporal para la aplicación de las obligaciones de una Potencia ocupante en virtud del Reglamento de La Haya.

108. Por otra parte, del artículo 6 del Cuarto Convenio de Ginebra no se desprende que, en caso de ocupación prolongada, la Potencia ocupante adquiera poderes adicionales por el transcurso del tiempo. El hecho de la ocupación no puede dar lugar a una transferencia de título, con independencia de su duración. Por lo tanto, el paso del tiempo no libera a la Potencia ocupante de las obligaciones que le incumben, incluida la obligación de abstenerse de ejercer actos de soberanía, ni amplía los poderes limitados y definidos que el derecho internacional humanitario confiere a la Potencia ocupante.

109. El hecho de que una ocupación se prolongue no modifica en sí mismo su estatuto jurídico en virtud del derecho internacional humanitario. Aunque se basa en el carácter temporal de la ocupación, el derecho que regula esta institución no establece límites temporales que, como tales, modifiquen el estatuto jurídico de la ocupación. La legalidad de la presencia de la Potencia ocupante en el territorio ocupado debe evaluarse más bien a la luz de otras normas. En particular, la ocupación consiste en el ejercicio por un Estado de un control efectivo en un territorio extranjero (véanse los párrafos 91 y 92 *supra*). Así pues, para que sea permisible, dicho ejercicio de control efectivo debe ser en todo momento compatible con las normas relativas a la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, incluida la prohibición de la adquisición de territorio derivada de la amenaza o el uso de la fuerza, así como con el derecho a la libre determinación. Por consiguiente, el hecho de que una ocupación se prolongue puede influir en la justificación, en virtud del derecho internacional, de la presencia continuada de la Potencia ocupante en el territorio ocupado. La Corte examinará estas cuestiones más adelante (véanse los párrafos 157 a 179 y 230 a 243).

110. Es en este contexto en el que deben analizarse las políticas y prácticas de Israel, así como su presencia continuada en el Territorio Palestino Ocupado. La Corte pasa a continuación a examinar estas políticas y prácticas, comenzando por la política de asentamientos de Israel.

B. POLÍTICA DE ASENTAMIENTOS

1. Sinopsis

111. La pregunta *a)* planteada por la Asamblea General se refiere en parte a las consecuencias jurídicas que se derivan de la política de asentamientos de Israel. La Corte observa que el término inglés “settlement”, tal como se utiliza en la resolución de la Asamblea General y en otros textos, presenta cierto grado de ambigüedad. Puede entenderse que ese término se refiere a los núcleos de población israelíes establecidos o apoyados por Israel en el Territorio Palestino Ocupado; también puede entenderse que abarca todos los procesos y estructuras de carácter físico y no físico que constituyen, permiten y apoyan el establecimiento, la expansión y el mantenimiento de esos núcleos. En francés, ambos conceptos se distinguen mediante el uso de los términos “colonie” y “colonisation”, respectivamente. En la versión francesa de la resolución se utiliza el término “colonisation”, lo que indica que la Corte está llamada a examinar de manera integral la política de Israel en relación con los asentamientos. El hecho de que la pregunta *b)*, que ofrece el contexto para la interpretación de la pregunta *a)*, describa el asentamiento como una política o práctica confirma esta interpretación.

112. La Corte es consciente de que a veces se distingue entre los “asentamientos”, por una parte, y los “puestos de avanzada”, que se establecen en violación del derecho interno israelí, por otra. En opinión de la Corte, esta distinción es irrelevante a efectos de determinar si los núcleos de población en cuestión forman parte de la política de asentamientos de Israel. Lo que importa es si se establecen o mantienen con el apoyo de Israel. A este respecto, la Corte observa que Israel adopta periódicamente medidas para legalizar con carácter retroactivo los puestos de avanzada y que les proporciona la infraestructura necesaria para su mantenimiento (véanse “Los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado: informe del Secretario General”, doc. [A/78/554](#) de las Naciones Unidas (25 de octubre de 2023), párrs. 15 a 20; “Asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado: informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, doc. [A/HRC/52/76](#) de las Naciones Unidas (15 de marzo de 2023), párrs. 14 y 15).

113. La Corte recuerda que Israel ha llevado a cabo una política de asentamientos a lo largo de toda su ocupación del Territorio Palestino Ocupado (véanse los párrafos 59 y 68 *supra*). Observa además que la cuestión de los asentamientos israelíes ha sido ampliamente examinada por diversos órganos y organismos de las Naciones Unidas. Por ejemplo, mediante su resolución [19/17](#), el Consejo de Derechos Humanos estableció una misión internacional independiente de investigación de las repercusiones de los asentamientos israelíes en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del pueblo palestino en todo el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental (en adelante, la “misión internacional independiente de determinación de los hechos”). El Secretario General de las Naciones Unidas, así como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publican periódicamente informes que documentan los hechos relativos al establecimiento y la expansión de los asentamientos israelíes. La cuestión de las actividades de asentamiento israelíes y sus implicaciones también se trata en los informes de la Comisión Internacional Independiente de Investigación, así como en los informes de los Relatores Especiales, incluido el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967. Estos informes se basan en diversas fuentes, incluidos testimonios directos, para exponer un análisis fáctico detallado de la política de asentamientos de Israel.

114. La Corte observa además que, entre 1967 y 2005, la política de asentamientos de Israel se llevó a cabo en la Ribera Occidental, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza. Desde la retirada de los asentamientos israelíes de la Franja de Gaza en 2005 (véase el párrafo 88 *supra*), la política de asentamientos de Israel ha continuado en la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental; por consiguiente, la Corte limitará su análisis a la actual política de asentamientos de Israel en la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental. Al mismo tiempo, la Corte observa que la política de asentamientos llevada a cabo por Israel en la Franja de Gaza hasta 2005 no era sustancialmente diferente de la que se aplica en la actualidad en la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental.

2. Traslado de la población civil

115. En su opinión consultiva sobre el *Muro*, la Corte consideró que la política de asentamientos de Israel infringía el sexto párrafo del artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra, que establece que “[l]a Potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación o el traslado de una parte de la propia población civil al territorio por ella ocupado” (*I.C.J. Reports 2004 (I)*, pág. 183, párr. 120). Como observó la Corte en dicha opinión consultiva, esta disposición

“prohíbe no solo las deportaciones o los traslados forzosos de población, como los realizados durante la Segunda Guerra Mundial, sino también todas las medidas adoptadas por una Potencia ocupante con el fin de organizar o fomentar traslados de partes de su propia población al territorio ocupado” (*ibid.*).

De hecho, no hay nada en los términos o el contexto de la disposición, ni en el objeto y fin o la historia de la redacción del Cuarto Convenio de Ginebra, que sugiera que dicha disposición prohíbe únicamente el traslado forzoso de partes de la población civil de la Potencia ocupante al territorio ocupado. En el presente asunto, existen numerosas pruebas de la política de Israel consistente en ofrecer incentivos para el traslado de particulares y empresas israelíes a la Ribera Occidental, así como para su desarrollo industrial y agrícola por los colonos (véanse, por ejemplo, “Consecuencias económicas y sociales de la ocupación israelí para las condiciones de vida del pueblo palestino en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén, y para la población árabe en el Golán sirio ocupado”, doc. [A/53/163-E/1998/79](#) de las Naciones Unidas (14 de julio de 1998), párr. 21; “Base de datos de todas las empresas que participan en las actividades detalladas en el párrafo 96 del informe de la misión internacional independiente de investigación de las repercusiones de los asentamientos israelíes en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del pueblo palestino en todo el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental: informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, doc. [A/HRC/37/39](#) de las Naciones Unidas (1 de febrero de 2018), párrs. 43 a 45; “informe sobre la asistencia de la UNCTAD al pueblo palestino: evolución de la economía del Territorio Palestino Ocupado”, doc. [TD/B/EX\(71\)/2](#) de las Naciones Unidas, 20 de septiembre de 2021, párrs. 40 y 41).

116. Como ya se ha señalado, Israel legaliza periódicamente puestos de avanzada que se han establecido en violación de su legislación interna (véase el párrafo 112). Por ejemplo, en febrero de 2023, Israel anunció su decisión de legalizar diez puestos de avanzada en la zona C de la Ribera Occidental (“Los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado: informe del Secretario General”, doc. [A/78/554](#) de las Naciones Unidas (25 de octubre de 2023), párr. 17). La Corte considera que, al llevar a cabo estas prácticas, Israel alienta el traslado de parte de su población civil a puestos de avanzada en la Ribera Occidental, con lo que infringe el sexto párrafo del artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra.

117. Por otra parte, la construcción de asentamientos por Israel va acompañada de infraestructuras civiles especialmente diseñadas en la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental, que integran los asentamientos en el territorio de Israel. La Secretaría de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) informa de que Israel

“ha gastado miles de millones de dólares en la construcción de modernas infraestructuras para favorecer la expansión de los asentamientos, como carreteras, redes de abastecimiento de agua y alcantarillado, redes de comunicaciones y electricidad, sistemas de seguridad e instalaciones educativas y sanitarias” (“informe sobre la asistencia de la UNCTAD al pueblo palestino: evolución de la economía del Territorio Palestino Ocupado”, doc. [TD/B/EX\(71\)/2](#) de las Naciones Unidas (20 de septiembre de 2021), párr. 40).

La Comisión Internacional Independiente de Investigación añade que la continua expansión de los asentamientos y las infraestructuras conexas que lleva a cabo Israel contribuye activamente a afianzar la ocupación (“informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel”, doc. [A/77/328](#) de las Naciones Unidas (14 de septiembre de 2022), párr. 51). Como ha señalado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la población de los asentamientos israelíes ha crecido rápidamente como consecuencia del establecimiento de infraestructuras israelíes (“Asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado: informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, doc. [A/HRC/52/76](#) de las Naciones Unidas (15 de marzo de 2023), párr. 10). Además, Israel impone condiciones específicas para el uso de la infraestructura y la red de transporte en la Ribera Occidental (véanse los párrafos 198 a 206 *infra*).

118. La Corte también observa que la prohibición del traslado de la población civil de la Potencia ocupante, que figura en el sexto párrafo del artículo 49, no está supeditada al consiguiente desplazamiento forzoso de la población local. El traslado de miembros de la población civil de la Potencia ocupante al territorio ocupado está prohibido, con independencia de que provoque el desplazamiento de la población local. En cualquier caso, como la Corte examinará más adelante, el traslado de la población civil israelí a la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental ha provocado el desplazamiento de los palestinos que residían allí (véanse los párrafos 142 a 147).

119. Habida cuenta de lo que antecede, la Corte considera que el traslado por Israel de colonos a la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental, así como el mantenimiento por Israel de su presencia, es contrario al sexto párrafo del artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra.

3. Confiscación o requisa de tierras

120. La expansión de los asentamientos israelíes en la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental se basa en la confiscación o requisa de grandes extensiones de tierra. Según la Comisión Internacional Independiente de Investigación, desde 1967 se han expropiado más de 2 millones de dunums (aproximadamente 2.000 km²) solo en la zona C, lo que representa más de un tercio de la Ribera Occidental (“informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel”, doc. [A/77/328](#) de las Naciones Unidas (14 de septiembre de 2022), párr. 39). Esto incluye amplias extensiones de tierra que deberían considerarse propiedad privada, pero que Israel ha declarado tierras del Estado —y, por tanto, destinadas al uso público— en virtud de una interpretación selectiva del derecho vigente en el momento de la ocupación israelí (*ibid.*, párr. 33; “informe de la misión internacional independiente de investigación de las repercusiones de los asentamientos israelíes en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del pueblo palestino en todo el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental”, doc. [A/HRC/22/63](#) de las Naciones Unidas (7 de febrero de 2013), párr. 63). El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informa de que la práctica totalidad de esas tierras del Estado se han adjudicado en beneficio de asentamientos israelíes (“Asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado: informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, doc. [A/HRC/52/76](#) de las Naciones Unidas (15 de marzo de 2023), párr. 8).

121. En Jerusalén Occidental, donde, como explicará la Corte más adelante (véase el párrafo 138), Israel aplica de forma integral su derecho interno, la confiscación de tierras palestinas es posible gracias a la aplicación de la Ley de Bienes de Ausentes de 1950. Esta ley permite la confiscación de bienes cuyos propietarios se encontraban fuera de la zona después del 27 de noviembre de 1947.

122. Según el artículo 46 del Reglamento de La Haya, la propiedad privada debe ser respetada y no puede ser confiscada. La Corte observa que esta prohibición de confiscación de la propiedad privada es incondicional: no admite excepciones, ya sea por exigencias militares o por cualquier otro motivo (véase *Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el Territorio Palestino Ocupado*, opinión consultiva, *I.C.J. Reports 2004 (I)*, pág. 192, párr. 135). Además, el artículo 52 del Reglamento de La Haya establece que no pueden exigirse requisas en especie a los habitantes salvo para las necesidades del ejército de ocupación. A su vez, los bienes inmuebles públicos deben ser administrados por la Potencia ocupante de conformidad con las normas del usufructo previstas en el artículo 55 del Reglamento de La Haya. En opinión de la Corte, esto implica que la Potencia ocupante tiene el deber de administrar los bienes públicos en beneficio de la población local o, excepcionalmente, para atender las necesidades del ejército de ocupación. En el presente asunto, sin embargo, la propiedad pública confiscada o requisada para el desarrollo de los asentamientos israelíes beneficia a la población civil de colonos, en detrimento de la población palestina local. Por consiguiente, la Corte concluye que estas políticas territoriales no son conformes con los artículos 46, 52 y 55 del Reglamento de La Haya.

123. La Corte observa que esta conclusión es coherente con la alcanzada en su opinión consultiva sobre el *Muro*. En ese asunto, la Corte examinó las consecuencias jurídicas de la práctica israelí consistente en confiscar y requisar tierras palestinas, en la medida en que estaba asociada a la construcción por Israel del muro en el Territorio Palestino Ocupado. Basándose en la información de que disponía, la Corte concluyó que la construcción del muro había dado lugar a la destrucción o requisa de bienes en condiciones que contravenían lo estipulado en los artículos 46 y 52 del Reglamento de La Haya (*I.C.J. Reports 2004 (I)*, pág. 189, párr. 132). Como la Corte observó en esa opinión, el sinuoso trazado del muro se diseñó de manera que incluyera en su interior la gran mayoría de los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado (*ibid.*, pág. 183, párr. 119). Dado que la construcción del muro forma parte integrante de la política de asentamientos de Israel, la Corte considera que la conclusión a la que llegó en su opinión consultiva sobre el *Muro* en relación con la confiscación o requisa de tierras a efectos de la construcción del muro es también aplicable a la toma de tierras para cualquier fin que apoye la continuación de la política de asentamientos de Israel. Esto incluye las tierras utilizadas para el establecimiento de asentamientos israelíes, así como sectores de la “zona cerrada” (que se sitúan entre el muro y la Línea Verde de 1949), las zonas de seguridad especial cercanas a los asentamientos y las zonas militares de tiro cerradas.

4. Explotación de los recursos naturales

124. La Corte recuerda que, en virtud del principio de derecho internacional consuetudinario contenido en el artículo 55 del Reglamento de La Haya, la Potencia ocupante solo debe considerarse administradora y usufructuaria de los recursos naturales del territorio ocupado, incluidos, entre otros, los bosques y las explotaciones agrícolas, y debe “salvaguardar el capital” de esos recursos. Por lo tanto, el uso de los recursos naturales por la Potencia ocupante no debe exceder los límites de lo necesario para los fines de la ocupación. A este respecto, la Corte observa que la Potencia ocupante tiene el deber permanente de garantizar a la población local un abastecimiento suficiente de víveres, incluida agua (artículo 55 del Cuarto Convenio de Ginebra). Además, el uso de los recursos naturales en el territorio ocupado debe ser sostenible y evitar daños ambientales. Esto se refleja en el principio 23 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, que establece que “[d]eben protegerse el medio ambiente y los recursos naturales de los pueblos sometidos a ... ocupación” (véase también Comisión de Derecho Internacional, “Proyecto de principios sobre la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados, con sus comentarios”, 2022, doc. [A/77/10](#) de las Naciones Unidas, principio 20).

125. En la causa relativa a las *Actividades armadas en el territorio del Congo (República Democrática del Congo c. Uganda)*, la Corte señaló la importancia del principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales en virtud del derecho internacional consuetudinario (fallo, *I.C.J. Reports 2005*, pág. 251, párr. 244). En ese asunto, la Corte determinó que, aunque varios oficiales y soldados de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda habían participado en el saqueo, el pillaje y la explotación de los recursos naturales de la República Democrática del Congo, no disponía de pruebas creíbles que demostraran que Uganda, como Potencia ocupante, aplicaba una política gubernamental dirigida a la explotación de los recursos naturales de la República Democrática del Congo (*ibid.*, párr. 242). La Corte consideró que, en estas circunstancias, el principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales no era aplicable (*ibid.*, párr. 244). Sin embargo, cuando una Potencia ocupante aplica una política de explotación de los recursos naturales en el territorio ocupado contraria al derecho de la ocupación, esa política puede vulnerar el principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales.

126. La Corte observa que la zona C es rica en recursos naturales (“Consecuencias económicas y sociales de la ocupación israelí para las condiciones de vida del pueblo palestino en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y de la población árabe en el Golán sirio ocupado”, doc. [A/78/127-E/2023/95](#) de las Naciones Unidas (30 de junio de 2023), párr. 61; Banco Mundial, *Area C and the Future of the Palestinian Economy* (2013), págs. 21 a 25). Existen pruebas de que Israel explota estos recursos naturales, incluidos el agua, los minerales y otros recursos, en beneficio de su propia población y en detrimento, o incluso con exclusión, de la población palestina local.

127. Según la información de que dispone la Corte, Israel puso los recursos hídricos del Territorio Palestino Ocupado bajo su control militar tras el inicio de la ocupación en 1967; posteriormente, en 1982, transfirió la autoridad sobre los recursos hídricos de la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental a Mekorot, su empresa nacional de aguas (“Distribución de los recursos hídricos en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental: informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, doc. [A/HRC/48/43](#) de las Naciones Unidas (15 de octubre de 2021), párr. 18).

128. Informes de las Naciones Unidas confirman que Israel prioriza el abastecimiento de agua de los asentamientos, en detrimento de las comunidades palestinas, que sufren cortes de agua prolongados y frecuentes (“informe de la misión internacional independiente de investigación de las repercusiones de los asentamientos israelíes en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del pueblo palestino en todo el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental”, doc. [A/HRC/22/63](#) de las Naciones Unidas (7 de febrero de 2013), párrs. 83 a 85). Israel ha impuesto restricciones a la construcción y mantenimiento por los palestinos de instalaciones de abastecimiento de agua sin permiso militar, e impide a los palestinos acceder al río Jordán y extraer agua de él (“Consecuencias económicas y sociales de la ocupación israelí para las condiciones de vida del pueblo palestino en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y de la población árabe en el Golán sirio ocupado”, doc. [A/78/127-E/2023/95](#) de las Naciones Unidas (30 de junio de 2023), párrs. 62 y 63). Así pues, en la práctica, los palestinos apenas pueden garantizar el acceso al agua en amplias zonas de la Ribera Occidental; en su lugar deben comprar importantes cantidades de agua a Israel a un precio elevado (“Distribución de los recursos hídricos en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental: informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, doc. [A/HRC/48/43](#) de las Naciones Unidas (15 de octubre de 2021), párrs. 30 y 43).

129. Como consecuencia del control y la gestión de los recursos hídricos de la Ribera Occidental por Israel, tanto la cantidad como la calidad del agua a la que tienen acceso los palestinos están muy por debajo de los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (“Distribución de los recursos hídricos en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental: informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, doc. [A/HRC/48/43](#) de las Naciones Unidas (15 de octubre de 2021), párr. 26). El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha observado con preocupación los efectos de la política de asentamientos de Israel en el acceso de los palestinos al agua (“Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de Israel”, doc. [E/C.12/ISR/CO/4](#) de las Naciones Unidas (12 de noviembre de 2019), párr. 46).

130. Según la Comisión Internacional Independiente de Investigación y la UNCTAD, las políticas de Israel en materia de agua y tierras han provocado la reducción de las tierras agrícolas de 2,4 millones de dunums (aproximadamente 2.400 km²) en 1980 a alrededor de 1 millón de dunums (aproximadamente 1.000 km²) en 2010, mientras que el porcentaje de la agricultura en el producto interno bruto del Territorio Palestino Ocupado disminuyó del 35 % en 1972 al 12 % en 1995, y a menos del 4 % en 2020. Además, la expansión de los asentamientos y de las zonas industriales ha contribuido a la contaminación del agua dulce y las aguas subterráneas. La disminución de los recursos hídricos y la degradación ambiental conexa han socavado gravemente el sector agrícola palestino, reduciendo las posibilidades de empleo (“informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel”, doc. [A/77/328](#) de las Naciones Unidas (14 de septiembre de 2022), párr. 72; “informe sobre la asistencia de la UNCTAD al pueblo palestino: evolución de la economía del Territorio Palestino Ocupado”, doc. [TD/B/67/5](#) de las Naciones Unidas (5 de agosto de 2020), párr. 31).

131. La misión internacional independiente de determinación de los hechos indicó que el 86 % del valle del Jordán y del mar Muerto, regiones ricas en minerales, se encontraba en la práctica bajo la jurisdicción de los consejos regionales de los asentamientos israelíes y que los asentamientos extraían minerales y cultivaban tierras agrícolas fértiles a expensas de los palestinos (“informe de la misión internacional independiente de investigación de las repercusiones de los asentamientos israelíes en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del pueblo palestino en todo el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental”, doc. [A/HRC/22/63](#) de las Naciones Unidas (7 de febrero de 2013), párr. 36). Según la Comisión Internacional Independiente de Investigación, Israel ha otorgado concesiones mineras a canteras que ese país explota en la zona C; la mayor parte de las materias primas extraídas se transfiere a Israel (“informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel”, doc. [A/77/328](#) de las Naciones Unidas (14 de septiembre de 2022), párr. 37). Por el contrario, se ha informado de que Israel no ha concedido ningún permiso a empresas palestinas para explotar canteras en la zona C desde 1994 (“Consecuencias económicas y sociales de la ocupación israelí para las condiciones de vida del pueblo palestino en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y de la población árabe en el Golán sirio ocupado”, doc. [A/74/88-E/2019/72](#) de las Naciones Unidas (13 de mayo de 2019), párr. 86).

132. La Corte observa que el Consejo de Seguridad ha destacado la importancia de garantizar la protección de los recursos hídricos de los territorios ocupados (resolución [465 \(1980\)](#) del Consejo de Seguridad, de 1 de marzo de 1980, párr. 8). La Asamblea General ha exigido en repetidas ocasiones que Israel “deje de explotar, dañar, destruir, agotar y poner en peligro los recursos naturales del Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y del Golán sirio ocupado” (véase, por ejemplo, la resolución [78/170](#) de la Asamblea General, de 19 de diciembre de 2023, párr. 2).

133. Sobre la base de las pruebas de que dispone, la Corte considera que el uso que hace Israel de los recursos naturales del Territorio Palestino Ocupado es incompatible con las obligaciones que le incumben en virtud del derecho internacional. Al desviar una gran parte de los recursos naturales a su propia población, incluidos los colonos, Israel incumple su obligación de actuar como administrador y usufructuario. A este respecto, la Corte recuerda que el traslado por Israel de su propia población al Territorio Palestino Ocupado es contrario al derecho internacional (véase el párrafo 119 *supra*). Por lo tanto, en opinión de la Corte, el uso de los recursos naturales del territorio ocupado no puede justificarse con referencia a las necesidades de esa población. La Corte considera además que, al restringir gravemente el acceso de la población palestina al agua disponible en el Territorio Palestino Ocupado, Israel actúa de forma incompatible con su obligación de garantizar la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficientes (artículo 55 del Cuarto Convenio de Ginebra). La Corte observa que, si bien el Acuerdo de Oslo II regula el abastecimiento de agua y el tratamiento de las aguas residuales en el Territorio Palestino Ocupado (artículo 40 del apéndice I de su anexo III), dicho acuerdo no puede interpretarse en el sentido de que menoscabe

la obligación que incumbe a Israel en virtud del derecho internacional humanitario de suministrar agua en cantidad y calidad suficientes (véase el párrafo 102 *supra*). Habida cuenta de lo que antecede, la Corte concluye igualmente que la política de Israel de explotación de los recursos naturales del Territorio Palestino Ocupado es incompatible con su obligación de respetar el derecho del pueblo palestino a la soberanía permanente sobre los recursos naturales.

5. Extensión del derecho israelí

134. En virtud del artículo 43 del Reglamento de La Haya, la Potencia ocupante debe, en principio, respetar las leyes vigentes en el territorio ocupado, salvo impedimento absoluto. Esta norma se complementa con el segundo párrafo del artículo 64 del Cuarto Convenio de Ginebra, que autoriza excepcionalmente a la Potencia ocupante a

“imponer a la población del territorio ocupado las disposiciones que sean indispensables para permitirle cumplir las obligaciones derivadas del [Cuarto] Convenio [de Ginebra], y garantizar la administración normal del territorio y la seguridad, sea de la Potencia ocupante, sea de los miembros y de los bienes de las fuerzas o de la administración de ocupación, así como de los establecimientos y de las líneas de comunicación que ella utilice”.

En principio, pues, el derecho de la ocupación no priva a las instituciones civiles de la población local en el territorio ocupado de la autoridad reglamentaria que puedan tener. Más bien, confiere a la Potencia ocupante un conjunto de poderes de reglamentación con carácter excepcional y por motivos específicos tasados.

135. En el presente asunto, Israel ha extendido su ámbito de regulación legal a la Ribera Occidental. Como explica la Comisión Internacional Independiente de Investigación:

“Desde el comienzo de la ocupación, Israel ha extendido su ordenamiento jurídico a la Ribera Occidental, lo que ha dado lugar a cambios de gran alcance en el derecho aplicable y, en la práctica, [a la aplicación de] dos ramas de ese derecho: el derecho militar y el derecho interno israelí, que se ha[] extendido extraterritorialmente de manera que solo se apli[ca] a los colonos israelíes. El proceso se ha basado en órdenes militares, legislación y resoluciones del Tribunal Supremo, e incluye el derecho penal, la ley nacional del seguro de salud, la legislación tributaria y las leyes relativas a las elecciones. Existen también ordenamientos jurídicos separados para hacer cumplir las leyes de tráfico y una separación institucional y legislativa en el régimen de planificación y construcción.” (“informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel”, doc. [A/77/328](#) de las Naciones Unidas (14 de septiembre de 2022), párr. 46).

136. Israel ha sustituido en gran medida el derecho local vigente en el Territorio Palestino Ocupado al comienzo de la ocupación en 1967 por su propio derecho militar. Quienes cometen delitos tipificados en el derecho militar israelí son juzgados por tribunales militares israelíes y no por tribunales civiles o penales locales. Además, en la práctica, las autoridades militares israelíes competentes aplican a los colonos el derecho aplicable a los civiles en Israel, así como a los judíos no israelíes presentes en la Ribera Occidental. Por consiguiente, los colonos de la Ribera Occidental gozan de los derechos y privilegios de la ciudadanía israelí, así como de la protección de las leyes internas y las prestaciones sociales israelíes. Además, los colonos no están sujetos a los tribunales militares israelíes, sino que son juzgados por los tribunales civiles de Israel. Así, los palestinos de la Ribera Occidental están sometidos al derecho militar y a los tribunales militares, mientras que los colonos se benefician del derecho penal y el sistema de justicia penal que se aplican a los civiles en Israel.

137. Por otra parte, los consejos regionales y locales de colonos han asumido *de facto* la jurisdicción sobre los asentamientos en la Ribera Occidental (“Los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado: informe del Secretario General”, doc. [A/67/375](#) de las Naciones Unidas (18 de septiembre de 2012), párrs. 11 a 13). A finales de 2022, Israel transfirió el poder de decisión sobre los asuntos civiles en la zona C, que hasta entonces correspondía al ejército, a un ministro civil dependiente del Ministerio de Defensa (véase el párrafo 156 *infra*).

138. En Jerusalén Oriental se aplica el derecho interno israelí desde el comienzo de la ocupación en 1967. Mediante su Orden de Gobierno y Procedimientos Legislativos (núm. 11), 5727-1967, de 28 de junio de 1967,

Israel declaró que su derecho interno, su jurisdicción y su administración eran aplicables a Jerusalén Oriental, cuyos límites geográficos se ampliaron. En 1980, Israel aprobó una Ley Básica que proclamaba la “Jerusalén completa y unida” como capital de Israel y sede de su Gobierno (“Ley Básica: Jerusalén Capital de Israel”, 5740-1980). La misma ley prohibía la delegación de cualquier poder relativo a Jerusalén a “una potencia política o de gobierno extranjera, o a cualquier otra autoridad extranjera similar, ya sea de forma permanente o por un período determinado”. La Corte analizará más adelante las políticas de Israel en Jerusalén Oriental, así como su conformidad con el derecho internacional (véanse los párrafos 163 a 165). En este punto, basta con señalar que, desde la perspectiva del derecho interno, Israel trata Jerusalén Oriental como su propio territorio nacional, donde aplica íntegramente el derecho israelí con exclusión de cualquier otro sistema jurídico interno.

139. En el presente asunto, la Corte no está convencida de que la extensión del derecho israelí a la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental esté justificada por ninguno de los motivos establecidos en el segundo párrafo del artículo 64 del Cuarto Convenio de Ginebra. A este respecto, la Corte recuerda que el traslado por Israel de su población civil a la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental es contrario al Cuarto Convenio de Ginebra (véase el párrafo 119 *supra*); por lo tanto, no puede invocarse como motivo para justificar la reglamentación que impone en estos territorios. Además, la aplicación integral de la legislación israelí en Jerusalén Oriental, así como su aplicación en relación con los colonos en toda la Ribera Occidental, no puede considerarse “indispensable” para ninguno de los fines enumerados en el segundo párrafo del artículo 64 del Cuarto Convenio de Ginebra.

140. Los arreglos concertados entre Israel y la OLP en los Acuerdos de Oslo apuntan en la misma dirección. En particular, la Corte señala que, de conformidad con el artículo X, párrafo 4, del Acuerdo de Oslo II, “Israel seguirá desempeñando la responsabilidad de la seguridad exterior, así como la responsabilidad de la seguridad general de los israelíes con el fin de salvaguardar su seguridad interior y el orden público”. Además, según el artículo XIII, párrafo 2 a), de dicho Acuerdo, “Israel ejercerá la responsabilidad primordial de la seguridad con el fin de proteger a los israelíes y hacer frente a la amenaza del terrorismo”. El artículo XVII, párrafo 4 b), del Acuerdo estipula que, en relación con las zonas que no están bajo la jurisdicción territorial del Consejo Palestino establecido por dicho Acuerdo, “el gobierno militar israelí conservará los poderes y responsabilidades legislativos, judiciales y ejecutivos necesarios, de conformidad con el derecho internacional”. No hay nada en estas disposiciones que sugiera una extensión de los poderes concretos que se confieren a Israel en virtud del derecho de la ocupación. Por el contrario, al establecer que Israel “seguirá” desempeñando responsabilidades y “conservará” ciertos poderes, estas disposiciones pretenden claramente preservar algunos de los poderes conferidos a Israel en virtud del derecho de la ocupación y no aumentarlos. Esto queda confirmado por el hecho de que tales disposiciones reconocen que los poderes de Israel se basan en motivos de seguridad y orden público, es decir, motivos que ya están reconocidos en el derecho de la ocupación como base para permitir la reglamentación por parte de la Potencia ocupante. Por último, en el artículo XVII, párrafo 4 b), del Acuerdo de Oslo II se establece expresamente que Israel solo conserva los poderes “necesarios” y, en cualquier caso, “de conformidad con el derecho internacional”, incluido el derecho de la ocupación. De ello se desprende que Israel no puede basarse en los Acuerdos de Oslo para ejercer su jurisdicción en el Territorio Palestino Ocupado de una manera que contravenga sus obligaciones en virtud del derecho de la ocupación (véase también el párrafo 102).

141. Por estas razones, la Corte considera que Israel ha ejercido su autoridad reglamentaria como Potencia ocupante de manera incompatible con la norma que figura en el artículo 43 del Reglamento de La Haya y el artículo 64 del Cuarto Convenio de Ginebra.

6. Desplazamiento forzoso de la población palestina

142. La Corte pasa a examinar a continuación los efectos de la política de asentamientos de Israel sobre la partida de la población palestina. A este respecto, recuerda la observación que formuló en la opinión consultiva sobre el *Muro* en el sentido de que la política de asentamientos de Israel contribuía a la partida de poblaciones palestinas de algunas zonas de la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental (*I.C.J. Reports 2004 (I)*, pág. 184, párr. 122).

143. La Corte observa que la confiscación de tierras a gran escala y la privación de acceso a los recursos naturales despojan a la población local de sus medios básicos de subsistencia y la empujan a marcharse. Además, una serie de medidas adoptadas por las fuerzas militares israelíes ha exacerbado la presión sobre la población palestina para que abandone ciertas partes del Territorio Palestino Ocupado en contra de su voluntad (véanse los párrafos 180 a 229 *infra*). Los informes del Secretario General de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las

Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros organismos de las Naciones Unidas documentan que Israel expulsa o desplaza cada año a cientos de palestinos del Territorio Palestino Ocupado, normalmente como consecuencia de la demolición de sus bienes o de las políticas de zonificación y planificación y los planes de reubicación asociados a ellas. Por ejemplo, el Secretario General de las Naciones Unidas informó de que más de mil palestinos fueron desplazados entre junio de 2022 y mayo de 2023 después de que las autoridades israelíes demolieran, confiscaran o precintaran sus bienes (“Los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado: informe del Secretario General”, doc. [A/78/554](#) de las Naciones Unidas (25 de octubre de 2023), párr. 31). Asimismo, las demoliciones causaron el desplazamiento de más de 700 palestinos entre abril de 2021 y marzo de 2022 (“Consecuencias económicas y sociales de la ocupación israelí para las condiciones de vida del pueblo palestino en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y de la población árabe en el Golán sirio ocupado”, doc. [A/77/90-E/2022/66](#) de las Naciones Unidas (8 de junio de 2022), párr. 43). Por otra parte, en mayo de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Israel rechazó los recursos presentados contra las órdenes de desalojo dictadas contra aproximadamente 1.150 residentes palestinos de una zona designada por Israel como zona de tiro (HJC 413/13 *Abu ‘Aram v. Minister for Defence*, 2022; véase también “Asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado: informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, doc. [A/HRC/52/76](#) de las Naciones Unidas (15 de marzo de 2023), párrs. 52 y 53). Estas prácticas ponen a más palestinos en peligro de desalojo forzoso en el futuro.

144. La Corte recuerda que, conforme al párrafo primero del artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra, “[l]os traslados en masa o individuales, de índole forzosa, así como las deportaciones de personas protegidas del territorio ocupado al territorio de la Potencia ocupante o al de cualquier otro país, ocupado o no, están prohibidos, sea cual fuere el motivo”. El tenor de esta disposición distingue entre, por una parte, los “traslados” y, por otra, las “deportaciones ... del territorio ocupado al territorio de la Potencia ocupante o al de cualquier otro país”. Según el sentido corriente de estos términos, están prohibidos todos los traslados forzosos de personas protegidas, incluidos los traslados dentro del territorio ocupado. Esta interpretación se ve confirmada, en primer lugar, por el contexto de la disposición, en particular el segundo párrafo del artículo 49, que prevé una excepción limitada a la norma establecida en el primer párrafo. Según esa excepción, a la que la Corte volverá más adelante (véase el párrafo 146), la evacuación de una zona determinada puede permitirse, pero “no podrá[] implicar el desplazamiento de personas protegidas más que en el interior del territorio ocupado, excepto en casos de imposibilidad material”. Además, la evacuación solo puede ordenarse en dos casos excepcionales, a saber, cuando así lo requieran la seguridad de la población o imperiosas razones militares. La presencia del segundo párrafo, que establece las condiciones que permiten excepcionalmente el desplazamiento interno de la población local, indica que, por regla general, dicho desplazamiento interno entra en el ámbito de la prohibición. Si, por el contrario, el desplazamiento interno estuviera autorizado en todas las circunstancias, la excepción prevista en el segundo párrafo del artículo 49 sería redundante. Esta interpretación se ve confirmada por la finalidad de la prohibición, que es preservar los vínculos familiares y sociales de las personas protegidas. Dichos vínculos corren peligro con independencia del destino del traslado.

145. En opinión de la Corte, de la finalidad de la prohibición también se desprende que la disposición protege a una población ocupada contra cualquier traslado de carácter involuntario. Los trabajos preparatorios del Cuarto Convenio de Ginebra confirman que la expresión “de índole forzosa” tenía por objeto excluir del ámbito de aplicación de la prohibición los traslados que pudieran efectuarse con el consentimiento de las personas protegidas (véase *Acta Final de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1949*, vol. II, sección A, informe de la Comisión III a la Asamblea Plenaria de la Conferencia Diplomática de Ginebra, pág. 827). En consecuencia, el traslado puede ser “de índole forzosa” —y, por tanto, estar prohibido en virtud del primer párrafo del artículo 49— no solo cuando se logra mediante el uso de la fuerza física, sino también cuando las personas afectadas no tienen otra opción que marcharse (véase Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, *Fiscalía c. Milomir Stakić*, causa núm. IT-97-24-A, Sala de Apelaciones, fallo de 22 de marzo de 2006, párr. 279). Por lo tanto, la ausencia de fuerza física no excluye la posibilidad de que el traslado en cuestión sea forzoso.

146. Por otra parte, como la Corte ha observado anteriormente, la evacuación de una zona se permite excepcionalmente si, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 49, “así lo requieren la seguridad de la población o imperiosas razones militares”. No obstante, incluso en tales casos, dicho párrafo dispone que las personas evacuadas “será[n] devuelta[s] a sus hogares tan pronto como hayan cesado las hostilidades en ese sector”. Esto indica que las evacuaciones se conciben como una medida temporal, que debe revocarse en cuanto desaparezcan las razones militares imperiosas. Por el contrario, las evacuaciones de carácter permanente o

indefinido infringen la prohibición de los traslados forzosos. Así pues, no están cubiertas por la excepción establecida en el segundo párrafo del artículo 49.

147. La Corte considera que, debido a las políticas y prácticas de Israel, que se analizan en mayor detalle más adelante (véanse los párrafos 180 a 229), incluidos los desalojos forzosos, las demoliciones de viviendas a gran escala y las restricciones en materia de residencia y circulación, los miembros de la población palestina que viven en la zona C a menudo no tienen otra opción que abandonar su zona de residencia. La naturaleza de los actos de Israel, incluido el hecho de que, tras la demolición de bienes palestinos, Israel confisca con frecuencia las tierras para reasignarlas a asentamientos israelíes, indica que sus medidas no son de carácter temporal y, por tanto, no pueden considerarse evacuaciones autorizadas. En opinión de la Corte, las políticas y prácticas de Israel son contrarias a la prohibición de traslado forzoso de la población protegida en virtud del primer párrafo del artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra.

7. Violencia contra los palestinos

148. La Corte observa que la política de asentamientos de Israel ha dado lugar a actos de violencia contra los palestinos cometidos por los colonos y las fuerzas de seguridad.

149. A este respecto, la Corte recuerda que el derecho a la vida de las personas protegidas en el territorio ocupado está garantizado en virtud de la norma enunciada en el artículo 46 del Reglamento de La Haya. Esta norma se complementa con el primer párrafo del artículo 27 del Cuarto Convenio de Ginebra, que establece que las personas protegidas serán tratadas con humanidad y protegidas contra cualquier acto de violencia o de intimidación. Además, los derechos a la vida y a la protección contra la violencia están garantizados por el artículo 6, párrafo 1, y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

150. Según diversos informes de las Naciones Unidas, los colonos someten a menudo a los palestinos del Territorio Palestino Ocupado a una violencia generalizada, que las autoridades israelíes no impiden ni castigan (véanse, por ejemplo, “Los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado: informe del Secretario General”, doc. [A/78/554](#) de las Naciones Unidas (25 de octubre de 2023), párrs. 45 a 74; “Asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado: informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, doc. [A/HRC/55/72](#) de las Naciones Unidas (1 de febrero de 2024), párrs. 16 a 33).

151. El Secretario General de las Naciones Unidas ha documentado periódicamente un aumento de la frecuencia y gravedad de los ataques de los colonos contra los palestinos (por ejemplo, “Los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado: informe del Secretario General”, doc. [A/76/336](#) de las Naciones Unidas (23 de septiembre de 2021), párr. 17). También se ha informado de la falta de respuesta de Israel a esos actos de violencia. La Comisión Internacional Independiente de Investigación indica que, aunque Israel parece reconocer su deber de prevenir y castigar estos ataques, a menudo no interviene cuando los colonos actúan con violencia contra los palestinos (“informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel”, doc. [A/77/328](#) de las Naciones Unidas (14 de septiembre de 2022), párr. 64). Otros informes de las Naciones Unidas documentan incidentes en que colonos armados llevan a cabo ataques en comunidades palestinas, a veces cerca de donde se encuentran las fuerzas de seguridad israelíes, que no intervienen o, incluso, apoyan a los colonos en sus ataques (por ejemplo, “Asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado: informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, doc. [A/HRC/49/85](#) de las Naciones Unidas (28 de abril de 2022), párr. 13). Además, según se informa, un israelí que agrede a un palestino en la Ribera Occidental tiene muchas menos probabilidades de ir a juicio que si la víctima no es palestina (“Los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado: informe del Secretario General”, doc. [A/77/493](#) de las Naciones Unidas (3 de octubre de 2022), párr. 41). Según el Comité de Derechos Humanos, la falta de acceso de las víctimas a la justicia y a recursos efectivos fomenta un “clima general de impunidad” en el caso de la violencia de los colonos contra los palestinos (véase Comité de Derechos Humanos, “Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Israel”, doc. [CCPR/C/ISR/CO/5](#) de las Naciones Unidas (5 de mayo de 2022), párr. 24).

152. Las pruebas de que dispone la Corte indican que las fuerzas de seguridad israelíes intervienen con una fuerza innecesaria o desproporcionada contra los palestinos que protestan tras los ataques de colonos o se

manifiestan contra la expansión de los asentamientos. La Comisión Internacional Independiente de Investigación ha informado de varios incidentes en los que las fuerzas de seguridad israelíes han utilizado munición real para reprimir manifestaciones de palestinos, con el resultado de centenares de muertos y heridos (“informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel”, doc. [A/78/198](#) de las Naciones Unidas (5 de septiembre de 2023), párrs. 12 a 21; “informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel”, doc. [A/77/328](#) de las Naciones Unidas (14 de septiembre de 2022), párr. 68). Según un informe de 2023 del Secretario General de las Naciones Unidas, se han detectado patrones de conducta

“de las fuerzas de seguridad israelíes que ... consisten en emplear tácticas militares en las operaciones de aplicación de la ley en la Ribera Occidental ... Las fuerzas de seguridad israelíes parecen no adoptar medidas para distender las situaciones de enfrentamiento ni asegurarse de que solo se use fuerza potencialmente letal como último recurso cuando resulte estrictamente necesario para proteger la vida o evitar lesiones de gravedad derivadas de una amenaza inminente.” (“Prácticas israelíes que afectan a los derechos humanos del pueblo palestino en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental: informe del Secretario General”, doc. [A/78/502](#) de las Naciones Unidas (2 de octubre de 2023), párr. 14).

Según el mismo informe, en 2022 murieron más palestinos en la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental que en ningún otro año desde 2005 (*ibid.*, párr. 13).

153. Por otra parte, se informa de que las mujeres y niñas palestinas son objeto de violencia de género en forma de uso excesivo de la fuerza y abusos, incluidos abusos físicos, psicológicos y verbales y actos de acoso sexual, cometidos por las fuerzas de seguridad israelíes y los colonos (“informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel”, doc. [A/77/328](#) de las Naciones Unidas (14 de septiembre de 2022), párr. 59).

154. La Corte considera que la violencia de los colonos contra los palestinos, el hecho de que Israel no la impida o castigue eficazmente y el uso excesivo de la fuerza que hace contra los palestinos contribuyen a crear y mantener un entorno coercitivo contra estos últimos. En el presente asunto, sobre la base de las pruebas de que dispone, la Corte considera que el hecho de que Israel no impida o castigue sistemáticamente los ataques de los colonos contra la vida o la integridad física de los palestinos, así como el uso excesivo de la fuerza que hace contra estos últimos, es incompatible con las obligaciones señaladas en el párrafo 149 *supra*.

8. Conclusión sobre la política de asentamientos de Israel

155. Habida cuenta de lo que antecede, la Corte reafirma que los asentamientos israelíes en la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental, y el régimen asociado a ellos, se han establecido y se mantienen en violación del derecho internacional (véase *Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el Territorio Palestino Ocupado*, opinión consultiva, *I.C.J. Reports 2004 (I)*, pág. 184, párr. 120).

156. La Corte observa con gran preocupación los datos que indican que la política de asentamientos de Israel se ha ido ampliando desde que emitió su opinión consultiva sobre el *Muro*. En concreto, en diciembre de 2022, el Parlamento israelí aprobó la creación de un puesto de ministro adicional dentro del Ministerio de Defensa con atribuciones de gobierno en la Ribera Occidental, en particular en lo que respecta a la designación de tierras, la planificación y la coordinación de las demoliciones, lo que permitiría agilizar el proceso de aprobación de nuevos asentamientos. Asimismo, el tamaño de los asentamientos israelíes existentes aumentó entre el 1 de noviembre de 2022 y el 31 de octubre de 2023 a un ritmo significativo, tras la aprobación o el inicio de la construcción de aproximadamente 24.300 viviendas en los asentamientos israelíes existentes en la Ribera Occidental, incluidas unas 9.670 en Jerusalén Oriental (“Asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado: informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, doc. [A/HRC/55/72](#) de las Naciones Unidas (1 de febrero de 2024), párrs. 7 y 10).

C. Cuestión de la anexión del Territorio Palestino Ocupado

157. La Corte observa que la pregunta planteada por la Asamblea General se refiere en parte a las consecuencias jurídicas que se derivan de la presunta anexión por Israel del Territorio Palestino Ocupado. Para responder a este aspecto de la pregunta, la Corte debe analizar en primer lugar el concepto de “anexión”. En segundo lugar, examinará las políticas y prácticas de Israel con miras a determinar si equivalen a una anexión. Por último, la Corte analizará la legalidad de las políticas y prácticas de Israel (véase el párrafo 74 *supra*).

1. Concepto de anexión

158. Por el término “anexión”, la Corte entiende, en el presente contexto, la adquisición forzosa por la Potencia ocupante del territorio que ocupa, es decir, su integración en el territorio de esa Potencia. La anexión, por tanto, presupone la intención de la Potencia ocupante de ejercer un control permanente sobre el territorio ocupado.

159. A este respecto, la Corte recuerda que, en virtud del derecho de la ocupación, el control del territorio ocupado por la Potencia ocupante debe tener carácter temporal. Así, el derecho se basa en el principio de que la Potencia ocupante debe preservar el *statu quo ante* en el territorio ocupado. Prueba de ello son, entre otras cosas, los poderes limitados que el derecho de la ocupación confiere a la Potencia ocupante, algunos de los cuales se han examinado anteriormente (véanse los párrafos 104 a 110 y 134). Con independencia de las circunstancias que hayan dado lugar a la ocupación, el mero hecho de la ocupación no puede conferir un título de soberanía a la Potencia ocupante. Por consiguiente, una conducta de la Potencia ocupante que muestre la intención de ejercer un control permanente sobre el territorio ocupado puede ser indicativa de un acto de anexión.

160. La imposición por la Potencia ocupante de un control permanente del territorio ocupado puede manifestarse de diversas formas. A este respecto, la Corte señala que en ocasiones se establece una distinción entre anexión “*de iure*” y “*de facto*”, como han hecho algunos de los participantes en el presente procedimiento. Según esta distinción, la anexión *de iure* consiste en la declaración formal por la que la Potencia ocupante reivindica la soberanía sobre el territorio ocupado, mientras que la anexión *de facto* comprende actos que, sin llegar a ser una declaración formal, crean un “hecho consumado” sobre el terreno y consolidan el control permanente de la Potencia ocupante sobre el territorio ocupado. Ambos tipos de anexión difieren en cuanto a los medios por los que se realiza, aunque comparten el mismo objetivo, a saber, la imposición de un control permanente sobre el territorio ocupado.

161. En este contexto, la Corte debe examinar si, mediante su conducta, Israel establece su control permanente sobre el Territorio Palestino Ocupado de tal modo que equivaldría a una anexión.

2. Actos realizados por Israel que equivalen a una anexión

162. La gran mayoría de los participantes han argumentado que las políticas y prácticas de Israel equivalen a una anexión de al menos parte del Territorio Palestino Ocupado. A este respecto, la mayoría de los participantes se refirieron a la continuación de la construcción del muro en la Ribera Occidental, el establecimiento de asentamientos y puestos de avanzada y la construcción de infraestructuras conexas. Algunos participantes también han sostenido que las declaraciones realizadas por funcionarios israelíes a lo largo de varias décadas revelan que Israel tiene la intención de ejercer permanentemente la soberanía sobre amplias partes del Territorio Palestino Ocupado y que no considera que su ocupación sea temporal.

163. La Corte examina en primer lugar las políticas y prácticas de Israel en relación con Jerusalén Oriental. Como ha señalado anteriormente, Israel aplica su derecho interno en Jerusalén Oriental desde su ocupación en 1967. En 1980, Israel promulgó legislación interna, en forma de Ley Básica, que hacía de Jerusalén Oriental parte de su capital (véase el párrafo 138). Otra Ley Básica, titulada “Israel — El Estado-nación del pueblo judío” y promulgada en 2018, afirma que “[l]a ciudad de Jerusalén entera y unida es la capital de Israel”. Israel ha afirmado que Jerusalén Oriental forma parte de su territorio, como demuestra la notificación enviada por el Gobierno israelí al Secretario General de las Naciones Unidas, según la cual “[n]ingún lugar de Jerusalén es ‘territorio ocupado’, ya que la ciudad es la capital soberana del Estado de Israel” (“informe presentado al Consejo de Seguridad por el Secretario General de conformidad con la resolución 672 (1990)”, doc. S/21919 de las Naciones Unidas (31 de octubre de 1990), párr. 3). La Ley de Bienes de Ausentes de 1950 (véase el párrafo 121 *supra*) ha facilitado la confiscación de “bienes de personas ausentes” y su uso para la expansión de los asentamientos israelíes dentro de

los límites históricos de la ciudad y en sus alrededores. La Comisión Internacional Independiente de Investigación informa de que “[s]e ha expropiado más de un tercio de Jerusalén Oriental para construir asentamientos israelíes, y actualmente solo está zonificado para proyectos palestinos de construcción el 13 % del área anexionada” (“informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel”, doc. [A/77/328](#) de las Naciones Unidas (14 de septiembre de 2022), párr. 14). La Comisión añade que aproximadamente 230.000 personas viven en 14 asentamientos establecidos en Jerusalén Oriental (*ibid.*, párr. 15).

164. Israel ha tomado medidas para integrar las infraestructuras de Jerusalén Oriental con las de Jerusalén Occidental, sobre todo mediante la construcción de una red única de transporte público. Al mismo tiempo, otras medidas sirven para separar Jerusalén Oriental de la Ribera Occidental. La más importante de ellas es la construcción del muro, cuyas consecuencias jurídicas ya ha examinado la Corte (véase *Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el Territorio Palestino Ocupado*, opinión consultiva, *I.C.J. Reports 2004 (I)*, pág. 184, párr. 122). El Secretario General de las Naciones Unidas, la misión internacional independiente de determinación de los hechos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos coinciden en afirmar que el muro y su régimen de asentamientos asociado, tal como se aplican en Jerusalén Oriental, suponen la separación de Jerusalén Oriental de la Ribera Occidental (véanse “Los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado: informe del Secretario General”, doc. [A/78/554](#) de las Naciones Unidas (25 de octubre de 2023), párr. 11; “informe de la misión internacional independiente de investigación de las repercusiones de los asentamientos israelíes en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del pueblo palestino en todo el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental”, doc. [A/HRC/22/63](#) de las Naciones Unidas (7 de febrero de 2013), párr. 34; “Asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado: informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, doc. [A/HRC/52/76](#) de las Naciones Unidas (15 de marzo de 2023), párr. 6).

165. La Corte considera que las medidas de Israel en Jerusalén Oriental crean un entorno inhóspito para la población palestina. Dado que trata a Jerusalén Oriental como su propio territorio, Israel considera extranjeros a los palestinos que residen allí y les exige que estén en posesión de un permiso de residencia válido (véanse los párrafos 192 a 197). El derecho israelí también ha establecido un régimen de permisos de construcción, cuya infracción da lugar a la demolición del bien mediante un procedimiento acelerado, así como a elevadas multas (véanse los párrafos 214 a 217 *infra*). En 2019, el Secretario General de las Naciones Unidas indicó que al menos un tercio de todos los hogares palestinos de Jerusalén Oriental carecían del permiso de construcción que expiden las autoridades israelíes, por lo que más de 100.000 residentes corrían el riesgo de que sus hogares fueran demolidos y de ser trasladados a la fuerza (“Los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado: informe del Secretario General”, doc. [A/74/357](#) de las Naciones Unidas (20 de septiembre de 2019), párr. 31). Además, en 2018, Israel inició un proceso de adjudicación de títulos de propiedad en Jerusalén Oriental, mediante el cual se examinan las reclamaciones relativas a la propiedad de la tierra y se inscriben de forma definitiva en el catastro del Estado. Según el Secretario General de las Naciones Unidas, Israel sigue adelante con el proceso de registro de la propiedad de la tierra en las zonas de expansión de sus asentamientos, lo que reforzaría el control israelí sobre más territorio en Jerusalén Oriental (“Los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado: informe del Secretario General”, doc. [A/78/554](#) de las Naciones Unidas (25 de octubre de 2023), párr. 22). Todas estas medidas ejercen presión sobre los palestinos de Jerusalén Oriental para que abandonen la ciudad.

166. En lo que respecta a la política de asentamientos de Israel en la Ribera Occidental, la Corte observa que, de conformidad con la Ley Básica de 2018 (véase el párrafo 163 *supra*), el Estado de Israel “considera el desarrollo de los asentamientos judíos como un valor nacional, y actuará para fomentar y promover su establecimiento y consolidación”. Como se ha señalado anteriormente, superficies considerables de tierra ya han sido declaradas tierras del Estado y asignadas en beneficio de los asentamientos israelíes (véase el párrafo 120). Las construcciones palestinas están totalmente prohibidas en el 70 % de la zona C y muy restringidas en el 30 % restante; menos del 1 % de la zona C está a disposición de los palestinos para la construcción de viviendas e infraestructuras (“informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel”, doc. [A/77/328](#) de las Naciones Unidas (14 de septiembre de 2022), párrs. 39 y 42). El ritmo de expansión de los asentamientos israelíes ha aumentado constantemente (véase el párrafo 156 *supra*). La tasa de crecimiento de la población de colonos en la Ribera Occidental parece ser significativamente superior a la de la población de Israel y a la de la población palestina de la Ribera Occidental (“informe de la

Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel”, doc. [A/HRC/50/21](#) de las Naciones Unidas (9 de mayo de 2022), párr. 34).

167. La Corte observa que la expansión continua de los asentamientos en la zona C aumenta la presencia civil y militar de Israel en el territorio y empuja a la población palestina hacia otras zonas de la Ribera Occidental. Esto, junto con el régimen de infraestructuras asociado a los asentamientos, favorece la integración de amplias zonas de la Ribera Occidental en el territorio de Israel. En su opinión consultiva sobre el *Muro*, la Corte tomó nota del riesgo de que el muro, que se estaba construyendo en ese momento y que se ha seguido ampliando desde entonces, pudiera prejuzgar la futura frontera entre Israel y Palestina, y de que pudiera ayudar a Israel a integrar los asentamientos en su propio territorio (*I.C.J. Reports 2004 (I)*, pág. 184, párr. 121). En opinión de la Corte, lo mismo ocurre con la política de Israel consistente en integrar sus infraestructuras con las de la Ribera Occidental, incluida la red de carreteras, lo que hace que los asentamientos de la Ribera Occidental se entrelacen con Israel en una zona contigua, fragmentando el resto del territorio de la Ribera Occidental (véase el párrafo 200). Estas medidas están diseñadas para aplicarse indefinidamente, como demuestra el hecho de que no son fácilmente reversibles.

168. A este respecto, la Corte toma nota del informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación, que, en 2022, observó que

“Israel considera la ocupación un elemento permanente y ... se ha anexionado —a todos los efectos— partes de la Ribera Occidental, al tiempo que trata de encubrir sus acciones con una ficción de temporalidad. Las acciones de Israel que constituyen una anexión *de facto* incluyen la expropiación de tierras y recursos naturales, la construcción de asentamientos y puestos de avanzada, el mantenimiento de un régimen de planificación y construcción restrictivo y discriminatorio para los palestinos y la extensión extraterritorial del derecho israelí a los colonos israelíes de la Ribera Occidental.” (“informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel”, doc. [A/77/328](#) de las Naciones Unidas (14 de septiembre de 2022), párr. 76.)

169. El desplazamiento de la población local del territorio ocupado, que favorece la política de asentamientos de Israel, también facilita la integración del territorio. Como la Corte ha expuesto anteriormente (véanse los párrafos 142 a 147), las políticas y prácticas de Israel provocan la partida de la población palestina de partes del Territorio Palestino Ocupado, especialmente de Jerusalén Oriental y la zona C de la Ribera Occidental. Esto, a su vez, permite una mayor expansión de la política de asentamientos de Israel y facilita la integración del territorio palestino en Israel. La Corte recuerda asimismo que la práctica israelí consistente en explotar los recursos naturales de la Ribera Occidental es incompatible con el derecho del pueblo palestino a la soberanía permanente sobre esos recursos (véase el párrafo 133 *supra*).

170. La extensión por Israel de su derecho interno a la Ribera Occidental, especialmente a los asentamientos y en relación con los colonos (véanse los párrafos 134 a 141 *supra*), así como su asunción de poderes de reglamentación más amplios en virtud del carácter prolongado de la ocupación, afianza su control sobre el territorio ocupado. Israel también ha tomado medidas para incorporar la Ribera Occidental a su propio territorio. A este respecto, la Corte toma nota de la transferencia por Israel de atribuciones, incluidas la designación de tierras, la planificación y la coordinación de las demoliciones, a una administración civil dentro del Ministerio de Defensa en 2023 (véase también el párrafo 156 *supra*). Esto se ajusta a los principios rectores adoptados por el Gobierno israelí en 2022, en los que se anunciaba la elaboración y promoción de una política para la “aplicación de la soberanía” en la Ribera Occidental (“A coalition agreement to establish a national government” (28 de diciembre de 2022), párr. 118).

171. El Secretario General de las Naciones Unidas, en el informe sobre los asentamientos israelíes que presentó a la Asamblea General en 2023, indicó que

“los sucesivos Gobiernos israelíes han impulsado y aplicado de forma sistemática políticas de expansión de los asentamientos y de apropiación de tierras palestinas.

Las políticas del Gobierno actual a este respecto están alineadas, hasta un punto sin precedentes, con los objetivos del movimiento de los colonos israelíes consistentes en ampliar el control a largo plazo sobre la Ribera Occidental ocupada, incluida Jerusalén Oriental, y, en la práctica, en integrar

aún más esas zonas en el territorio del Estado de Israel.” (“Los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado: informe del Secretario General de las Naciones Unidas”, doc. [A/78/554](#) de las Naciones Unidas (25 de octubre de 2023), párrs. 4 y 5).

172. En su opinión consultiva sobre el *Muro*, la Corte abordó la cuestión de si la construcción del muro en el Territorio Palestino Ocupado equivalía a un acto de anexión en los siguientes términos:

“Aunque toma nota de las seguridades dadas por Israel de que la construcción del muro no equivale a una anexión y de que se trata de una medida temporal ..., la Corte no puede con todo permanecer indiferente a los temores que se le han expresado de que el trazado del muro prejuzgará sobre la futura frontera entre Israel y Palestina, y al temor de que Israel pueda decidir integrar los asentamientos y sus medios de acceso. La Corte considera que la construcción del muro y su régimen conexo crean un ‘hecho consumado’ [sobre el terreno] que podría muy bien llegar a ser permanente, en cuyo caso, y pese a la caracterización formal del muro por Israel, ello equivaldría a una anexión *de facto*.” (*I.C.J. Reports 2004 (I)*, pág. 184, párr. 121).

De hecho, las políticas, prácticas u otras medidas que consisten en poner el territorio ocupado bajo el control permanente de la Potencia ocupante constituyen actos de anexión.

173. Habida cuenta de lo que antecede, la Corte considera que las políticas y prácticas de Israel, en particular el mantenimiento y la expansión de los asentamientos, la construcción de infraestructuras asociadas, incluido el muro, la explotación de los recursos naturales, la proclamación de Jerusalén como capital de Israel, la aplicación integral del derecho interno israelí en Jerusalén Oriental y su amplia aplicación en la Ribera Occidental, afianzan el control de Israel sobre el Territorio Palestino Ocupado, en particular sobre Jerusalén Oriental y la zona C de la Ribera Occidental. Estas políticas y prácticas están concebidas para mantenerse indefinidamente y crear efectos irreversibles sobre el terreno. Por consiguiente, la Corte considera que tales políticas y prácticas equivalen a una anexión de amplias partes del Territorio Palestino Ocupado.

3. Prohibición de adquisición de territorio por la fuerza

174. Muchos participantes han argumentado que una ocupación de guerra no puede en modo alguno servir de base para la adquisición de territorio; tal ocupación no confiere a la Potencia ocupante ningún título sobre el territorio ocupado ni hace desaparecer el título legítimo.

175. La anexión por una Potencia ocupante de un territorio ocupado es ilegal. Con arreglo al Artículo 2, párrafo 4, de la Carta de las Naciones Unidas,

“[l]os Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”.

En la resolución [2625 \(XXV\)](#) de 24 de octubre de 1970, titulada “Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”, se destaca, en relación con este principio, que “[n]o se reconocerá como legal ninguna adquisición territorial derivada de la amenaza o el uso de la fuerza” (resolución [2625 \(XXV\)](#) de la Asamblea General, anexo, primer principio). Como ha afirmado la Corte, la prohibición de la adquisición territorial resultante de la amenaza o el uso de la fuerza, como corolario de la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, es un principio de derecho internacional consuetudinario (*Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el Territorio Palestino Ocupado*, opinión consultiva, *I.C.J. Reports 2004 (I)*, pág. 171, párr. 87).

176. A este respecto, la Corte observa que el Consejo de Seguridad insistió en la prohibición de adquisición de territorio por la fuerza en su resolución [242 \(1967\)](#), de 22 de noviembre de 1967 (véase el párrafo 58 *supra*). El Consejo de Seguridad reafirmó este principio en su resolución [252 \(1968\)](#), de 21 de mayo de 1968, en la que también declaró que “todas las medidas de carácter legislativo y administrativo tomadas por Israel y los actos que ha ejecutado, incluso la expropiación de tierras y bienes, que tienden a modificar el estatuto jurídico de Jerusalén

son nulos y no pueden modificar ese estatuto”. Desde entonces, el Consejo de Seguridad ha reiterado este principio en varias resoluciones relativas a la pretendida anexión de territorios árabes y palestinos por Israel (por ejemplo, las resoluciones del Consejo de Seguridad 267 (1969), de 1 de abril de 1969, 298 (1971), de 25 de septiembre de 1971, y 478 (1980), de 20 de agosto de 1980). Más recientemente, el Consejo de Seguridad, en su resolución 2334 (2016), de 23 de diciembre de 2016, afirmó que

“el establecimiento de asentamientos por parte de Israel en el territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, no tiene validez legal y constituye una flagrante violación del derecho internacional y un obstáculo importante para el logro de la solución biestatal y de una paz general, justa y duradera” (párr. 1).

En la misma resolución, el Consejo de Seguridad subrayó que “no reconocerá ningún cambio a las líneas del 4 de junio de 1967, incluso en lo que respecta a Jerusalén, que no sean los acordados por las partes mediante negociaciones”.

177. El principio de prohibición de la adquisición de territorio por la fuerza fue igualmente reafirmado por la Asamblea General en varias resoluciones aprobadas en relación con la situación en el Territorio Palestino Ocupado. Así, en su resolución 77/126 de 12 de diciembre de 2022, destaca que “la ocupación de un territorio debe ser una situación temporal *de facto*, en la que la Potencia ocupante no puede adjudicarse la posesión ni ejercer su soberanía sobre el territorio que ocupa”. También recuerda a este respecto

“el principio de inadmisibilidad de la adquisición de territorio por la fuerza y, por consiguiente, la ilegalidad de la anexión de cualquier parte del Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, que es contraria al derecho internacional, socava la viabilidad de la solución biestatal y pone en peligro la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz justo, duradero y general” (párr. 7).

178. La Corte observa el argumento esgrimido por dos participantes en el presente procedimiento según el cual la formulación misma de la pregunta ignora los “profundos lazos históricos y las propias reivindicaciones válidas” de Israel sobre el territorio que ocupa actualmente. La Corte observa, en primer lugar, que no se le ha pedido que se pronuncie sobre reivindicaciones históricas relativas al Territorio Palestino Ocupado; y, en segundo lugar, que no se le ha facilitado ninguna información que fundamente tales reivindicaciones. En cualquier caso, la prohibición de la adquisición de territorio por la fuerza implica que el uso de la fuerza no puede ser un medio para resolver reclamaciones de soberanía.

179. La Corte ha concluido que las políticas y prácticas de Israel equivalen a una anexión de amplias partes del Territorio Palestino Ocupado. En opinión de la Corte, pretender adquirir la soberanía sobre un territorio ocupado, como demuestran las políticas y prácticas adoptadas por Israel en Jerusalén Oriental y la Ribera Occidental, es contrario a la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y a su corolario, el principio de no adquisición de territorio por la fuerza. La forma en que la anexión afecta al estatuto jurídico de la ocupación y, por tanto, a la legalidad de la presencia continuada de Israel, se analiza más adelante (véanse los párrafos 252 a 254).

D. Cuestión de la legislación y las medidas discriminatorias

1. Alcance de la pregunta a)

180. Otro aspecto de la pregunta a) formulada por la Asamblea General se refiere a las consecuencias jurídicas derivadas de la “aprobación por Israel de legislación y medidas discriminatorias conexas”. Como se ha señalado anteriormente (véase el párrafo 74), la Corte debe determinar por sí misma si la legislación y las medidas a las que se hace referencia en la solicitud de la Asamblea General son discriminatorias. Los términos en los que se ha planteado este aspecto de la cuestión, interpretados en su contexto, no sugieren que la Asamblea General solicite la opinión de la Corte sobre todas las violaciones de los derechos humanos que presuntamente tienen lugar en el Territorio Palestino Ocupado. Más bien, la solicitud de la Asamblea General tiene un alcance limitado en cuatro sentidos.

181. En primer lugar, la cuestión se refiere a la legislación y las medidas de Israel solo en la medida en que estén relacionadas con las políticas y prácticas examinadas anteriormente. Por lo tanto, según los términos de la pregunta *a)*, la Corte limitará su análisis a la legislación y las medidas que estén estrechamente vinculadas a las políticas y prácticas mencionadas.

182. En segundo lugar, la pregunta abarca la legislación y las medidas de Israel solo en la medida en que se apliquen en el Territorio Palestino Ocupado. Por tanto, la Corte no está llamada a pronunciarse sobre si la legislación o las medidas de Israel fuera del Territorio Palestino Ocupado, incluso en el propio territorio israelí, son discriminatorias.

183. En tercer lugar, la pregunta se limita al carácter potencialmente discriminatorio de la legislación y las medidas de Israel. Así pues, la tarea de la Corte consiste en examinar si la legislación aprobada o las medidas adoptadas por Israel en relación con las políticas y prácticas indicadas anteriormente dan lugar a una discriminación. La Corte analizará a continuación su interpretación del concepto de discriminación a efectos de la presente opinión consultiva (véanse los párrafos 185 a 191).

184. En cuarto lugar, como se ha señalado anteriormente, la pregunta no requiere que la Corte examine cada uno de los actos legislativos y medidas adoptados por Israel, ni que determine si su aplicación en casos particulares desde el comienzo de la ocupación en 1967 ha tenido carácter discriminatorio (véase el párrafo 77). La Corte considera que su tarea, conforme a la pregunta que se le ha planteado, consiste en examinar si Israel ha aprobado o adoptado legislación o medidas discriminatorias de carácter sistémico.

2. Concepto de discriminación

185. La Corte recuerda que la prohibición de la discriminación en el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales forma parte de los propósitos de las Naciones Unidas. De conformidad con el Artículo 1, párrafo 3, de la Carta de las Naciones Unidas, uno de los propósitos de la Organización es “[r]ealizar la cooperación internacional ... en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”. La Declaración Universal de Derechos Humanos también establece que

“[t]oda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.” (artículo 2).

186. Ciertas formas de discriminación están prohibidas por el derecho internacional humanitario. Por ejemplo, el tercer párrafo del artículo 27 del Cuarto Convenio de Ginebra establece lo siguiente:

“Habida cuenta de las disposiciones relativas al estado de salud, a la edad y al sexo, todas las personas protegidas serán tratadas por la Parte en conflicto en cuyo poder estén con las mismas consideraciones, sin distinción alguna desfavorable, especialmente por lo que atañe a la raza, a la religión o a las opiniones políticas.”

187. Varios instrumentos de derechos humanos aplicables en el presente asunto prohíben la discriminación.

El artículo 2, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone lo siguiente:

“Cada uno de los Estados partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

El artículo 26 de este mismo instrumento estipula que

“[t]odas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

El artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos permite a los Estados partes adoptar medidas que suspendan algunas de las obligaciones que les incumben en virtud de dicho instrumento, con sujeción a diversas condiciones. No obstante, en virtud del artículo 4, las medidas en cuestión no deben entrañar discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

Por su parte, el artículo 2, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece lo siguiente:

“Los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

188. El artículo 1, párrafo 1, de la Convención contra la Discriminación Racial ofrece una definición de discriminación basada en motivos específicos:

“En la presente Convención la expresión ‘discriminación racial’ denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.”

189. Las disposiciones anteriores hacen efectivo el principio de prohibición de la discriminación, que en la actualidad forma parte del derecho internacional consuetudinario.

190. Todas estas disposiciones tienen en común el concepto de trato diferenciado entre personas según pertenezcan a un grupo u otro. A este respecto, la Corte observa que la existencia del pueblo palestino es algo que no se cuestiona. Así pues, en su opinión, el trato diferenciado de los palestinos puede dar lugar a una discriminación. La Corte tiene presente que todos los miembros del grupo de los palestinos podrían no experimentar el trato diferenciado de la misma manera, y que algunos de ellos podrían ser objeto de un trato diferenciado por múltiples motivos.

191. La Corte determinará en primer lugar si la legislación aprobada y las medidas adoptadas por Israel establecen diferencias, entre otras cosas, por motivos de raza, religión o pertenencia étnica entre los palestinos y los miembros de otros grupos en relación con su disfrute de los derechos humanos en el sentido de los artículos 2, párrafo 1, y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 2, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 1 de la Convención contra la Discriminación Racial. Sin embargo, no todas las diferencias de trato constituyen una discriminación. Por consiguiente, si la Corte reconoce la existencia de un trato diferenciado, debe, en una segunda etapa, determinar si esa diferencia de trato está, no obstante, justificada, en el sentido de que es razonable y objetiva y responde a una finalidad legítima de interés público.

3. Política de permisos de residencia

192. La Corte examinará en primer lugar los efectos que la política israelí de permisos de residencia en Jerusalén Oriental tiene sobre los palestinos del Territorio Palestino Ocupado.

193. La Corte recuerda que Israel considera Jerusalén Oriental como su propio territorio y le aplica su derecho interno (véase el párrafo 138 *supra*). Según ese derecho interno, los ciudadanos israelíes y los judíos no israelíes pueden residir en Jerusalén Oriental sin restricciones (Ley del Retorno, 5710-1950, arts. 1 a 3; Ley de Entrada en Israel, 5712-1952, art. 1). En cambio, según el derecho interno israelí, todos los demás residentes de Jerusalén Oriental, incluidos los palestinos que no son ciudadanos israelíes, son considerados extranjeros residentes en el territorio de Israel, y su derecho a residir en Jerusalén Oriental está sujeto a la posesión de un permiso de residencia válido. Desde 1995, para conservar su permiso de residencia, los palestinos deben demostrar que su “centro de vida” ha seguido estando en Jerusalén Oriental durante los siete años anteriores. Tras las modificaciones legislativas introducidas a partir de 2008, el Ministro del Interior goza de amplias facultades discrecionales para revocar los permisos de residencia, y se han revocado permisos concedidos a palestinos por una serie de motivos, entre ellos la “infracción del deber de lealtad” a Israel (“Prácticas israelíes que afectan a los derechos humanos del pueblo palestino en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental: informe del Secretario General”, doc. [A/78/502](#) de las Naciones Unidas (2 de octubre de 2023), párr. 59). Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las autoridades israelíes han revocado el permiso de residencia en Jerusalén Oriental a más de 14.500 palestinos desde 1967 (“Asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado: informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, doc. [A/HRC/37/43](#) de las Naciones Unidas (6 de marzo de 2018), párr. 55; véase también “Consecuencias económicas y sociales de la ocupación israelí para las condiciones de vida del pueblo palestino en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y de la población árabe en el Golán sirio ocupado”, doc. [A/77/90-E/2022/66](#) de las Naciones Unidas (8 de junio de 2022), párr. 44).

194. La Corte considera que, al menos en la medida en que se aplica a Jerusalén Oriental, la política de permisos de residencia de Israel da lugar a un trato diferenciado de los palestinos en relación con su derecho a residir en Jerusalén Oriental, garantizado en el artículo 5, apartado d) i), de la Convención contra la Discriminación Racial y el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Corte observa que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité de Derechos Humanos han considerado que la política de permisos de residencia de Israel es incompatible con las obligaciones que incumben a ese país en virtud de la Convención contra la Discriminación Racial y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, respectivamente (Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, “Observaciones finales sobre los informes periódicos 17º a 19º combinados de Israel”, doc. [CERD/C/ISR/CO/17-19](#) de las Naciones Unidas (27 de enero de 2020), párr. 15; Comité de Derechos Humanos, “Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Israel”, doc. [CCPR/C/ISR/CO/5](#) de las Naciones Unidas (5 de mayo de 2022), párr. 18).

195. La Corte observa que, en virtud de la Ley de Ciudadanía y Entrada en Israel aplicable, los habitantes de la Ribera Occidental que no son colonos tienen en principio prohibido obtener un permiso de residencia en Jerusalén Oriental, salvo por motivos muy limitados, y siempre a discreción del Ministro del Interior. Esta política tiene un efecto perjudicial para la reunificación de las familias en las que un miembro es residente permanente de Jerusalén Oriental y el otro reside en la Ribera Occidental sin ser colono. Estas familias tienen que elegir entre vivir separadamente, vivir juntos fuera de Jerusalén Oriental, en cuyo caso uno de los cónyuges corre el riesgo de perder la ciudadanía israelí o el estatuto de residente permanente, o vivir juntos en Jerusalén Oriental, en cuyo caso el otro cónyuge debe solicitar un permiso anual (véase Comité de Derechos Humanos, “Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Israel”, doc. [CCPR/C/ISR/CO/5](#) de las Naciones Unidas (5 de mayo de 2022), párr. 44; Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, “Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de Israel”, doc. [CEDAW/C/ISR/CO/6](#) de las Naciones Unidas (17 de noviembre de 2017), párr. 40 b)). Las restricciones impuestas por la elección entre estas opciones no se aplican a los colonos. La Corte observa además que uno de los efectos perjudiciales de la política de Israel lo experimentan especialmente las mujeres palestinas, ya que su condición de residentes suele depender de sus cónyuges varones (Comité de Derechos Humanos, “Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Israel”, doc. [CCPR/C/ISR/CO/5](#) de las Naciones Unidas (5 de mayo de 2022), párr. 44; “Aplicación de las resoluciones S-9/1 y S/12-1 del Consejo de Derechos Humanos: informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, doc. [A/HRC/46/63](#) de las Naciones Unidas (11 de febrero de 2021), párr. 45). Por consiguiente, la Corte considera que la política de permisos de residencia de Israel da lugar a un trato diferenciado de los palestinos en relación con su derecho a la vida familiar, garantizado en el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

196. En opinión de la Corte, el trato diferenciado impuesto por la política de permisos de residencia de Israel en Jerusalén Oriental no está justificado, ya que no responde a una finalidad legítima de interés público. En

particular, el sistema de permisos se aplica como consecuencia de la anexión de Jerusalén Oriental por Israel y a los efectos de dicha anexión, que la Corte ya ha considerado ilegal (véase el párrafo 179 *supra*). Por tanto, la Corte estima que no puede justificarse un trato diferenciado por la voluntad de mantener la política de asentamientos de Israel o su política de anexión.

197. Habida cuenta de lo que antecede, la Corte considera que la política de permisos de residencia de Israel equivale a una discriminación prohibida en virtud de los artículos 2, párrafo 2, 23 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los artículos 2, párrafo 2, y 10, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

4. Restricciones a la circulación

198. La Corte examina a continuación las restricciones impuestas por Israel a la circulación de los palestinos en el Territorio Palestino Ocupado.

199. Como la Corte ha señalado anteriormente, la práctica totalidad de las tierras la zona C han sido asignadas a asentamientos o designadas zonas militares de acceso restringido y reservas naturales (véase el párrafo 120). Mientras que estas zonas están abiertas a todos los colonos y los titulares de un permiso de entrada en Israel, incluidos los judíos no israelíes, los palestinos del Territorio Palestino Ocupado necesitan un permiso especial para acceder a ellas.

200. Israel también ha creado infraestructuras en la zona C, incluida una extensa red de carreteras que conecta los asentamientos israelíes entre sí y con el territorio de Israel (véase el párrafo 117). Aunque esas carreteras se extienden por toda la zona C y a menudo pasan cerca de aldeas palestinas, a los palestinos les resulta difícil acceder a la mayoría de ellas o bien tienen el acceso restringido o totalmente prohibido. Según la UNCTAD, los desplazamientos de los palestinos están sujetos a restricciones en 29 carreteras y tramos de carreteras que suman aproximadamente 58 km en toda la Ribera Occidental, incluidas numerosas arterias principales (“Consecuencias económicas y sociales de la ocupación israelí para las condiciones de vida del pueblo palestino en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y de la población árabe en el Golán sirio ocupado”, doc. [A/78/127-E/2023/95](#) de las Naciones Unidas (30 de junio de 2023), párr. 58). La misión internacional independiente de determinación de los hechos observó que

“[l]as restricciones en sí mismas revisten múltiples formas, entre otras la restricción del uso de carreteras únicamente a colonos, el establecimiento de un régimen de puestos de control y puestos fronterizos (obstáculos de cierre), los impedimentos creados por el muro y su régimen de puertas y permisos, y las restricciones administrativas” (“informe de la misión internacional independiente de investigación de las repercusiones de los asentamientos israelíes en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del pueblo palestino en todo el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental”, doc. [A/HRC/22/63](#) de las Naciones Unidas (7 de febrero de 2013), párr. 72).

Según informó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), a principios de 2023 había 565 obstáculos a la circulación en la Ribera Occidental, incluidos 49 puestos de control con personal permanente y más de 300 controles de carretera (OCHA, “Fact sheet: Movement and access in the West Bank” (agosto de 2023)). En los casos en que se les permite acceder a la red restringida de carreteras, los palestinos deben obtener un permiso de viaje individual, que no se exige a los colonos. Según las pruebas de que dispone la Corte, no todos los procedimientos para la obtención de permisos que están a disposición del público se han traducido al árabe, idioma de la mayoría de los solicitantes (“Situación de los derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental: informe del Secretario General”, doc. [A/HRC/31/44](#) de las Naciones Unidas (20 de enero de 2016), párr. 15).

201. Una restricción significativa a la circulación de los palestinos es la que representa el muro que se construye en la Ribera Occidental desde 2002 (véase *Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el Territorio Palestino Ocupado*, opinión consultiva, *I.C.J. Reports 2004 (I)*, pág. 168, párr. 80). La circulación de los palestinos que viven en las zonas situadas entre las partes del muro terminadas y la Línea Verde depende de la obtención de permisos o de autorizaciones especiales concedidas por Israel (“Prácticas israelíes que afectan a los

derechos humanos del pueblo palestino en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental: informe del Secretario General”, doc. [A/68/502](#) de las Naciones Unidas (4 de octubre de 2013), párrs. 22 y 23).

202. Consciente del alcance de su análisis (véase el párrafo 81 *supra*), la Corte observa que se han aplicado restricciones estrictas a la circulación entre la Franja de Gaza (véase el párrafo 87 *supra*), la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental (“Consecuencias económicas y sociales de la ocupación israelí para las condiciones de vida del pueblo palestino en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y de la población árabe en el Golán sirio ocupado”, doc. [A/78/127-E/2023/95](#) de las Naciones Unidas (30 de junio de 2023), párr. 55).

203. Por otra parte, las restricciones israelíes a la circulación impiden el acceso de los palestinos de la Ribera Occidental y la Franja de Gaza a los lugares de culto de Jerusalén Oriental. Las pruebas de que dispone la Corte indican que restricciones como los puestos de control y el cierre de zonas durante los días sagrados han impedido a los palestinos asistir a ceremonias religiosas (“informe de la misión internacional independiente de investigación de las repercusiones de los asentamientos israelíes en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del pueblo palestino en todo el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental”, documento [A/HRC/22/63](#) de las Naciones Unidas (7 de febrero de 2013), párr. 60). Además, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha destacado que los impedimentos para acceder a los lugares religiosos, especialmente en Jerusalén Oriental, menoscaban el disfrute de la libertad de religión en igualdad de condiciones (“Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de Israel”, doc. [E/C.12/ISR/CO/4](#) de las Naciones Unidas (12 de noviembre de 2019), párr. 70).

204. Informes de las Naciones Unidas indican que las fuerzas de seguridad de Israel participan en la destrucción de las carreteras y otras infraestructuras que utilizan los palestinos en la Ribera Occidental (por ejemplo, “Situación de los derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y obligación de garantizar la rendición de cuentas y la justicia: informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, doc. [A/HRC/55/28](#) de las Naciones Unidas (4 de marzo de 2024), párr. 55). Estas actividades agravan aún más la diferencia de trato de que son objeto los palestinos en cuanto a su libertad de circulación. El Comité de Derechos Humanos también ha expresado su preocupación por el trato diferenciado que reciben los palestinos en relación con su libertad de circulación como consecuencia de las restricciones impuestas por Israel (Comité de Derechos Humanos, “Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Israel”, doc. [CCPR/C/ISR/CO/5](#) de las Naciones Unidas (5 de mayo de 2022), párr. 36).

205. Sobre la base de las pruebas de que dispone, la Corte considera que, mediante su práctica de aplicar restricciones a la circulación, Israel introduce una diferencia en el trato que dispensa a los palestinos en relación con su libertad de circulación. Con respecto a la cuestión de la posible justificación de esta diferencia de trato, la Corte ha tomado nota de las preocupaciones de Israel en materia de seguridad, señaladas por algunos participantes en el procedimiento, que podrían justificar la imposición de restricciones a la circulación. En la medida en que tales preocupaciones se refieren a la seguridad de los colonos y los asentamientos, la Corte considera que la protección de los colonos y los asentamientos, cuya presencia en el Territorio Palestino Ocupado es contraria al derecho internacional, no puede invocarse como motivo para justificar medidas que traten de forma diferente a los palestinos. Además, la Corte considera que las medidas de Israel que imponen restricciones a todos los palestinos por el único motivo de su identidad palestina son desproporcionadas en relación con cualquier finalidad legítima de interés público y no pueden justificarse por razones de seguridad.

206. En su opinión consultiva sobre el *Muro*, la Corte observó que

“la construcción del muro y su régimen conexo obstaculizan la libertad de circulación de los habitantes del Territorio Palestino Ocupado (con la excepción de los ciudadanos israelíes y las personas asimiladas), garantizada en el párrafo 1 del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También obstaculizan el ejercicio, por parte de las personas afectadas, del derecho al trabajo, la salud, la educación y un nivel de vida adecuado, proclamados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.” (*I.C.J. Reports 2004 (I)*, págs. 191 y 192, párr. 134.)

En opinión de la Corte, todo el régimen de restricciones a la circulación de los palestinos en el Territorio Palestino Ocupado tiene un efecto discriminatorio en el disfrute de estos derechos, así como del derecho a ser protegido de injerencias arbitrarias o ilegales en la vida familiar, garantizado en el artículo 17 del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos. Habida cuenta de lo que antecede, la Corte considera que las políticas de Israel que restringen la libertad de circulación equivalen a una discriminación prohibida en virtud de los artículos 2, párrafo 1, y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 2, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 2 de la Convención contra la Discriminación Racial.

5. Demolición de bienes

207. La Corte examina a continuación la práctica israelí de demolición de bienes palestinos en la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, que lleva desde 2009 recopilando datos sobre la práctica de demolición de bienes en la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental, cerca de 11.000 estructuras palestinas han sido demolidas desde entonces. Los bienes demolidos incluyen más de 4.500 estructuras residenciales y de subsistencia, más de 3.000 estructuras agrícolas y cerca de 1.000 estructuras para la prestación de servicios de agua, saneamiento e higiene (OCHA, “Data on demolition and displacement in the West Bank”). La práctica israelí de demolición de viviendas adopta dos formas principales: la demolición de bienes como sanción punitiva por una infracción penal y la demolición de bienes por falta de permiso de construcción. La Corte examinará seguidamente cada una de estas dos prácticas.

a) *Demoliciones punitivas*

208. En virtud del derecho aplicable, el comandante militar de las Fuerzas de Defensa de Israel tiene potestad para ordenar la demolición de bienes que estén vinculados a personas que hayan cometido una serie de delitos considerados de naturaleza terrorista: esos bienes son principalmente las viviendas en las que viven o han vivido las personas en cuestión, o donde viven sus familias. Según la información disponible, Israel ha demolido más de 2.000 bienes palestinos desde el comienzo de la ocupación como castigo por infracciones penales (doc. [A/HRC/44/60](#) de las Naciones Unidas (22 de diciembre de 2020), párr. 38).

209. La Corte observa que, según los tribunales israelíes, el fundamento jurídico de la demolición punitiva se encuentra en el párrafo 1 del Reglamento 119 de Defensa de Palestina (Estado de Emergencia), que fue promulgado bajo el mandato británico (The Defence (Emergency) Regulations, 1945, *The Palestine Gazette*, No. 1442 — Supplement No. 2, pág. 1089 (27 de septiembre de 1945); véase también Tribunal Supremo de Israel (actuando como Tribunal Superior de Justicia), *Sakhwil et al. v. Commander of the Judea and Samaria region*, HCJ 434/79, *Israel Yearbook on Human Rights*, vol. 10, 1980, pág. 346). Aunque cabe cuestionar que dicho reglamento haya mantenido su validez después de 1948, la Corte no está llamada a pronunciarse sobre este aspecto. La Corte solo debe examinar si su aplicación por Israel, en su calidad de Potencia ocupante, da lugar a una discriminación contra los palestinos.

210. A este respecto, la Corte observa que, si bien se han demolido varios miles de viviendas palestinas (véase el párrafo 208 *supra*), la medida de demolición punitiva parece no haberse utilizado nunca contra bienes relacionados con civiles israelíes que hayan cometido delitos similares (“Prácticas israelíes que afectan a los derechos humanos del pueblo palestino en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental: informe del Secretario General”, doc. [A/78/502](#) de las Naciones Unidas (2 de octubre de 2023), párr. 27). En este sentido, la aplicación por Israel de la medida de demolición punitiva equivale a un trato diferenciado de los palestinos del Territorio Palestino Ocupado en lo que se refiere al disfrute de su derecho a ser protegidos de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia y su domicilio, garantizado en el artículo 17, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

211. La Corte debe determinar si ese trato diferenciado está, no obstante, justificado. A este respecto, recuerda que, en virtud del artículo 53 del Cuarto Convenio de Ginebra, está “prohibido” destruir bienes muebles o inmuebles “excepto en los casos en que tales destrucciones sean absolutamente necesarias a causa de las operaciones bélicas”. El mismo principio se expresa en el artículo 23 g) del Reglamento de La Haya, que prohíbe la destrucción de bienes, a menos que esas destrucciones “sean imperiosamente reclamadas por las necesidades de la guerra”. Es probable que las operaciones militares previstas en estas disposiciones se produzcan en el contexto de hostilidades activas. Sin embargo, en el presente asunto, la Corte no está convencida de que la demolición punitiva de bienes sea absolutamente necesaria a causa de operaciones bélicas o esté justificada de otro modo.

212. Además, aunque estén vinculados de algún modo al autor del delito en cuestión, los bienes objeto de demolición a menudo son propiedad de un amplio grupo de personas, incluidos los familiares o parientes del

interesado, o son utilizados por esas personas. A este respecto, la Corte observa que el primer párrafo del artículo 33 del Cuarto Convenio de Ginebra dispone que “[n]o se castigará a ninguna persona protegida por infracciones que no haya cometido. Están prohibidos los castigos colectivos, así como toda medida de intimidación o de terrorismo”. Esta disposición se deriva del principio general de responsabilidad penal individual, que prohíbe atribuir responsabilidad a una persona por los actos de otra. En opinión de la Corte, la demolición punitiva de un inmueble equivale a castigar a otras personas que viven en él o lo utilizan por actos que no han cometido, por lo que es contraria al artículo 33 del Cuarto Convenio de Ginebra. La Corte recuerda asimismo que la Potencia ocupante está autorizada a derogar o suspender la legislación penal vigente en el territorio ocupado en la medida en que constituya, entre otras cosas, “un obstáculo para la aplicación de [ese] Convenio” (segundo párrafo del artículo 64 del Cuarto Convenio de Ginebra). Esta disposición implica que, incluso si el Reglamento 119 de Defensa de Palestina (Estado de Emergencia) sigue en vigor en lo que respecta al derecho interno, Israel no puede invocarlo para actuar de manera incompatible con sus obligaciones internacionales en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra y, en particular, su obligación de abstenerse de imponer castigos colectivos.

213. La práctica de Israel consistente en realizar demoliciones punitivas de bienes palestinos, al ser contraria a las obligaciones que incumben a ese país en virtud del derecho internacional humanitario, no responde a una finalidad legítima de interés público. La Corte considera que, dado que esta práctica supone un trato diferenciado no justificado para los palestinos, equivale a una discriminación prohibida en virtud de los artículos 2, párrafo 1, y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 2, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 2 de la Convención contra la Discriminación Racial.

b) Demoliciones por falta de permiso de construcción

214. Una forma distinta de demolición de bienes tiene lugar en aplicación del sistema de planificación territorial de Israel en la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental. Como ha señalado anteriormente la Corte, Israel ha destinado casi todas las tierras de la zona C (que representa más del 60 % de la superficie de la Ribera Occidental) a asentamientos israelíes, zonas militares de acceso restringido y reservas naturales (véase el párrafo 120). Menos del 1 % de las tierras de la zona C y el 13 % de las tierras de Jerusalén Oriental se destinan a la construcción de infraestructuras para los palestinos (“informe sobre la asistencia de la UNCTAD al pueblo palestino: evolución de la economía del Territorio Palestino Ocupado”, doc. [TD/B/EX\(71\)/2](#) de las Naciones Unidas, 20 de septiembre de 2021, párr. 33; véase también el párrafo 163 *supra*).

215. Por otra parte, según el informe de 2013 de la Misión Internacional Independiente de Investigación, los palestinos estaban excluidos de los comités de planificación que están facultados para conceder los permisos de construcción y velar por su cumplimiento; en los 20 años anteriores al informe, el 94 % de las solicitudes de permisos presentadas por palestinos habían sido denegadas (“informe de la misión internacional independiente de investigación de las repercusiones de los asentamientos israelíes en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del pueblo palestino en todo el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental”, documento [A/HRC/22/63](#) de las Naciones Unidas (7 de febrero de 2013), párr. 70). Según se informa, la tasa de aprobación de solicitudes de permisos presentadas por palestinos ha disminuido aún más desde entonces (“informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel”, doc. [A/77/328](#) de las Naciones Unidas (14 de septiembre de 2022), párr. 42; véase también “Los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado: informe del Secretario General de las Naciones Unidas”, doc. [A/77/493](#) de las Naciones Unidas (3 de octubre de 2022), párr. 18). En julio de 2023, el jefe de infraestructuras de la Administración Civil israelí confirmó que más del 90 % de las solicitudes de permisos presentadas por palestinos eran rechazadas, mientras que aproximadamente entre el 60 % y el 70 % de las solicitudes presentadas por israelíes eran examinadas y aprobadas (“Asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado: informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, doc. [A/HRC/55/72](#) de las Naciones Unidas (1 de febrero de 2024), párr. 35).

216. Dado que el proceso para obtener un permiso de construcción es largo, complicado y costoso y que el índice de aprobación es bajo, muchos palestinos construyen estructuras sin permiso. Los edificios que carecen de permiso pueden ser objeto de demolición, con lo que sus residentes corren el riesgo de ser desalojados y desplazados; como la Corte ha observado anteriormente, más de un tercio de los hogares palestinos, que albergan aproximadamente 100.000 residentes, carecían de permiso de construcción en 2019 (véase el párrafo 165). Las elevadas sanciones que se imponen en caso de falta de permiso de construcción han llevado a muchos palestinos a

demoler sus propios bienes (“Los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado: informe del Secretario General”, doc. [A/75/376](#) de las Naciones Unidas (1 de octubre de 2020), párr. 48).

217. Una serie de modificaciones del marco jurídico aplicable en materia de zonificación y planificación, incluida la promulgación de la Ordenanza Militar núm. 1797 en 2019 y la modificación de la Ordenanza Militar núm. 1252 en 2020, permiten a las autoridades israelíes demoler estructuras en un plazo de 96 horas desde la emisión de una orden de desalojo; también se han limitado las posibilidades de recurso contra las demoliciones (“Asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado: informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, doc. [A/HRC/46/65](#) de las Naciones Unidas (15 de febrero de 2021), párr. 32). Por consiguiente, el ritmo de demoliciones ha aumentado de manera constante. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha informado de la demolición de más de 7.000 estructuras pertenecientes a palestinos entre 2012 y 2022, la mayoría en la zona C y Jerusalén Oriental. De estas estructuras, más de 1.600 proporcionaban ayuda humanitaria, más de 600 albergaban instalaciones de agua, saneamiento e higiene y más de 20 eran escuelas en las que estudiaban aproximadamente 1.300 niños (“Asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado: informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, doc. [A/HRC/52/76](#) de las Naciones Unidas (15 de marzo de 2023), párrs. 25 y 26).

218. En cambio, las construcciones de colonos que carecen de permiso de construcción en la Ribera Occidental se ven mucho menos afectadas por la práctica de las demoliciones. Según el Secretario General de las Naciones Unidas, en el período 2019-2020 las órdenes de demolición dictadas para estructuras palestinas quintuplicaron las correspondientes a estructuras israelíes. Teniendo en cuenta el gran número de estructuras que se construyen sin permiso en los asentamientos y puestos de avanzada, el Secretario General considera que esto indica una discriminación contra los palestinos (“Los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado: informe del Secretario General”, doc. [A/78/554](#) de las Naciones Unidas (25 de octubre de 2023), párr. 33). A este respecto, la Corte recuerda la amplia práctica de regularizar retroactivamente las construcciones de colonos que carecen de permiso de construcción en el Territorio Palestino Ocupado en lugar de demolerlas (véase el párrafo 112 *supra*).

219. La Corte observa que el trato diferenciado de los palestinos que se deriva de las políticas y prácticas de planificación de Israel ha sido puesto de relieve por el Secretario General de las Naciones Unidas y varios órganos creados en virtud de tratados, incluidos el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (“Los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado: informe del Secretario General”, doc. [A/78/554](#) de las Naciones Unidas (25 de octubre de 2023), párr. 19; Comité de Derechos Humanos, “Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Israel”, doc. [CCPR/C/ISR/CO/5](#) de las Naciones Unidas (5 de mayo de 2022), párr. 42; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de Israel”, doc. [E/C.12/ISR/CO/4](#) de las Naciones Unidas (12 de noviembre de 2019), párr. 50; Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, “Observaciones finales sobre los informes 17º a 19º combinados de Israel”, doc. [CERD/C/ISR/CO/17-19](#) de las Naciones Unidas (27 de enero de 2020) para. 42). El Comité de Derechos Humanos, por ejemplo, ha expresado

“su profunda preocupación por el hecho de que la práctica sistemática de demoliciones y desalojos forzosos basada en políticas discriminatorias haya conducido a la separación de las comunidades judías y palestinas en el Territorio Palestino Ocupado, lo que constituye segregación racial” (Comité de Derechos Humanos, “Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Israel”, doc. [CCPR/C/ISR/CO/5](#) de las Naciones Unidas (5 de mayo de 2022), párr. 42).

220. Sobre la base de las pruebas de que dispone, la Corte considera que la política de planificación de Israel con respecto a la expedición de permisos de construcción, y su práctica de demolición de los bienes construidos sin permiso, constituye un trato diferenciado de los palestinos en el disfrute de su derecho a ser protegidos de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia y su domicilio, garantizado en el artículo 17, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

221. En opinión de la Corte, esta práctica no puede justificarse basándose en criterios razonables y objetivos ni en una finalidad legítima de interés público. En particular, no hay nada en el material que la Corte tiene ante sí

que indique que la denegación de permisos de construcción a los palestinos o las demoliciones de estructuras por falta de tales permisos, que se realizan a una escala tan amplia, respondan a una finalidad legítima. Por lo demás, esta conclusión se ve corroborada por el hecho de que, en la medida en que concede permisos de construcción en favor de los colonos y los asentamientos, Israel actúa en violación del derecho internacional (véanse los párrafos 119 y 155 *supra*).

222. Habida cuenta de lo que antecede, la Corte considera que la política de planificación de Israel en lo que respecta a la expedición de permisos de construcción, y en particular su práctica de demolición de los bienes construidos sin permiso, que supone un trato diferenciado no justificado para los palestinos en relación con los colonos, equivale a una discriminación prohibida que vulnera los artículos 2, párrafo 1, y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 2, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el artículo 2 de la Convención contra la Discriminación Racial.

6. Conclusión sobre la legislación y las medidas discriminatorias de Israel

223. Por las razones expuestas, la Corte concluye que una amplia gama de leyes aprobadas y medidas adoptadas por Israel en su calidad de Potencia ocupante suponen un trato diferenciado para los palestinos por motivos que se especifican en el derecho internacional. Como ha observado la Corte, esta diferencia de trato no puede justificarse basándose en criterios razonables y objetivos ni en una finalidad legítima de interés público (véanse los párrafos 196, 205, 213 y 222). Por consiguiente, la Corte considera que el régimen de restricciones generales impuesto por Israel a los palestinos en el Territorio Palestino Ocupado constituye una discriminación sistémica basada, entre otros motivos, en la raza, la religión o el origen étnico, en violación de los artículos 2, párrafo 1, y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 2, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 2 de la Convención contra la Discriminación Racial.

224. Varios participantes han argumentado que las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado equivalen a segregación o *apartheid*, en violación del artículo 3 de la Convención contra la Discriminación Racial.

225. El artículo 3 de la Convención contra la Discriminación Racial dispone lo siguiente: “Los Estados partes condenan especialmente la segregación racial y el *apartheid* y se comprometen a prevenir, prohibir y eliminar en los territorios bajo su jurisdicción todas las prácticas de esta naturaleza”. Esta disposición hace referencia a dos formas especialmente graves de discriminación racial: la segregación racial y el *apartheid*.

226. La Corte observa que las políticas y prácticas de Israel en la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental establecen una separación entre la población palestina y los colonos que Israel traslada al territorio.

227. Esta separación es ante todo física: la política de asentamientos de Israel fomenta la fragmentación de la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental, y el confinamiento de las comunidades palestinas en enclaves. Las políticas y prácticas discriminatorias, como la imposición de un sistema de permisos de residencia y el uso de redes de carreteras distintas, que la Corte ha analizado anteriormente, hacen que las comunidades palestinas se mantengan físicamente aisladas unas de otras y separadas de las comunidades de colonos (véanse, por ejemplo, los párrafos 200 y 219).

228. La separación entre las comunidades de colonos y las comunidades palestinas también es jurídica. A raíz de la extensión parcial del derecho israelí a la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental, los colonos y los palestinos están sujetos a sistemas jurídicos distintos en el Territorio Palestino Ocupado (véanse los párrafos 135 a 137 *supra*). El derecho israelí, en la medida en que se aplica a los palestinos, les impone restricciones, como la exigencia de un permiso para residir en Jerusalén Oriental, de las que están exentos los colonos. Además, la legislación y las medidas que Israel aplica desde hace décadas tratan de forma diferente a los palestinos y a los colonos en numerosos ámbitos de la actividad individual y social en la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental (véanse los párrafos 192 a 222 *supra*).

229. La Corte observa que la legislación y las medidas de Israel imponen y sirven para mantener una separación casi total en la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental entre las comunidades de colonos y las comunidades palestinas. Por este motivo, la Corte considera que la legislación y las medidas de Israel constituyen una violación del artículo 3 de la Convención contra la Discriminación Racial.

E. Cuestión de la libre determinación

230. La Corte ha concluido que la política de asentamientos de Israel, sus actos de anexión y su legislación y medidas discriminatorias conexas infringen el derecho internacional. La Corte aborda ahora el aspecto de la pregunta *a)* que se refiere a los efectos de las políticas y prácticas de Israel en el ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo palestino. La Corte ya ha reconocido la existencia del derecho del pueblo palestino a la libre determinación (*Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el Territorio Palestino Ocupado*, opinión consultiva, *I.C.J. Reports 2004 (I)*, pág. 183, párr. 118). La Corte determinará en primer lugar el alcance de este derecho y examinará después los efectos, en su caso, que las políticas y prácticas de Israel tienen sobre su ejercicio.

231. La Carta de las Naciones Unidas se refiere al fomento de relaciones de amistad “basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos” como uno de los propósitos de la Organización (Artículo 1, párrafo 2, de la Carta). El derecho de todos los pueblos a la libre determinación ha sido reconocido por la Asamblea General como uno de los “principios básicos del derecho internacional” (anexo de la resolución 2625 (XXV), de 24 de octubre de 1970). Su importancia ha sido destacada en numerosas resoluciones, en particular en la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales, que confirma la aplicación del derecho a todos los pueblos y territorios que aún no han alcanzado la independencia (resolución 1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960, párr. 2).

232. La Corte ha afirmado que el derecho de todos los pueblos a la libre determinación es “uno de los principios esenciales del derecho internacional contemporáneo” (*Timor Oriental (Portugal c. Australia)*, fallo, *I.C.J. Reports 1995*, pág. 102, párr. 29). De hecho, ha reconocido que la obligación de respetar el derecho a la libre determinación es exigible *erga omnes* y que todos los Estados tienen un interés jurídico en la protección de ese derecho (*Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el Territorio Palestino Ocupado*, opinión consultiva, *I.C.J. Reports 2004 (I)*, pág. 199, párr. 155; *Consecuencias jurídicas de la separación del archipiélago de Chagos de Mauricio en 1965*, opinión consultiva, *I.C.J. Reports 2019 (I)*, pág. 139, párr. 180).

233. La posición central que el derecho a la libre determinación ocupa en el derecho internacional también se refleja en su inclusión como artículo 1 común del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo primer párrafo establece: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”. El Comité de Derechos Humanos ha explicado que la importancia del derecho a la libre determinación se deriva del hecho de que “su ejercicio es una condición esencial para la eficaz garantía y observancia de los derechos humanos individuales y para la promoción y fortalecimiento de esos derechos” (observación general núm. 12 (13 de marzo de 1984), *Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo noveno período de sesiones, suplemento núm. 40* (doc. A/39/40 (SUPP) de las Naciones Unidas, anexo VI, párr. 1). En efecto, como ha afirmado la Corte, el derecho a la libre determinación es un derecho humano fundamental (*Consecuencias jurídicas de la separación del archipiélago de Chagos de Mauricio en 1965*, opinión consultiva, *I.C.J. Reports 2019 (I)*, pág. 131, párr. 144). En el contexto de la descolonización, la Asamblea General ha destacado en numerosas ocasiones la importancia del derecho a la libre determinación como “derecho inalienable” (por ejemplo, resolución 40/25, de 29 de noviembre de 1985, párr. 3; resolución 42/14, de 6 de noviembre de 1987, párr. 4; resolución 49/40, de 9 de diciembre de 1994, párr. 1). La Asamblea General también ha subrayado que, en el proceso de descolonización, “no hay alternativas al principio de la libre determinación” (por ejemplo, resolución 57/138 (A), de 11 de diciembre de 2002, párr. 3; resolución 59/134 (A), de 10 de diciembre de 2004, párr. 2). La Corte considera que, en casos de ocupación extranjera como el presente, el derecho a la libre determinación constituye una norma imperativa de derecho internacional.

234. El derecho a la libre determinación de los pueblos tiene un ámbito amplio de aplicación (*Consecuencias jurídicas de la separación del archipiélago de Chagos de Mauricio en 1965*, opinión consultiva, *I.C.J. Reports 2019 (I)*, pág. 131, párr. 144). Para responder a la pregunta que se le plantea, la Corte debe determinar si

las políticas y prácticas de Israel, como Potencia ocupante, en el Territorio Palestino Ocupado impiden el ejercicio del derecho del pueblo palestino a la libre determinación.

235. Muchos participantes han argumentado que la ocupación por Israel del Territorio Palestino Ocupado viola el derecho del pueblo palestino a la libre determinación. Las políticas y prácticas de Israel que, según se indica, infringen este derecho incluyen la expansión de los asentamientos y el establecimiento de infraestructuras asociadas en el Territorio Palestino Ocupado; la confiscación de tierras y la demolición de estructuras palestinas; los cambios en la composición demográfica de determinadas partes del Territorio Palestino Ocupado; la fragmentación del Territorio Palestino Ocupado; y la apropiación de recursos naturales, incluida la explotación de hidrocarburos y de recursos minerales e hídricos en el Territorio Palestino Ocupado. Otros participantes han expresado sus reservas. Un participante, en particular, ha argumentado que el derecho a la libre determinación es relativo y no debe implicar cambios en las fronteras existentes. A su juicio, la Corte debe determinar si el ejercicio por el pueblo palestino de su derecho a la libre determinación ha vulnerado la integridad territorial, la inviolabilidad política o las necesidades legítimas en materia de seguridad del Estado de Israel.

236. En opinión de la Corte, los elementos que se indican a continuación son de especial pertinencia en el presente procedimiento.

237. En primer lugar, la Corte recuerda que el derecho a la integridad territorial está reconocido en el derecho internacional consuetudinario como “un corolario del derecho a la libre determinación” (*Consecuencias jurídicas de la separación del archipiélago de Chagos de Mauricio en 1965*, opinión consultiva, *I.C.J. Reports 2019 (I)*, pág. 134, párr. 160). En el contexto de Palestina, la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos han pedido que “se respeten y preserven la unidad, la contigüidad y la integridad territoriales de todo el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental” (por ejemplo, resolución 77/208 de la Asamblea General, de 15 de diciembre de 2022, noveno párrafo del preámbulo; resolución 49/28 del Consejo de Derechos Humanos, de 1 de abril de 2022, párr. 5). La Corte considera que Israel, como Potencia ocupante, tiene la obligación de no impedir que el pueblo palestino ejerza su derecho a la libre determinación, incluido su derecho a un Estado independiente y soberano, sobre la totalidad del Territorio Palestino Ocupado.

238. La Corte ya ha constatado que la política de asentamientos de Israel ha fragmentado la Ribera Occidental y separado de ella a Jerusalén Oriental (véase el párrafo 164 *supra*). La expansión de los asentamientos en la Ribera Occidental, unida a la ampliación de una red de carreteras a la que los palestinos tienen un acceso limitado o nulo, ha tenido el efecto de confinar a las comunidades palestinas en enclaves en la Ribera Occidental (véanse los párrafos 200 y 227 *supra*). Además, la anexión por Israel de amplias partes del Territorio Palestino Ocupado viola la integridad de este último, como elemento esencial del derecho del pueblo palestino a la libre determinación.

239. En segundo lugar, en virtud del derecho a la libre determinación, un pueblo está protegido frente a los actos dirigidos a dispersar a la población y socavar su integridad como pueblo. En el pasado, la Corte llegó a la conclusión de que la construcción del muro por Israel, junto con otras medidas, contribuía a la partida de poblaciones palestinas de determinadas zonas, con lo que se corría el riesgo de alterar la composición demográfica del Territorio Palestino Ocupado; por ese motivo, impedía gravemente el ejercicio por el pueblo palestino de su derecho a la libre determinación (*Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el Territorio Palestino Ocupado*, opinión consultiva, *I.C.J. Reports 2004 (I)*, pág. 184, párr. 122). La Corte también ha concluido anteriormente que la política de asentamientos de Israel en su conjunto, su anexión de territorio y su legislación y medidas conexas que discriminan a los palestinos en el Territorio Palestino Ocupado contribuyen a la partida de palestinos de determinadas zonas del Territorio Palestino Ocupado, en particular la zona C y Jerusalén Oriental. Además, las estrictas restricciones de Israel a la circulación entre la Franja de Gaza, la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental dividen a las poblaciones palestinas que viven en distintas partes del Territorio Palestino Ocupado (véanse los párrafos 202 y 206 *supra*). En opinión de la Corte, estas políticas y prácticas menoscaban la integridad del pueblo palestino en el Territorio Palestino Ocupado, impidiendo de forma significativa el ejercicio de su derecho a la libre determinación.

240. Un tercer elemento del derecho a la libre determinación es el derecho a ejercer la soberanía permanente sobre los recursos naturales, que es un principio del derecho internacional consuetudinario (véase *Actividades armadas en el territorio del Congo (República Democrática del Congo c. Uganda)*, fallo, *I.C.J. Reports 2005*, pág. 251, párr. 244). La Corte ya ha constatado anteriormente que Israel ha explotado los recursos naturales del Territorio Palestino Ocupado en su propio beneficio y en beneficio de los asentamientos, incumpliendo su

obligación de respetar la soberanía permanente del pueblo palestino sobre los recursos naturales (véase el párrafo 133). Al privar al pueblo palestino durante décadas del disfrute de los recursos naturales del Territorio Palestino Ocupado, Israel ha impedido el ejercicio de su derecho a la libre determinación.

241. En cuarto lugar, un elemento fundamental del derecho a la libre determinación es el derecho de los pueblos a determinar libremente su estatuto político y a proseguir su desarrollo económico, social y cultural. Este derecho se refleja en las resoluciones 1514 (XV) y 2625 (XXV), y está consagrado en el artículo 1 común del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (véase el párrafo 233 *supra*). La Corte ya ha examinado los efectos de las políticas y prácticas de Israel en algunos aspectos de la vida económica, social y cultural de los palestinos, en particular desde el punto de vista de la merma de sus derechos humanos. El hecho de que la Ribera Occidental, Jerusalén Oriental y, especialmente, la Franja de Gaza dependan de Israel para el suministro de bienes y servicios básicos menoscaba el disfrute de los derechos humanos fundamentales, en particular el derecho a la libre determinación (“Consecuencias económicas y sociales de la ocupación israelí para las condiciones de vida del pueblo palestino en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y de la población árabe en el Golán sirio ocupado”, doc. [A/78/127-E/2023/95](#) de las Naciones Unidas (30 de junio de 2023)).

242. Además del perjuicio causado a las personas, consideradas individualmente, la violación de los derechos de los palestinos —incluidos el derecho a la libertad y la seguridad personales y la libertad de circulación— repercute en el pueblo palestino en su conjunto, frustrando su desarrollo económico, social y cultural. A este respecto, la Comisión Económica y Social para Asia Occidental observó en 2023 que

“[l]as restricciones, la ampliación de los asentamientos ilegales y otras prácticas impuestas por Israel no solo impiden el desarrollo, sino que también han agravado la fragmentación del territorio palestino. Estas políticas y prácticas han tenido graves repercusiones humanitarias, económicas, sociales y políticas en los palestinos y en su capacidad para ejercer sus derechos humanos fundamentales. Sus repercusiones han tenido un efecto acumulativo, intergeneracional y en varios niveles en la sociedad, la economía y el medio ambiente palestinos y han provocado el deterioro de las condiciones de vida de los palestinos, su desplazamiento forzado, el desdesarrollo del Territorio Palestino Ocupado, el enraizamiento de la dependencia asimétrica de la economía palestina con respecto a Israel y la intensificación de la dependencia institucional palestina con respecto a la ayuda exterior.” (“Consecuencias económicas y sociales de la ocupación israelí para las condiciones de vida del pueblo palestino en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y de la población árabe en el Golán sirio ocupado”, doc. [A/78/127-E/2023/95](#) de las Naciones Unidas (30 de junio de 2023), párr. 130).

Por consiguiente, la Corte considera que las políticas y prácticas de Israel obstaculizan el derecho del pueblo palestino a determinar libremente su estatuto político y a proseguir su desarrollo económico, social y cultural.

243. El carácter prolongado de las políticas y prácticas ilegales de Israel agrava su violación del derecho del pueblo palestino a la libre determinación. Como consecuencia de las políticas y prácticas de Israel, que duran desde hace décadas, el pueblo palestino se ha visto privado de su derecho a la libre determinación durante un largo período, y el hecho de que estas políticas y prácticas se sigan prolongando socava el ejercicio de este derecho en el futuro. Por estas razones, la Corte considera que las políticas y prácticas ilegales de Israel incumplen la obligación que incumbe a ese país de respetar el derecho del pueblo palestino a la libre determinación. La forma en que estas políticas afectan al estatuto jurídico de la ocupación y, por tanto, a la legalidad de la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, se analiza más adelante (véanse los párrafos 255 a 257).

VI. EFECTOS DE LAS POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE ISRAEL EN EL ESTATUTO JURÍDICO DE LA OCUPACIÓN

A. Alcance de la primera parte de la pregunta *b)* y derecho aplicable

244. La Corte se ocupa a continuación de la primera parte de la pregunta *b)* sobre la que la Asamblea General solicitó su opinión, y examinará si las políticas y prácticas de Israel han afectado al estatuto jurídico de la ocupación a la luz de las normas y principios pertinentes del derecho internacional y, en caso afirmativo, de qué manera. Comenzará por determinar con mayor precisión el alcance de la primera parte de la pregunta *b)* planteada por la Asamblea General.

245. Como se indica en la respuesta de la Corte a la pregunta *a)* *supra*, Israel ha adoptado ciertas políticas y prácticas que no son conformes con el régimen jurídico que rige la ocupación. Además, la respuesta dada a la pregunta *a)* muestra que las políticas y prácticas de Israel, incluida la continua expansión de sus asentamientos, están diseñadas para establecer hechos irreversibles sobre el terreno, que afianzan la anexión de amplias partes del Territorio Palestino Ocupado e impiden el ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo palestino (véanse los párrafos 162 a 173 y 230 a 243 *supra*). La Corte considera que estas políticas y prácticas, y la creación de hechos sobre el terreno, tienen efectos significativos para el estatuto jurídico de la ocupación y, por tanto, para la legalidad de la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado.

246. La Corte observa que tanto el Consejo de Seguridad como la Asamblea General han expresado opiniones similares con respecto a las políticas y prácticas de Israel destinadas a modificar el estatuto jurídico, la naturaleza geográfica y la composición demográfica del Territorio Palestino Ocupado.

247. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad, en su resolución [252 \(1968\)](#), después de reafirmar que la adquisición de territorio mediante la conquista militar es inadmisible, declaró que

“[c]onsidera que todas las medidas de carácter legislativo y administrativo tomadas por Israel y los actos que ha ejecutado, incluso la expropiación de tierras y bienes, que tienden a modificar el estatuto jurídico de Jerusalén son nulos y no pueden modificar ese estatuto”.

Mediante su resolución [446 \(1979\)](#), el Consejo también exhortó a Israel a que

“rescinda sus medidas anteriores y a que desista de adoptar medida alguna que ocasione el cambio de estatuto jurídico y la naturaleza geográfica y que afecte apreciablemente la composición demográfica de los territorios árabes ocupados desde 1967, incluso Jerusalén, y, en particular, a que no traslade partes de su propia población civil a los territorios árabes ocupados”.

Además, en su resolución [465 \(1980\)](#), el Consejo determinó que

“todas las medidas adoptadas por Israel para modificar el carácter físico, la composición demográfica, la estructura institucional o el estatuto de los territorios palestinos y otros territorios árabes ocupados desde 1967, incluso Jerusalén, o cualquier parte de los mismos, carecen totalmente de validez jurídica y que la política y las prácticas de Israel de asentar a grupos de su población y a nuevos inmigrantes en esos territorios constituyen una violación manifiesta del Convenio de Ginebra relativo a la Protección [debida a las] Personas Civiles en Tiempo de Guerra y constituyen también un serio obstáculo para el logro de una paz completa, justa y duradera en el Oriente Medio”.

248. Del mismo modo, la Asamblea General, en su resolución [32/5 \(1977\)](#), refiriéndose a la grave situación en los territorios árabes ocupados, expresó su grave inquietud y preocupación por, entre otras cosas, “las medidas y actos del Gobierno de Israel, como Potencia de ocupación, encaminados a cambiar la condición jurídica, el carácter geográfico y la composición demográfica de esos territorios”, y decidió que “todas esas medidas y actos de Israel en los territorios palestinos y otros territorios árabes ocupados desde 1967 no tienen ninguna validez jurídica”. Posteriormente, en 2015, exhortó a

“Israel, la Potencia ocupante, a que cumpla estrictamente las obligaciones que le impone el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, y a que dé término a todas las medidas contrarias al derecho internacional y todas las acciones unilaterales en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, que tengan por objeto alterar el carácter, el estatuto y la composición demográfica del Territorio, incluso la confiscación de territorio y su anexión de hecho, y de ese modo prejuzgar el resultado final de las negociaciones de paz, con miras a lograr sin dilación el fin de la ocupación israelí que se inició en 1967” (resolución 70/15 (2015)).

249. Más recientemente, la Asamblea General, en la misma resolución en la que solicitaba a la Corte la presente opinión consultiva, exigió a

“Israel, la Potencia ocupante, que ponga fin a todas sus actividades de asentamiento, la construcción del muro y toda otra medida tendente a alterar el carácter, el estatuto y la composición demográfica del Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental y sus alrededores, todas las cuales, entre otras cosas, tienen efectos graves y nocivos para los derechos humanos del pueblo palestino, incluido el derecho a la libre determinación, y las perspectivas de lograr sin demora el fin de la ocupación israelí que comenzó en 1967 y un acuerdo de paz justo, duradero y general entre las partes palestina e israelí” (resolución 77/247 (2022)).

250. Por tanto, la Corte considera que la primera parte de la pregunta *b)* que le ha planteado la Asamblea General no es si las políticas y prácticas de Israel afectan al estatuto jurídico de la ocupación como tal. Más bien, la Corte entiende que la primera parte de la pregunta *b)* se refiere a la manera en que las políticas y prácticas de Israel afectan al estatuto jurídico de la ocupación y, por tanto, a la legalidad de la presencia continuada de Israel, como Potencia ocupante, en el Territorio Palestino Ocupado. Esta legalidad debe determinarse con arreglo a las normas y principios del derecho internacional general, incluidos los de la Carta de las Naciones Unidas.

251. La Corte considera que las normas y principios del derecho internacional general y de la Carta de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza en territorio extranjero (*ius ad bellum*) deben distinguirse de las normas y principios que se aplican a la conducta de la Potencia ocupante en virtud del derecho internacional humanitario (*ius in bello*) y el derecho internacional de los derechos humanos. Las primeras normas determinan la legalidad de la presencia continuada de la Potencia ocupante en el territorio ocupado, mientras que las segundas se siguen aplicando a la Potencia ocupante, con independencia de la legalidad o ilegalidad de su presencia. Son las normas y principios de la primera categoría, relativos al uso de la fuerza, junto con el derecho de los pueblos a la libre determinación, los que la Corte considera aplicables a efectos de su respuesta a la primera parte de la pregunta *b)* de la solicitud de opinión consultiva de la Asamblea General.

B. Manera en que las políticas y prácticas de Israel afectan al estatuto jurídico de la ocupación

252. La Corte ha determinado anteriormente que las políticas y prácticas israelíes y la manera en que se ejecutan y aplican sobre el terreno tienen efectos significativos en el estatuto jurídico de la ocupación a través de la extensión de la soberanía israelí a ciertas partes del territorio ocupado, su anexión gradual al territorio israelí, el ejercicio de funciones gubernamentales israelíes y la aplicación de su legislación interna en ellas, así como a través del traslado de un número cada vez mayor de sus propios nacionales a esas partes del territorio y la obstrucción del ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo palestino (véanse las partes V.C y V.E *supra*). Por consiguiente, estas políticas y prácticas han provocado cambios en el carácter físico, el estatuto jurídico, la composición demográfica y la integridad territorial del Territorio Palestino Ocupado, especialmente en la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental. Tales cambios manifiestan la intención de crear una presencia israelí permanente e irreversible en el Territorio Palestino Ocupado.

253. La Corte observa que una ocupación implica, por su propia naturaleza, un uso continuado de la fuerza en territorio extranjero. No obstante, este uso de la fuerza está sujeto a las normas del derecho internacional que rigen la legalidad del uso de la fuerza, o *ius ad bellum*. Como se indica en la parte V.C *supra*, estas normas prohíben el uso de la fuerza para adquirir territorio. Según el derecho internacional contemporáneo, tal como se recoge en la

Carta de las Naciones Unidas y se refleja en el derecho internacional consuetudinario, la ocupación no puede en ningún caso servir de base para un título sobre un territorio ni justificar su adquisición por la Potencia ocupante.

254. La afirmación por Israel de su soberanía sobre determinadas partes del territorio y su anexión de tales partes constituyen, como se ha expuesto anteriormente, una violación de la prohibición de adquisición de territorio por la fuerza. Esta violación tiene un efecto directo sobre la legalidad de la presencia continuada de Israel, como Potencia ocupante, en el Territorio Palestino Ocupado. La Corte considera que Israel no tiene derecho a la soberanía sobre ninguna parte del Territorio Palestino Ocupado ni puede ejercer poderes soberanos en él debido a su ocupación. Las preocupaciones de Israel en materia de seguridad tampoco pueden prevalecer sobre el principio de prohibición de la adquisición de territorio por la fuerza.

255. En cuanto al derecho a la libre determinación, la Corte recuerda que “el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos” está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas (Artículo 1, párrafo 2) y se reafirma en la resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, según la cual “[t]odo Estado tiene el deber de abstenerse de recurrir a cualquier medida de fuerza que prive a los pueblos aludidos [en esa resolución] de su derecho a la libre determinación”.

256. La Corte observa que los efectos de las políticas y prácticas de Israel, tal como se han expuesto anteriormente, y su ejercicio de soberanía sobre determinadas partes del Territorio Palestino Ocupado, en particular la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental, constituyen una obstrucción al ejercicio por el pueblo palestino de su derecho a la libre determinación (véanse los párrafos 234 a 243 *supra*). Los efectos de estas políticas y prácticas incluyen la anexión por Israel de determinadas partes del Territorio Palestino Ocupado, la fragmentación de ese territorio, con el consiguiente menoscabo de su integridad, el hecho de privar al pueblo palestino del disfrute de los recursos naturales de dicho territorio y su obstrucción del derecho del pueblo palestino a proseguir su desarrollo económico, social y cultural (véanse los párrafos 230 a 243 *supra*).

257. Los efectos antes descritos de las políticas y prácticas de Israel, que han determinado, entre otras cosas, que el pueblo palestino se haya visto privado de manera prolongada de su derecho a la libre determinación, constituyen una vulneración de este derecho fundamental. Esta vulneración tiene un efecto directo sobre la legalidad de la presencia de Israel, como Potencia ocupante, en el Territorio Palestino Ocupado. La Corte considera que la ocupación no puede utilizarse de tal manera que se deje indefinidamente a la población ocupada en un estado de expectativa e incertidumbre, privándola de su derecho a la libre determinación mientras partes de su territorio se integran en el propio territorio de la Potencia ocupante. La Corte considera que la existencia del derecho del pueblo palestino a la libre determinación no puede estar sujeta a condiciones por la Potencia ocupante, dado su carácter de derecho inalienable.

258. Habida cuenta de lo que antecede, la Corte examinará a continuación la legalidad de la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado.

C. Legalidad de la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado

259. Muchos de los participantes en el presente procedimiento han argumentado que la ocupación por Israel es ilegal porque sus políticas y prácticas han provocado cambios en el territorio y su composición demográfica que tienen carácter permanente. En su opinión, el carácter permanente de las violaciones de la prohibición de la adquisición de territorio por la fuerza cometidas por Israel hace que su presencia continuada en el Territorio Palestino Ocupado sea ilegal.

260. Algunos participantes han asimilado el presente procedimiento al relativo a las *Consecuencias jurídicas que tiene para los Estados la continuación de la presencia de Sudáfrica en Namibia*. Esos participantes han argumentado que si la presencia continuada de Sudáfrica podía considerarse ilegal debido a su violación de las normas y principios aplicables del derecho internacional general y de la Carta de las Naciones Unidas, también podía serlo la ocupación de Israel, por su violación de las mismas normas y principios.

261. La Corte considera que las violaciones por Israel de la prohibición de adquisición de territorio por la fuerza y del derecho del pueblo palestino a la libre determinación tienen un efecto directo sobre la legalidad de la presencia continuada de Israel, como Potencia ocupante, en el Territorio Palestino Ocupado. El abuso continuado por Israel de su posición como Potencia ocupante, a través de la anexión del Territorio Palestino Ocupado y la imposición de un control permanente sobre él y de la continua frustración del derecho del pueblo palestino a la libre determinación, viola principios fundamentales del derecho internacional y hace ilegal la presencia de Israel en el Territorio Palestino Ocupado.

262. Esta ilegalidad se refiere a la totalidad del territorio palestino ocupado por Israel en 1967. Esta es la unidad territorial en la que Israel ha impuesto políticas y prácticas para fragmentar y frustrar la capacidad del pueblo palestino de ejercer su derecho a la libre determinación, y sobre grandes zonas de la cual ha extendido su soberanía en violación del derecho internacional. El Territorio Palestino Ocupado en su totalidad es también el territorio en relación con el cual el pueblo palestino debe poder ejercer su derecho a la libre determinación y cuya integridad debe respetarse.

263. Tres participantes han sostenido que los acuerdos entre Israel y Palestina, incluidos los Acuerdos de Oslo, reconocen el derecho de Israel a mantener su presencia en el Territorio Palestino Ocupado, entre otras cosas, para atender sus necesidades y obligaciones en materia de seguridad. La Corte observa que estos Acuerdos no permiten a Israel anexionarse partes del Territorio Palestino Ocupado para atender sus necesidades de seguridad. Tampoco autorizan a Israel a mantener una presencia permanente en el Territorio Palestino Ocupado para esos mismos fines.

264. La Corte destaca que la conclusión de que la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado es ilegal no lo exime de las obligaciones y responsabilidades que le incumben en virtud del derecho internacional, en particular el derecho de la ocupación, ante la población palestina y ante los demás Estados en lo que respecta al ejercicio de sus facultades en relación con el territorio hasta el momento en que se ponga fin a su presencia. Es el control efectivo de un territorio, con independencia de su estatuto jurídico en virtud del derecho internacional, lo que constituye el fundamento de la responsabilidad del Estado por sus actos que afecten a la población del territorio o a otros Estados (véase *Consecuencias jurídicas que tiene para los Estados la continuación de la presencia de Sudáfrica en Namibia (África Sudoccidental)*, no obstante lo dispuesto en la resolución 276 (1970) del Consejo de Seguridad, opinión consultiva, *I.C.J. Reports 1971*, pág. 54, párr. 118).

VII. CONSECUENCIAS JURÍDICAS DERIVADAS DE LAS POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE ISRAEL Y DE LA ILEGALIDAD DE LA PRESENCIA CONTINUADA DE ISRAEL EN EL TERRITORIO PALESTINO OCUPADO.

265. La Corte ha concluido que las políticas y prácticas de Israel mencionadas en la pregunta *a)* infringen el derecho internacional. El mantenimiento de esas políticas y prácticas es un hecho ilícito de carácter continuado que genera la responsabilidad internacional de Israel (*Consecuencias jurídicas de la separación del archipiélago de Chagos de Mauricio en 1965*, opinión consultiva, *I.C.J. Reports 2019 (I)*, págs. 138 y 139, párr. 177).

266. La Corte también ha concluido, en respuesta a la primera parte de la pregunta *b)*, que la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado es ilegal. Por lo tanto, la Corte examinará las consecuencias jurídicas que se derivan para Israel de las políticas y prácticas de ese país que se mencionan en la pregunta *a)*, junto con las que, a efectos de la pregunta *b)*, se desprenden de la ilegalidad de la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado para Israel, para los demás Estados y para las Naciones Unidas.

A. Consecuencias jurídicas para Israel

267. En cuanto a su conclusión de que la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado es ilegal, la Corte considera que dicha presencia constituye un hecho ilícito que genera su responsabilidad internacional. Se trata de un hecho ilícito de carácter continuado que ha sido provocado por las violaciones de la prohibición de adquisición de territorio por la fuerza y del derecho a la libre determinación del pueblo palestino que Israel ha cometido mediante sus políticas y prácticas. Por consiguiente, Israel tiene la obligación de poner fin

a su presencia en el Territorio Palestino Ocupado lo antes posible. Como afirmó la Corte en su opinión consultiva sobre el *Muro*, la obligación de un Estado responsable de un hecho internacionalmente ilícito de poner fin a ese hecho está firmemente establecida en el derecho internacional general, y la Corte ha confirmado en varias ocasiones la existencia de dicha obligación (*Consecuencias jurídicas de la separación del archipiélago de Chagos de Mauricio en 1965*, opinión consultiva, *I.C.J. Reports 2019 (I)*, pág. 139, párr. 178; *Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el Territorio Palestino Ocupado*, opinión consultiva, *I.C.J. Reports 2004 (I)*, pág. 197, párr. 150).

268. La Corte observa además que, en relación con las políticas y prácticas de Israel mencionadas en la pregunta *a*) que han sido declaradas ilegales, Israel tiene la obligación de poner fin a esos hechos ilícitos. A este respecto, Israel debe poner fin de inmediato a cualquier nueva actividad de asentamiento. Israel también tiene la obligación de derogar todas las leyes y medidas que crean o mantienen la situación ilegal, incluidas las que discriminan al pueblo palestino en el Territorio Palestino Ocupado, así como todas las medidas destinadas a modificar la composición demográfica de cualquier parte del territorio.

269. Israel también tiene la obligación de reparar íntegramente los daños causados por sus hechos internacionalmente ilícitos a todas las personas físicas o jurídicas afectadas (véase *Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el Territorio Palestino Ocupado*, opinión consultiva, *I.C.J. Reports 2004 (I)*, pág. 198, párr. 152). La Corte recuerda que el principio esencial es que “la reparación debe, en cuanto sea posible, hacer desaparecer todas las consecuencias del hecho ilícito y restablecer la situación que, con toda probabilidad, habría existido de no haberse cometido el hecho” (*Fábrica de Chorzów* (fondo), fallo núm. 13, 1928, *P.C.I.J. Series A*, núm. 17, pág. 47). La reparación comprende la restitución, la indemnización y la satisfacción.

270. La restitución incluye la obligación de Israel de devolver la tierra y otros bienes inmuebles, así como todos los activos confiscados a cualquier persona física o jurídica desde que comenzó su ocupación en 1967, y todos los bienes y activos culturales arrebatados a los palestinos y sus instituciones, incluidos los archivos y los documentos. También exige que se evacúe a todos los colonos de los asentamientos existentes y se desmantelen las partes del muro construido por Israel que están situadas en el Territorio Palestino Ocupado, y que se permita a todos los palestinos desplazados durante la ocupación regresar a su lugar de residencia original.

271. En caso de que tal restitución resultara ser materialmente imposible, Israel tiene la obligación de indemnizar, de conformidad con las normas aplicables del derecho internacional, a todas las personas físicas o jurídicas y a las poblaciones, cuando sea el caso, que hayan sufrido daños materiales de cualquier tipo como consecuencia de los hechos ilícitos cometidos por Israel bajo la ocupación.

272. La Corte destaca que las obligaciones derivadas de los hechos internacionalmente ilícitos de Israel no lo eximen de su deber permanente de cumplir las obligaciones internacionales que infringe con su conducta. En concreto, Israel sigue teniendo el deber de cumplir su obligación de respetar el derecho del pueblo palestino a la libre determinación y sus obligaciones con arreglo al derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos (véase *Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el Territorio Palestino Ocupado*, opinión consultiva, *I.C.J. Reports 2004 (I)*, pág. 197, párr. 149).

B. Consecuencias jurídicas para los demás Estados

273. A continuación, la Corte examina las consecuencias jurídicas para los demás Estados de los hechos internacionalmente ilícitos cometidos por Israel en el Territorio Palestino Ocupado.

274. La Corte observa que las obligaciones que Israel ha violado incluyen ciertas obligaciones *erga omnes*. Como indicó la Corte en la causa relativa a la *Barcelona Traction*, tales obligaciones, por su propia naturaleza, “incumben a todos los Estados” y, “[h]abida cuenta de la importancia de los derechos de que se trata, cabe considerar que todos los Estados tienen un interés jurídico en su protección” (*Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nueva demanda: 1962)* (*Bélgica c. España*), segunda fase, fallo, *I.C.J. Reports 1970*, pág. 32, párr. 33). Entre las obligaciones *erga omnes* que Israel ha infringido figuran la obligación de respetar el derecho del pueblo palestino a la libre determinación y la obligación derivada de la prohibición del uso de la fuerza para

adquirir territorio, así como algunas de sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos.

275. En cuanto al derecho a la libre determinación, la Corte considera que, si bien corresponde a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad pronunciarse sobre las modalidades necesarias para garantizar el fin de la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado y el pleno ejercicio por el pueblo palestino de su derecho a la libre determinación, todos los Estados deben cooperar con las Naciones Unidas para poner en práctica dichas modalidades. Como se recuerda en la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas,

“[t]odo Estado tiene el deber de promover, mediante acción conjunta o individual, la aplicación del principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, de conformidad con las disposiciones de la Carta, y de prestar asistencia a las Naciones Unidas en el cumplimiento de las obligaciones que se le encomiendan por la Carta respecto de la aplicación de dicho principio” (resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General).

276. Por lo que respecta a la prohibición de la adquisición de territorio por la fuerza, la Corte observa que el Consejo de Seguridad ha declarado en varias ocasiones, en relación con el Territorio Palestino Ocupado, la inadmisibilidad de la adquisición de territorio por la fuerza y ha determinado que

“todas las medidas adoptadas por Israel para modificar el carácter físico, la composición demográfica, la estructura institucional o el estatuto de los territorios palestinos y otros territorios árabes ocupados desde 1967, incluso Jerusalén, o cualquier parte de los mismos, carecen totalmente de validez jurídica” (resolución 465 (1980) del Consejo de Seguridad).

Además, el Consejo de Seguridad, en la resolución 2334 (2016), reafirmó que “no reconocerá ningún cambio a las líneas del 4 de junio de 1967, incluso en lo que respecta a Jerusalén, que no sean los acordados por las partes mediante negociaciones”, y exhortó “a todos los Estados a que, teniendo presente el párrafo 1 de la presente resolución, establezcan una distinción, en sus relaciones pertinentes, entre el territorio del Estado de Israel y los territorios ocupados desde 1967”.

277. Del mismo modo, la Asamblea General ha exhortado a todos los Estados a que

- “a) No reconozcan ningún cambio en las fronteras anteriores a 1967, incluso en lo que respecta a Jerusalén, que no haya sido acordado por las partes mediante negociaciones, en particular velando por que los acuerdos que concierten con Israel no impliquen el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los territorios ocupados por Israel en 1967;
- b) Establezcan, en sus relaciones pertinentes, una distinción entre el territorio del Estado de Israel y los territorios ocupados desde 1967;
- c) No presten ayuda ni asistencia a las actividades ilegales de asentamiento, lo que incluye no prestar a Israel asistencia alguna que pueda usarse específicamente en relación con los asentamientos de los territorios ocupados, con arreglo a la resolución 465 (1980) del Consejo de Seguridad, de 1 de marzo de 1980;
- d) Respeten y velen por que se respete el derecho internacional en todas las circunstancias, incluso mediante la adopción de medidas de rendición de cuentas, de conformidad con el derecho internacional” (resolución 74/11 (2019)).

En su resolución 77/126, la Asamblea General también exhortó a

“todos los Estados a que, de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y las resoluciones pertinentes, no reconozcan la situación creada por medidas que son ilegales en virtud del derecho internacional, incluidas las encaminadas a promover la anexión en el Territorio Palestino

Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en los demás territorios árabes ocupados por Israel desde 1967, y a que no presten ayuda ni asistencia para mantener esa situación”;

mientras que, en la resolución 32/161 (1977), la Asamblea General instó a

“todos los Estados, las organizaciones internacionales, los organismos especializados, las sociedades de inversiones y todas las demás instituciones a que no reconozcan ninguna de las medidas adoptadas por Israel para explotar los recursos de los territorios ocupados o introducir cambios en la composición demográfica, el carácter geográfico o la estructura institucional de dichos territorios, y a que no cooperen con Israel o le presten asistencia alguna en la aplicación de esas medidas”.

278. Tomando nota de las resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General, la Corte considera que los Estados Miembros tienen la obligación de no reconocer ningún cambio en el carácter físico o la composición demográfica, la estructura institucional o el estatuto del territorio ocupado por Israel el 5 de junio de 1967, incluida Jerusalén Oriental, salvo que haya sido acordado por las partes mediante negociaciones, y de distinguir en sus relaciones con Israel entre el territorio del Estado de Israel y el territorio palestino ocupado desde 1967. La Corte considera que el deber de distinguir en sus relaciones con Israel entre su propio territorio y el Territorio Palestino Ocupado abarca, entre otras cosas, la obligación de abstenerse de mantener relaciones convencionales con Israel en todos los casos en que pretenda actuar en nombre del Territorio Palestino Ocupado o de una parte de él en asuntos que afecten al Territorio Palestino Ocupado o a una parte de su territorio; abstenerse de entablar relaciones económicas o comerciales con Israel en lo que respecta al Territorio Palestino Ocupado o partes de él que puedan afianzar su presencia ilegal en el territorio; abstenerse, en el establecimiento y mantenimiento de misiones diplomáticas en Israel, de cualquier reconocimiento de su presencia ilegal en el Territorio Palestino Ocupado; y adoptar medidas para impedir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el Territorio Palestino Ocupado (véase *Consecuencias jurídicas que tiene para los Estados la continuación de la presencia de Sudáfrica en Namibia (África Sudoccidental)*, no obstante lo dispuesto en la resolución 276 (1970) del Consejo de Seguridad, opinión consultiva, I.C.J. Reports 1971, págs. 55 y 56, párrs. 122 y 125 a 127).

279. Por otra parte, la Corte considera que, habida cuenta del carácter y la importancia de los derechos y obligaciones de que se trata, todos los Estados tienen la obligación de no reconocer como legal la situación derivada de la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado. Asimismo tienen la obligación de no prestar ayuda ni asistencia para mantener la situación creada por la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado. Corresponde a todos los Estados, dentro del respeto de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, velar por que se ponga fin a cualquier impedimento al ejercicio por el pueblo palestino de su derecho a la libre determinación resultante de la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado. Además, todos los Estados partes en el Cuarto Convenio de Ginebra tienen la obligación, dentro del respeto de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, de asegurar que Israel respete el derecho internacional humanitario consagrado en dicho Convenio.

C. Consecuencias jurídicas para las Naciones Unidas

280. Habida cuenta de las graves violaciones de obligaciones *erga omnes* en virtud del derecho internacional, el deber de no reconocimiento enunciado anteriormente también se aplica a las organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas. Como se ha observado más arriba, la Asamblea General ya ha instado, en algunas de sus resoluciones, a las organizaciones internacionales y los organismos especializados a que “no reconozcan ninguna de las medidas adoptadas por Israel para explotar los recursos de los territorios ocupados o introducir cambios en la composición demográfica, el carácter geográfico o la estructura institucional de dichos territorios, y a que no cooperen con Israel o le presten asistencia alguna en la aplicación de esas medidas” (resolución 32/161 (1977)). Teniendo en cuenta el carácter y la importancia de las obligaciones *erga omnes* que se ven afectadas por la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, la obligación de no reconocer como legal la situación derivada de la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado y la obligación de distinguir en sus relaciones con Israel entre el territorio de Israel y el Territorio Palestino Ocupado se aplican también a las Naciones Unidas.

281. Por último, la Corte considera que la cuestión de las modalidades precisas para poner fin a la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado debe ser tratada por la Asamblea General, que ha solicitado la presente opinión consultiva, y por el Consejo de Seguridad. Por consiguiente, corresponde a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad considerar qué medidas adicionales son necesarias para poner fin a la presencia ilegal de Israel, teniendo en cuenta la presente opinión consultiva.

*

282. La Corte considera importante destacar, como hizo en su opinión consultiva sobre el *Muro*,

“la urgente necesidad de que las Naciones Unidas en conjunto redoblen sus esfuerzos por lograr una rápida conclusión del conflicto israelo-palestino, que sigue planteando una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, y establecer de tal forma una paz justa y duradera en la región” (*I.C.J. Reports 2004 (I)*, pág. 200, párr. 161).

283. La Corte considera asimismo que la realización del derecho del pueblo palestino a la libre determinación, incluido su derecho a un Estado independiente y soberano, que conviva en paz con el Estado de Israel dentro de fronteras seguras y reconocidas para ambos Estados, tal como se contempla en las resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General, contribuiría a la estabilidad regional y a la seguridad de todos los Estados de Oriente Medio.

*

* *

284. La Corte subraya que su respuesta a las cuestiones planteadas por la Asamblea General se basa en la totalidad de los fundamentos jurídicos que ha expuesto anteriormente, cada uno de los cuales debe interpretarse a la luz de los demás, teniendo en cuenta la manera en que la Corte ha definido el alcance material, territorial y temporal de las preguntas (párrafos 72 a 83).

*

* *

285. Por las razones que anteceden,

LA CORTE,

1) Por unanimidad,

Declara que es competente para emitir la opinión consultiva solicitada;

2) Por catorce votos contra uno,

Decide dar curso a la solicitud de opinión consultiva;

A FAVOR: *Presidente* Salam; *Magistrados* Tomka, Abraham, Yusuf, Xue, Bhandari, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brant, Gómez Robledo, Cleveland, Aurescu, Tladi;

EN CONTRA: *Vicepresidenta* Sebutinde;

3) Por once votos contra cuatro,

Considera que la presencia continuada del Estado de Israel en el Territorio Palestino Ocupado es ilegal;

A FAVOR: *Presidente* Salam; *Magistrados* Yusuf, Xue, Bhandari, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brant, Gómez Robledo, Cleveland, Tladi;

EN CONTRA: *Vicepresidenta* Sebutinde; *Magistrados* Tomka, Abraham, Aurescu;

4) Por once votos contra cuatro,

Considera que el Estado de Israel tiene la obligación de poner fin a su presencia ilegal en el Territorio Palestino Ocupado lo antes posible;

A FAVOR: *Presidente* Salam; *Magistrados* Yusuf, Xue, Bhandari, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brant, Gómez Robledo, Cleveland, Tladi;

EN CONTRA: *Vicepresidenta* Sebutinde; *Magistrados* Tomka, Abraham, Aurescu;

5) Por catorce votos contra uno,

Considera que el Estado de Israel tiene la obligación de cesar de inmediato cualquier nueva actividad de asentamiento, y de evacuar a todos los colonos del Territorio Palestino Ocupado;

A FAVOR: *Presidente* Salam; *Magistrados* Tomka, Abraham, Yusuf, Xue, Bhandari, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brant, Gómez Robledo, Cleveland, Aurescu, Tladi;

EN CONTRA: *Vicepresidenta* Sebutinde;

6) Por catorce votos contra uno,

Considera que el Estado de Israel tiene la obligación de reparar los daños causados a todas las personas físicas o jurídicas afectadas en el Territorio Palestino Ocupado;

A FAVOR: *Presidente* Salam; *Magistrados* Tomka, Abraham, Yusuf, Xue, Bhandari, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brant, Gómez Robledo, Cleveland, Aurescu, Tladi;

EN CONTRA: *Vicepresidenta* Sebutinde;

7) Por doce votos contra tres,

Considera que todos los Estados tienen la obligación de no reconocer como legal la situación derivada de la presencia ilegal del Estado de Israel en el Territorio Palestino Ocupado y de no prestar ayuda o asistencia para mantener la situación creada por la presencia continuada del Estado de Israel en el Territorio Palestino Ocupado;

A FAVOR: *Presidente* Salam; *Magistrados* Tomka, Yusuf, Xue, Bhandari, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brant, Gómez Robledo, Cleveland, Tladi;

EN CONTRA: *Vicepresidenta* Sebutinde; *Magistrados* Abraham, Aurescu;

8) Por doce votos contra tres,

Considera que las organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas, tienen la obligación de no reconocer como legal la situación derivada de la presencia ilegal del Estado de Israel en el Territorio Palestino Ocupado;

A FAVOR: *Presidente* Salam; *Magistrados* Tomka, Yusuf, Xue, Bhandari, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brant, Gómez Robledo, Cleveland, Tladi;

EN CONTRA: *Vicepresidenta* Sebutinde; *Magistrados* Abraham, Aurescu;

9) Por doce votos contra tres,

Considera que las Naciones Unidas, y especialmente la Asamblea General, que ha solicitado la presente opinión, y el Consejo de Seguridad, deben examinar qué modalidades precisas y medidas adicionales son necesarias para poner fin lo antes posible a la presencia ilegal del Estado de Israel en el Territorio Palestino Ocupado.

A FAVOR: *Presidente* Salam; *Magistrados* Tomka, Yusuf, Xue, Bhandari, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brant, Gómez Robledo, Cleveland, Tladi;

EN CONTRA: *Vicepresidenta* Sebutinde; *Magistrados* Abraham, Aurescu.

Hecho en francés e inglés, siendo la inglesa la versión auténtica, en el Palacio de la Paz (La Haya) el 19 de julio de 2024, en dos ejemplares, uno de los cuales se depositará en los archivos de la Corte y el otro se remitirá al Secretario General de las Naciones Unidas.

(Firmado) Nawaf SALAM,
Presidente

(Firmado) Philippe GAUTIER,
Secretario.

El Presidente SALAM adjunta una declaración a la opinión consultiva de la Corte; la Vicepresidenta SEBUTINDE adjunta una opinión disidente a la opinión consultiva de la Corte; el Magistrado TOMKA adjunta una declaración a la opinión consultiva de la Corte; los Magistrados TOMKA, ABRAHAM y AURESCU adjuntan una opinión conjunta a la opinión consultiva de la Corte; el Magistrado Yusuf adjunta una opinión separada a la opinión consultiva de la Corte; la Magistrada Xue adjunta una declaración a la opinión consultiva de la Corte; los Magistrados IWASAWA y NOLTE adjuntan opiniones separadas a la opinión consultiva de la Corte; los Magistrados NOLTE y CLEVELAND adjuntan una declaración conjunta a la opinión consultiva de la Corte; los Magistrados CHARLESWORTH y BRANT adjuntan declaraciones a la opinión consultiva de la Corte; los Magistrados GÓMEZ ROBLEDÓ y CLEVELAND adjuntan opiniones separadas a la opinión consultiva de la Corte; el Magistrado TLADI adjunta una declaración a la opinión consultiva de la Corte.

(Rubricado) N.S.

(Rubricado) Ph.G.
